

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POST GRADO

**“LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS JUECES DE
PAZ EN LA REGIÓN CENTRO ANDINA”**

TESIS

**Para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en
Derecho Civil y Comercial**

AUTOR

Noe Rodecindo Ñahuinlla Alata

Lima - Perú

2015

Dedicatória:

A VILMA, mi madre, ser de gran amor, que supo inculcar en mí, sentimientos nobles de valor, con el mayor afecto, aprecio y cariño.

Dedicatoria:

A mi esposa AURORITA, fiel compañera, por su inmenso amor, el cual hace posible el desarrollo de mi vida personal, profesional con sentido social y humano.

Reconocimiento:

El reconocimiento y aprecio al distinguido Maestro Universitario Dr. FLORENCIO MIXAN MASS, por haberme brindado su amistad, así como inculcarme el Interés y pasión por la investigación científica. Dios lo tenga en su Gloria.

INDICE

RESUMEN	09
INTRODUCCION	12
CAPITULO I	18
1.1. Planteamiento del Problema	20
1.1.1. Formulación del problema	20
1.2. Fundamentación de la Investigación	21
1.2.1. Justificación	24
1.2.2. Factibilidad	25
1.3. Importancia de la Investigación Científica	27
1.4. Objetivo de la Investigación	30
1.4.1. Objetivo General	30
1.4.2. Objetivos Específicos	30
1.5. Planteamiento de Hipótesis	31
1.5.1. Hipótesis General	31
1.5.2. Hipótesis Específica	32
1.6. Inquietud Heurística del Autor	34
1.7. Exploración Preliminar Efectuada	42
1.8. Finalidad	44
1.8.1. Finalidad Primaria o Esencial	44
1.8.2. Finalidad Secundaria	46
1.8.3. Finalidad Específica	46

CAPITULO II: MARCO TEORICO	48
2.1. Marco Teórico o Conceptual	48
2.1.1. Teoría de la Fe Pública Notarial	48
2.2 La Teoría del Notario Público	54
2.2.1 El Notario Público en Nuestro Ordenamiento Jurídico	55
2.2.2 Supervisión y Acceso a la Función Notarial	57
2.2.3 Derecho Notarial Objeto y Contenido	58
2.2.4 Características del Derecho Notarial	58
2.2.5 Principios Propios del Derecho Notarial	59
2.3 La Teoría de los Documentos Notariales	61
2.4 Breve Historia del Notario Peruano	63
2.4.1 El Notario en el Derecho Incaico	63
2.4.2 El Notario en la Colonia	64
2.4.3 El Notario en la Republica	65
2.5 La Justicia de Paz en el Perú	67
2.6 La Teoría de la Función Notarial del Juez de Paz	75
2.7 Marco Jurídico Positivo	78
2.7.1 Constitución Política del Estado: Art. 143	78
2.7.2 Constitución Política del Estado: Art. 152	80
2.7.3 La Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 61 al 71	83
2.7.4 Decreto Legislativo N° 1049, la nueva Ley del Notario	85
2.7.5 Decreto Ley N° 26501, La Ley del Notario	89
2.8 La Interculturalidad Jurídica	90
2.8.1 Pluralidad Jurídica	90

2.8.2	Pluralidad Jurídica, Interculturalidad y Derecho	91
2.8.3	El Conflicto Intercultural	93
2.8.4	Barreras Sociales y Económicas	94
2.8.5	Barreras Culturales y Lingüísticas	96
2.8.6	Barrera de Género e Institucionales	98
2.8.7	Comunidad Andina y Justicia	99
2.8.8	Justicia de Paz e Interculturalidad.	100
2.9	Región y Distrito Judicial de Huancavelica	102
2.9.1	Región Huancavelica	102
2.9.2	Distrito Judicial de Huancavelica	102
2.9.3	Órganos Jurisdiccionales	103
2.10	Región y Distrito Judicial de Junín	104
2.10.1	Región Junin	104
2.10.2	Distrito Judicial de Junín	104
2.10.3	Órganos Jurisdiccionales	105
2.11	Región y Distrito Judicial de Ayacucho	107
2.11.1	Región Ayacucho	107
2.11.2	Distrito Judicial de Ayacucho Instalación	107
2.11.3	Órganos Jurisdiccionales	108
2.12	Región y Distrito Judicial de Apurímac	109
2.12.1	Región Apurímac	109
2.12.2	Distrito Judicial de Apurímac	110
2.12.3	Órganos Jurisdiccionales	110
2.13	Análisis e Interpretación del Derecho Comparado	111

2.13.1 La Justicia de Paz en el Derecho Comparado	112
2.13.1.1 Colombia	112
2.13.1.2 España	119
2.13.1.3 Ecuador	123
2.13.1.4 Bolivia	132
 CAPITULO III: METODOLOGIA.	
Metodología - Población –Muestra-Instrumentos-Variables	145
3.1. Material y Método	145
3.1.1. Metodología	145
3.1.1.1. Determinación del Método	145
3.2. Tipo y Nivel de la Investigación	145
3.2.1. Nivel de la Investigación	145
3.2.2. Por el Tiempo y Periodo del Estudio	146
3.2.3. Dimensión Espacial y Social	146
3.3. Diseño de la Investigación Científica	146
3.4. Estrategia de Prueba de Hipótesis	147
3.4.1. Muestra Poblacional	147
3.4.2. Técnica de Investigación	147
3.4.2.1. Técnicas	147
3.5. Delimitación de la Investigación	149
3.5.1. Delimitación Espacial	149
3.5.2. Delimitación Cuantitativa	150
3.6. Determinación del Tamaño de la Muestra	152

3.6.1. Muestra Poblacional	153
3.6.2. Unidad de Analisis	154
3.6.3. Clase de Muestra	154
3.6.4. Medición de Muestra	154
3.6.5. Técnicas y Procedimientos para la Recolección de la Información	155
3.6.6. Variables-Determinación	156
3.6.6.1. Variable Independiente	156
3.6.6.2. Variable Dependiente	157
3.6.7. Variable Concurrente	157
3.6.8. Variable, Tipo y Dimensión	157

CAPITULO IV: ANALISIS, PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Análisis, Presentación, Interpretación y Discusión de Resultados	158
4.2. Presentación de Resultados	158
4.3. Análisis y Presentación de los Resultados	175
4.4. Análisis, Contrastación y Verificación de Hipótesis	181
4.4.1. Hipótesis General	181
4.4.2. Hipótesis Específica	188
4.5. Resumen del Análisis, Contrastación y Verificación de Hipótesis	231

CONCLUSIONES	239
--------------	-----

RECOMENDACIONES	242
BIBLIOGRAFIA	244
ANEXO	253
Instrumento de Recopilación de Datos	254

RESUMEN

La Justicia de Paz a cargo de los ciudadanos más reconocidos de la comunidad, en la región andina tiene mayor desarrollo, el 73% de los jueces de paz está en dicha región (un 58% se dedica a la agricultura o a la ganadería). En los pueblos y comunidades de las regiones Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac en los últimos años se elige democráticamente.

El Juez de Paz conforme a la tradición y costumbres de su comunidad, con las competencias otorgadas, los conflictos los resuelve conforme a su leal saber y entender (equidad y justicia), no requieren conocer el Derecho ni ser Abogado.

Una de las competencias delegadas al Juez de Paz es la función notarial, previsto en el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la fecha con el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, además de otros trámites; sin tener en cuenta la realidad y diversidad de la justicia de paz en los pueblos o comunidades de nuestro país.

Lo cierto es que, el Juez de Paz viene incurriendo en inconducta funcional, actos de corrupción en el ejercicio de la función notarial. A causa de ello se les investiga administrativamente en las que incluso se les sanciona con Destitución, además de demandas, denuncias penales en contra de éstos; ello genera desprestigio y pérdida de la legitimidad lograda; realidad que no se está asumiendo con seriedad ni responsabilidad por el Poder Judicial.

Las causas o factores para la inconducta en la función notarial de los jueces de paz de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y el resto del país, son del orden cognitivo (conocimientos), conductual y la intervención de terceros (usuarios) que coadyuvan a la inadecuada actuación en dicha función.

Los conflictos sometidos al Juez de Paz los cumple conforme a su leal saber y entender; la función notarial no puede ejercer de esa manera, tiene que realizar

conforme al ordenamiento jurídico notarial de nuestro país, similar a la que cumple el Notario Público que es un profesional del Derecho.

En lo cognitivo incide el hecho de que, el mayor número de los jueces de paz de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac tienen una formación educativa-cultural del nivel primario, un porcentaje menor con educación secundaria y superior. Ello es un factor que da lugar a la actuación irregular, inconducta funcional, desconocimiento del trámite notarial; además la falta de capacitación y entrenamiento en la función notarial, que por diversas razones no se realiza los eventos de capacitación necesarios para dicha judicatura.

En las escasas capacitaciones no participan todos, en las 4 regiones se cuenta con 1198 jueces de paz, mayormente se realizan en la sede judicial principal, por la accidentada geografía, los gastos de traslado, ocupaciones personales y familiares son factores que impiden participar en capacitaciones y talleres.

Otro factor que incide en la inadecuada actuación de algunos jueces de paz en la función notarial es el aspecto conductual, el comportamiento contrario a la función pública, a los valores de transparencia, imparcialidad y honestidad que también afecta a dicha instancia judicial. La judicatura de paz también está incurriendo en actos de corrupción e inconducta funcional en los últimos años., las que tiene diversas motivaciones o causas.

Una de las causas es de carácter económico. El Juez de Paz no se explican los casos de corrupción de funcionarios y servidores que son rentados por el Estado. Ellos prestan un servicio gratuito, no tienen remuneración, están sus necesidades y apremios familiares. Por dicha situación, algunos jueces de paz al momento de ejercer la función notarial vienen incurriendo en trámites irregulares, actos de corrupción en el ejercicio de la función notarial, las que son por algún beneficio personal, percepción de un monto de dinero, en algunos casos por razones de amistad, parentesco, entre otras motivaciones.

Lo señalado se da en el trámite de las Escrituras Públicas Imperfectas, legalizaciones, certificaciones, licitaciones públicas y otros trámites, incumpliendo las formalidades y requisitos a realizar similar al que realiza un Notario Público, que muchas veces no son observadas por el Juez de Paz, generados en algunos casos por los usuarios, por algunos funcionarios y servidores públicos con la intención de beneficiarse económicamente, logrando hacer participar al citado Juez de Paz, quien también generalmente percibe algún estipendio económico.

La delegación de competencia de la función notarial al Juez de Paz en algunos casos acarrea consecuencias negativas, pérdida de legitimidad y otros, por falta de capacitación y entrenamiento permanente; el grado de formación educativa y cultural de los jueces de paz de los 4 Distritos Judiciales mencionados; las necesidades y dificultades económicas quienes en su mayoría no perciben un ingreso económico; la gratuidad del servicio notarial, son factores que inciden en las inconductas funcionales, además de que las Cortes Superiores no cuentan con una política de fiscalización y visitas a los jueces de paz .

Está el debate para que el Juez de Paz perciba un ingreso económico del Estado que permita experiencia y continuidad en el cargo. La designación es democrática, sin embargo su permanencia es temporal que, de alguna manera es una desventaja y repercute en la función jurisdiccional, más si en ese periodo no ha sido capacitado o entrenado por diversas razones. Antes el periodo del cargo fue por 2 años, la actual Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz lo amplía a 4 años, sin embargo la gratuidad es un factor que desanima a muchos ciudadanos asumir dicho cargo sin ninguna retribución económica, se conoce que en los últimos meses de numerosas renunciaciones por la ampliación del periodo a ejercer. Urge una política estatal que permita mayor acceso a la función notarial con la creación de mayor número de Notarías Públicas cercana a los pueblos y comunidades, con servicios y costos asequibles y razonables para los ciudadanos de las citadas 4 regiones andinas que se considera en la investigación.

ABSTRACT

The Justice of Peace in charge of the most recognized citizens of the community, in the Andean region has higher development, 73% of magistrates is in the region (58% are engaged in agriculture or livestock). In the towns and communities of Junin, Huancavelica, Ayacucho and Apurimac regions over the past year is democratically elected.

The Magistrate according to the tradition and customs of their community, with powers granted, resolves conflicts according to their knowledge (equity and justice) do not require knowing the law or be a lawyer.

One of the powers delegated to the Magistrate is the notarial function, provided for in art. 58 and 68 of the Organic Law of the Judiciary, to date the art. 17 of Law No. 29824 No. 29824 Law Justice of the Peace Act, and other procedures; regardless of the reality and diversity of the justice of peace in villages or communities of our country.

The truth is that the Magistrate is incurring functional misconduct, corruption in the exercise of the notarial function. Because of this they are investigating administratively in which they are even punishable by Recall also claims, criminal complaints against them; this causes loss of prestige and legitimacy achieved; Actually that is not taking seriously or responsibility for the judiciary.

The causes or factors for misconduct in the notarial function of JPs of Junin, Huancavelica, Ayacucho and Apurimac and the rest of the country are the cognitive behavior order (knowledge), and the intervention of third parties (users) that contribute to inadequate performance in that role.

Disputes submitted to the Magistrate's birthday according to his knowledge; notarial function can not exercise that way, has to perform under the notarial law of our country, similar to one that meets the Notary Public is a legal professional.

In the cognitive impact that the largest number of justices of the peace of Junin, Huancavelica, Ayacucho and Apurimac have an educational-cultural primary education, a lower percentage with secondary and higher education. This is a factor that leads to uneven performance, functional misconduct, lack of notarial procedure; besides the lack of training and training in the notarial function, which for various reasons not training events necessary for such judiciary performed.

In low skills not all participate in the 4 regions it has 1198 magistrates, mostly conducted in the principal judicial office, the rugged geography, relocation expenses, personal affairs and family are factors that prevent participation in trainings and workshops.

Another factor that affects the poor performance of some magistrates in the notarial function is the behavioral aspect, behavior contrary to public office, to the values of transparency, fairness and honesty that also affects this court. The judiciary peace is also committing acts of corruption and functional misconduct in recent years., Which has different motivations or causes.

One reason is economic. The Magistrate cases of corruption of officials and servers that are rented by the state are not explained. They provide a free service, without remuneration, are their needs and family constraints. For this situation, some magistrates when exercising the notarial function are incurring irregular procedures, corruption in the exercise of the notarial function, which are some personal benefit, perception of an amount of money, in some cases for reasons of friendship, kinship, among other motivations.

As indicated occurs in the process of Faulty Deeds, authorizations, certifications, bidding and other procedures, breach of formalities and requirements to conduct similar to that performed a Notary Public, which are often not observed by the Magistrate, generated in some cases by users, officials and public servants with

intent to benefit economically, achieving engaging the said Magistrate, who also generally perceived a stipend.

The delegation of power from the notarial function the Magistrate in some cases has negative consequences, loss of legitimacy and others, lack of training and ongoing training; the degree of educational and cultural formation of the magistrates of the 4 judicial districts mentioned; needs and economic difficulties most of whom do not receive an income; the gratuity of notarial service are factors affecting the functional misconduct, in addition to the Superior Courts do not have a control policy and visiting justices of the peace.

Is the debate so that the Magistrate receives an income from the State allowing experience and continuity in office. The designation is democratic, but their stay is temporary that somehow is a handicap and affects the judicial function, more if in that period has not been trained or trained for various reasons. Before the term of office was for two years, the current Law No. 29824 Peace Justice Act extends it to four years, however gratuity is a factor that discourages many people assume this position without any financial compensation, it is known that in recent months of numerous waivers extending the period to exercise. Urge state policy to allow greater access to the notarial function by creating greater number of Public Notaries near towns and communities, services and affordable and reasonable costs for citizens of those four Andean regions regarded research .

INTRODUCCIÓN

La presente Tesis titulada: **LA FUNCIÓN NOTARIAL DE LOS JUECES DE PAZ EN LA REGION CENTRO ANDINA**, nació de la experiencia directa de conocer y observar el desempeño en la función notarial, así como las innumerables deficiencias y irregularidades en la actuación jurisdiccional y labor administrativa de los Jueces de Paz en la región centro andino de nuestro país (Junín Huancavelica, Ayacucho y de Apurímac). Dicha realidad fáctica, así como sus vicisitudes son las motivaciones para acometer la presente investigación.

Es necesario señalar que la función notarial, conforme al ordenamiento jurídico de la materia normalmente es ejercida y forma parte de la competencia de los Notarios Públicos, fedatarios de la fe pública que no siempre están al alcance, de fácil acceso para la mayoría de los ciudadanos, entre ellos para los que son de los pueblos y comunidades lejanas de nuestro país, que están ubicados en lugares distantes al del Notario Público. Por ello se sostiene que dichas barreras para acceder a un Notario es una de las razones para que el legislador delegue dicha competencia primero al Juez de Paz Letrado así como al Juez de Paz.

La realidad señalada es una de las motivaciones que dio lugar a la realización de la presente investigación, relacionado con la función notarial de los jueces de paz, función delegada por mandato legal ya que dicha función notarial no es parte originaria de la judicatura de paz, menos de la justicia ordinaria. La delegación de la función notarial es por razones de orden geográfico, económica y social, factores que no facilitan el acceso a los Notarios Públicos y a los Jueces de Paz Letrados.

Para realizar la presente investigación, previamente realicé una indagación preliminar, averiguaciones y búsqueda de datos sobre los estudios, trabajos e investigaciones que se han realizado en nuestro medio, en el Poder Judicial o en los claustros universitarios sobre la función notarial que ejerce el Juez de Paz,

con la finalidad de evitar que la presente sea una más dentro de un conjunto de investigaciones y estudios, de esa forma evitar acaso la duplicidad de esfuerzos.

Como resultado de la indagación pude advertir que, sobre el tema no hay muchos estudios o investigaciones relacionado a la función notarial que cumple el Juez de Paz, en nuestro país no se vislumbra una preocupación o dedicación académica que permita afirmar lo contrario. Lo que existe son escasas referencias bibliográficas, breves artículos y monografías que informan en forma breve y tangencial respecto de la función notarial del citado Juez de Paz, por esa razón creo que es necesario generar y motivar estudios, investigaciones sobre la naturaleza, forma y condiciones en que ejercen dicha función.

Después de la decisión de realizar la presente investigación, planteado el problema de la investigación con relación a la función notarial del Juez de Paz, corresponde la formulación de la hipótesis, la determinación de las variables que se desprenden de éstas, los indicadores, el diseño de la investigación que, en concreto corresponden al modelo de una investigación descriptiva, explicativa y transversal, con el uso de indicadores del mundo empírico, con especial énfasis de la judicatura de paz de la región centro andina, habiéndose delimitado tanto en lo espacial, temporal, así como respecto a las muestras que se utilizan en el trabajo de investigación.

La experiencia personal de mi cercanía a los jueces de paz, en especial con los de la región Huancavelica, me ha permitido conocer que una de las funciones que cumplen en sus lugares de origen y poblados con dificultades y desaciertos está relacionado con la competencia de la función notarial que les faculta el art. 17 de la Ley de Justicia de Paz, el cual pretendo relevar con la presente investigación científica, con el objetivo de identificar, alertar, mejorar y superar los problemas que vienen suscitándose en el desempeño de la referida función notarial.

En esta perspectiva es necesario señalar que, la justicia de paz desde el inicio de la República fue desarrollándose y manteniéndose a través del tiempo, inicialmente denominado como Justicia de Paz no Letrada (ahora la denominación es de Juez de Paz); en segundo lugar, después de formar parte de los municipios, posteriormente fue incorporada al Poder Judicial del que forma parte de ella como una instancia no formal, ya que en su mayoría dicha judicatura de paz está a cargo de los ciudadanos más respetados y representativos de cada comunidad, sin la obligación de ser profesionales o expertos en Derecho, con la facultad para resolver conflictos en conciliación y equidad como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Justicia de Paz.

A pesar de que, el mayor número de los jueces de paz son legos en Derecho (no son Abogados), es el sector de la judicatura nacional que tiene mayor reconocimiento, legitimidad y aceptación social, por cuanto al resolver los conflictos y controversias los que asumen bajo el principio de equidad y justicia para lo cual imparten justicia mayormente conforme a su leal saber y entender. En ese orden de ideas más de 5,700 jueces de paz en todo el Perú vienen resolviendo los conflictos que se presentan en cada pueblo o comunidad, especialmente en los pueblos del interior del país conforme a las competencias asignadas por mandato legal.

El responsable de esta investigación, en mi condición de Juez de la región Huancavelica desde el año 2003, me ha dado la oportunidad de conocer en forma directa y permanente a la indicada instancia judicial. He compartido sus preocupaciones, comunicaciones y coordinaciones institucionales con los jueces de paz de Huancavelica, lo que me ha permitido conocer en forma directa de los aspectos relacionados a su elección, nombramiento, capacitación en el ejercicio de dicha función. La cercanía a ellos también me ha dado la oportunidad de conocer la realidad, las vicisitudes en la labor jurisdiccional, sus necesidades y como ejercen la función notarial conforme a la competencia delegada.

Si bien en los párrafos iniciales se da buenas referencias de dicha instancia judicial, también es cierto que en los últimos años se viene constatando serios problemas y dificultades en el funcionamiento y actuación de la judicatura de paz; en ese contexto no debemos pensar que la justicia de paz es todo color de rosa, que no tienen problemas. Por el contrario, en el desempeño de su cargo, los jueces de paz también están inmersos en las mismas dificultades y cuestionamientos que los demás jueces del Poder Judicial, con sus carencias, críticas del que son objeto al momento de impartir justicia en sus pueblos y comunidades.

A pesar de ello, en dicho contexto el Juez de Paz viene asumiendo nuevas competencias, casos de mayor complejidad y cuantía, que requieren mayor agudeza, criterio y percepción adecuada del conflicto sometido a su jurisdicción, con la exigencia y preparación necesarias para resolver los conflictos planteados por los justiciables de su comunidad.

Dentro del marco antes señalado, conocedor de dicha realidad y circunstancias de la justicia de paz, por la cercanía y compromiso con la judicatura de paz de la región andina, es que nace la inquietud de investigar desde una perspectiva científica respecto de una de las funciones que vienen desempeñando dichos jueces de paz, esto es lo relacionado a la función notarial. Por razones metodológicas la presente investigación está distribuida en cinco capítulos.

CAPITULO I: En el citado capítulo se hace referencia a la problematización del tema, la formulación del problema, la fundamentación e importancia del problema, así mismo se consideran aspectos de la factibilidad de la investigación, el objetivo general y los específicos, el planteamiento de la hipótesis, la inquietud heurística de la investigación, las motivaciones y razones que dieron lugar al análisis, preocupación y estudio de la citada judicatura de paz relacionado con la función notarial que cumplen; luego de ello se pasa señalar el enfoque preliminar y la finalidad de la investigación, de igual forma la

explicación del problema que son la razón y motivo de la presente investigación sobre la función notarial que asume el Juez de Paz.

CAPITULO II: En este capítulo se detalla el marco teórico y jurídico del tema de investigación, traducidas por las teorías explicativas o sistemáticas de ideas y conceptos del que se vale el investigador para realizar su tarea de investigación científica. Como se sabe, éstas son los principios, leyes, definiciones, las que están vinculadas entre sí, a través de conexiones de tipo lógico-formal. Las teorías de los que se valen en el trabajo de investigación, no sólo se contrastan con los hechos, sino también con otras teorías.

CAPITULO III: En este capítulo están considerados los puntos relacionados con la metodología de investigación científica, así como la identificación del diseño de investigación, la determinación del método, el tipo o el nivel de la investigación, la dimensión espacial y social, la delimitación de la investigación, la determinación de las muestras, las variables y la identificación de las variables.

CAPITULO IV: En el capítulo IV se hace la interpretación y análisis de la recopilación de la información, de las muestras obtenidas durante la investigación, el resultado de ellas, los datos estadísticos, las que se han recogido previamente en el desarrollo de la labor investigativa, con la ayuda y apoyo de los entidades administrativos y judiciales de los 4 Distritos Judiciales de la región centro andina citados, los que constituyen lo medular de la investigación por cuanto refleja el resultado de la misma.

CAPITULO V: En el capítulo en mención se realiza la presentación del resumen, las conclusiones al que se arriba que viene a ser el corolario de la investigación, producto del análisis y evaluación de la muestra e indicadores del trabajo; al final se formulan algunas recomendaciones. Se espera que las conclusiones pueden servir de referencia y de ser posible el inicio del debate y estudio sobre el trabajo de los jueces de paz en lo relacionado a la función notarial, las que podrían ser

tomados en consideración - si así lo estiman- tanto el Poder Legislativo, Ejecutivo y fundamentalmente el Poder Judicial, instituciones del Estado que pueden diseñar una política institucional por la que se considere al Juez de Paz con las mismas preeminencias y reconocimiento que sea a los Magistrados de la justicia ordinaria de nuestro país.

CAPITULO I.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Como he señalado antes, lo que pretende la presente investigación es conocer las razones, las causas por los cuales los jueces de paz- el Perú cuenta con más de 5700 jueces de paz ⁽¹⁾- no están dando el adecuado cumplimiento a la Función Notarial que les faculta el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz ⁽²⁾, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas legales que les faculta ejercer la función notarial, entre ellas la Ley de Títulos Valores y otros relacionados con la función notarial.

Dicha realidad jurídica social de los pueblos de la región centro andina del Perú es necesario conocer e investigar, saber las causas o factores que pueden estar generando dicha problemática en los pueblos andinos, las que cuentan con un juzgado de paz en su mayoría a cargo de un Juez de Paz lego en Derecho.

La justicia de paz tiene vicisitudes, dificultades y problemas que se dan al interior de ella, siendo una de ellas en el desempeño de la función notarial la que es materia de investigación. Es necesario saber cuáles son las causas y motivos que dan lugar a que el Juez de Paz actúe

¹ Revista Suyana, Corte Superior de Justicia de Junín, Fuente ONAJUP, Año IV, N° 4, pág. 59, en la que detalla el número de Jueces de Paz en cada uno de los Distritos Judiciales del país.

² Art. 17. Función Notarial. En los centros poblados donde no exista notario, el Juez de Paz está facultado para ejercer las siguientes funciones notariales: 1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asambleas las organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción; 2. Certificar firmas, copias de documentos, y libros de acta; 3. Escrituras de transferencia posesorias de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) unidades de referencia procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción; 4. Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de diez (10) unidades de referencia procesal; 5. Otorgamiento de constancias, referidas, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el Juez de Paz pueda verificar personalmente; 6. Protestos de falta de pago de los títulos valores. Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con los Colegios de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de los juzgados de paz que no puedan ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo del presente artículo. Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz constituyen documento público, conforme al Código Procesal Civil. Las actuaciones notariales de los Jueces de Paz son supervisados por el Consejo del Notariado.

inadecuadamente, con irregularidades en el ejercicio de la citada función; en algunos casos con perjuicio para terceras personas, afectando el principio de la seguridad jurídica. Es un tema de preocupación para el Estado, para los que conformamos el Poder Judicial, los legisladores, la sociedad en general, los ciudadanos y pueblos del ande peruano que exigen que sus conflictos, el acceso a la función notarial sea atendidos en sus lugares de origen.

Las consecuencias de las inconductas en las que incurren algunos jueces de paz ha dado lugar a que éstos sean investigados y sancionados administrativamente, además de denuncias y procesos penales que se les apertura y condenan; el inicio de acciones legales en la vía civil con demandas de nulidad de acto jurídico y otros, en razón de que en algunos actos y contratos ha participado un Juez de Paz, como se ha dado casos en la tramitación de una escritura de transferencia posesoria de bienes hasta un valor de hasta 50 unidades de referencia procesal (inciso 3 del art. 17 de la Ley No. 29824, denominado también escritura pública imperfecta conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial ⁽³⁾) en las que, se tiene que observar y cumplir con las exigencias y requisitos a cumplirse en dicho trámite como el que realizan los Notarios Públicos.

También hay casos de actuaciones del Juez de Paz que son cuestionados por su participación en la legalización de documentos privados y públicos; en la expedición de constancias de posesión respecto de bienes inmuebles sin la debida objetividad ni veracidad, por algún favorecimiento, en muchos casos motivados por factores ajenos a la ética judicial, así como en otras labores cuestionados que tienen relación con la función notarial ejercida por la judicatura de paz.

³ Actuación de carácter notarial facultado al Juez de Paz Letrado por el inciso 1) del art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que diligencian los Jueces de Paz de la región andina para la compra venta de bienes muebles e inmuebles, función similar al que cumplen los Notarios Públicos en las transacciones comerciales y con la respectiva Escritura Pública.

Es de suma importancia tomar en cuenta que, de por medio hay una realidad, circunstancias y situación crítica de la Justicia de Paz que no está siendo asumida menos conocida en su integridad, no es publicitada mediáticamente por los medios de comunicación, salvo algunos casos notorios en los que se ha descubierto casos flagrantes de incumplimiento o actuación irregular en el ejercicio de la función notarial que, como hemos señalado éstas son por diversos factores y causas. Es necesario asumir que lo resaltado es un problema de la judicatura nacional, por tanto un tema de preocupación para el sector justicia, toda vez que se conoce cotidianamente que algunos Jueces de Paz, por diversas razones vienen incurriendo en actuaciones irregulares que, al ser descubiertas o materia de quejad, la consecuencia es que en algunos casos los órganos de control del Poder Judicial inician investigaciones administrativas por presunta responsabilidad funcional, además de acciones por responsabilidad civil y penal si fuese necesario.

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Según el análisis situacional realizado y las afirmaciones presentadas nos planteamos el siguiente problema:

¿Por qué causas los Jueces de Paz de los Distritos Judiciales de la región centro andina: Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que le faculta el artículo 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz ?

1.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

La problemática de la justicia de paz respecto de la función notarial, requiere de atención y de compromiso inter institucional; una realidad es que las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín cuentan con un reducido número de Notarios Públicos, funcionarios de la fe pública que ejercen mayormente en la capital de región y las provincias.

Esta realidad evidencia que además de no contar con el número suficiente de Notarios Públicos, la formación y capacidad de los mismos dejan mucho que desear en tiempos del siglo XXI. Por ejemplo 4 Notarios Públicos de la región Huancavelica no son profesionales del Derecho, algunos de ellos son personas de avanzada edad, con limitaciones en la salud física y mental, sin una adecuada formación académica requerida para el desempeño eficiente de la función notarial, carecen de una permanente capacitación profesional para el ejercicio del Notariado, a pesar de que se busca mejorar todo ello con el Decreto Legislativo No. 1049, la nueva Ley del Notariado (⁴).

Como se ha descrito antes, además del escaso número de Notarios Públicos con los que cuenta Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, ellos ejercen la función notarial en la capital de la región y en las capitales de las provincias, no están siempre en los centros poblados, comunidades o distritos de dichas regiones.

Los ciudadanos que residen en lugares apartados, no tienen las facilidades del caso para acceder al servicio de un Notario Público, por la accidentada geografía de la serranía, las dificultades económicas, falta de vías y medios de comunicación, factores que no permiten acceder con

⁴ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 junio del 2008, que promulga el referido Decreto Legislativo que regula el Notariado en nuestro país.

toda facilidad a las ciudades capital de provincia y región donde están ubicadas mayormente las Notarías Públicas.

La realidad descrita, las barreras de acceso a la función notarial, es una de las razones por las que por disposición del art. 17 de la Ley No. 29824 (antes por normado en el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en primer término tienen competencia y están facultados para cumplir con la función notarial los Jueces de Paz Letrados que viene a ser los Magistrados de la carrera judicial ⁽⁵⁾ con la competencia y facultades para el otorgamiento de Escrituras Imperfectas, protestos de títulos valores y legalizaciones de documentos, firmas y demás competencias asignados a dicha judicatura.

Ese contexto es de conocimiento general que, por razones de política institucional del Poder Judicial, las sedes de los juzgados de paz letrados mayormente están en las capitales de provincias, de manera excepcional en los últimos años se vienen creando en algunos Distritos para facilitar el acceso a la justicia, como es el caso de los Juzgados de Paz Letrado en los distritos de Tantarán, Izcuchaca, Yauli, Acoria, Paucara, Santa Rosa, Curahuasi entre otros, las que han sido creados

⁵Art. 58 LOPJ. Funciones Notariales. “ Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince días continuos, tienen además respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: **1.- Escrituras Imperfectas.**- Llevar un registro en el que anota, mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotándose fecha y número de los recibos correspondientes. Anota asimismo su apreciación sobre la capacidad de los otorgantes. El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Las actas se extienden en estricto orden cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres. Asentada y firmada el acta, el Juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro así como de la fecha de inscripción en su registro. **2.-Protestos.**-Efectuar el protesto de letras de cambio y demás documentos susceptibles de esta diligencia, con las formalidades establecidas en la ley de la materia. De la diligencia se asienta un acta en el registro al que refiere el inciso anterior, en estricto orden cronológico. El Juez imprime el sello "protesto" o dicha palabra en cualquier otra forma, en el documento objeto de la diligencia. **3.- Legalizaciones.**- Legalizar las firmas de un documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos anteriores y poner la constancia en el documento firmado.

conforme al inciso 24 del artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (⁶).

Se reitera que, actualmente tanto las Notarías Públicas como la Justicia de Paz Letrada (a cargo de un Juez profesional) en su mayoría dichos juzgados también no están siempre cerca de los pobladores del ande, de los pueblos y comunidades andinas. Por dicha situación, en la perspectiva de facilitar el acceso a dicho servicio notarial es que, el legislador nacional ha considerado, antes con el art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la fecha con el art. de la Ley No. 29824 otorgar facultades y competencia a los Jueces de Paz (que son mayormente legos en Derecho) para el cumplimiento de la función notarial.

En ese contexto podemos señalar que, dicha competencia es una función notarial delegada, con una limitación razonable: el Juez de Paz para los efectos de asumir dicha función notarial, solamente la ejercerá cuando el lugar donde ejerce la judicatura de paz está distante a más de 10 Km. del lugar donde se encuentra el despacho de un Notario Público o un Juzgado de Paz Letrado.

La competencia de la función notarial que asumen los Jueces de Paz tiene muchas particularidades, variantes y dificultades del caso al momento de ejercer tan delicada labor. Estas situaciones fácticas se dan y seguirán dándose a pesar de los esfuerzos para mejorarlo, la consecuencia como es de prever es que a los jueces de paz se les inicia procesos de investigación administrativa y judicial. Algunas actuaciones cuestionadas en el cumplimiento de dicha función tiene como correlato los perjuicios para los que acuden al servicio notarial a cargo del Juez de Paz, incluso para terceras personas ajenas al trámite por la afectación de

⁶ Art. 82, inciso 24: *Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: ...inciso 24): Crear y suprimir Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando así lo requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia ...*.

sus bienes y derechos sin haber sido partícipe en el trámite notarial presuntamente irregular a cargo del Juez de Paz.

Por lo reseñado es que, con la investigación se busca conocer la realidad y vicisitudes del Juez de Paz en el cumplimiento de la función notarial. Con la hipótesis planteada, así como con los instrumentos y variables que se han obtenido durante el desarrollo de la investigación, se arribará a las conclusiones finales, previa contrastación de los resultados de la investigación con la hipótesis planteada.

1.2.1 JUSTIFICACION

Es posible que algún observador acucioso señale, cual es la razón por la que en la investigación se ha tomado como referencia de estudio sólo a los Jueces de Paz de la región centro andina. La justificación fundamental es que en dichas regiones la mayor parte de los Jueces de Paz (legos en derecho) vienen cumpliendo la función notarial- a falta de Notario -en las zonas rurales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, cuyos pobladores no tienen facilidades para acceder a los Notarios Públicos, ya que los despachos de éstos están ubicados en las capitales de región y provincias, mas no en los pueblos y comunidades de nuestro país.

No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que el país económicamente viene creciendo desde hace unos 20 años, también es una realidad que el crecimiento y el desarrollo que vive el Perú no repercute o no se trasunta con efectividad en los pueblos del interior, en regiones como las consideradas en la presente investigación, no sólo en lo económico y social, sino también en el sistema de administración de justicia.

Para la opinión pública, por el mensaje que dan las autoridades de los órganos de gobierno de las entidades judiciales, da la impresión y

aparición de que los Jueces de Paz son los que brindarán el real acceso al servicio de justicia; debe ser lo contrario, un Estado moderno con crecimiento económico y social, el servicio de justicia que brinda tiene que ser con calidad y seguridad, con facilidades de acceso a la función notarial, con efectiva inclusión social de todos los sectores como tiene que darse dentro de un Estado Constitucional de Derecho.

1.2.2 FACTIBILIDAD:

En la presente investigación, no he tenido demasiadas dificultades en la obtención de información, de los instrumentos, de los respectivos indicadores, en cuanto a la comunicación fluida y coordinación con los Jueces de Paz de las regiones de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac sobre el tema abordado en la investigación, los que han sido necesarios para poder contar y acumular los datos estadísticos, las que interpretadas adecuadamente nos ha permitido llegar a las conclusiones sobre la función notarial a cargo de dicha judicatura y con la posibilidad – en base a dicha información e instrumentos- de arribar a las conclusiones y sugerencias que se señalan sobre el particular.

Es necesario anotar que, el responsable de la presente investigación en mi condición de Magistrado de la Corte Superior de Huancavelica, con identificación y relación permanente con los señores Jueces de Paz, además de tener la ventaja de ser quechua hablante como lo son la mayoría personas que ejercen dicha judicatura y fundamentalmente por las relaciones fluidas con los de Huancavelica donde ejerzo la función jurisdiccional, he contado además con todas las facilidades, comunicación y apoyo permanente de la judicatura de paz de los Distritos Judiciales de Junín, Ayacucho y Apurímac regiones a las que he visitado por la labor de investigación.

Por lo mencionado líneas arriba, podemos concluir que he contado con todas las facilidades de acceso a la información, datos estadísticos y

archivos de los Jueces de Paz, así como al acervo documentario de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz ⁽⁷⁾ de los 4 Distritos Judiciales mencionados, por intermedio y con el apoyo de los respectivos responsables de la ODAJUP de las citadas Cortes Superiores.

Mencionar también que, mi compromiso, coordinación y apoyo a la justicia de paz se dio con mayor énfasis en los años 2005 y 2006 en el que ejercí el cargo de Presidente de Corte de Huancavelica. En dicho periodo en forma permanente, con ocasión de la creación de Juzgados de Paz, por la designación de nuevos Jueces de Paz, al tramitar y resolver las denuncias y quejas que se formulaban contra los citados jueces, en la realización de talleres, capacitaciones, labores de administración, apoyo logístico y otras actividades, son factores que me han permitido- agradeciendo dicha cercanía- mantener una relación y comunicación fluida permanente con ellos.

Finalmente señalar que, un sector de la judicatura de paz de Huancavelica al tener conocimiento de la presente investigación, del cual se enteraron en el momento de recibir y responder el cuestionario que se elaboró para la presente investigación, en las entrevistas personales con un sector de Jueces de Paz, ellos manifiestan el interés e inquietud de que la investigación es necesario y oportuna, señalando que se carece de información, conocimientos y las posibilidades de acceder a una capacitación idónea y adecuada para ejercer la función notarial.

En ese orden de ideas, los jueces de paz manifestaron también su interés de que en algún momento la investigación se pueda concretar en un material de lectura, que pueda servir de orientación, información y fundamentalmente de reflexión en el desempeño de la función notarial

⁷ El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con la Resolución Administrativa No. 150-2004-CE-PJ, con dicho acto administrativa crea la ONAJUP como una unidad orgánica de apoyo a la justicia de paz, además de la ODAJUP en cada uno de los Distritos Judiciales, que viene a ser la Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz, la que coordina con la Oficina nacional para el apoyo de la justicia de paz.

en cada uno de los pueblos donde ejercen la labor jurisdiccional y por ende la citada función notarial.

1.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La importancia de la presente investigación científica se sustenta en las implicancias y repercusiones que en su momento pueda modificar ciertos aspectos en el desempeño del Juez de Paz. Conociendo éstos nos permitirá esbozar conclusiones así como algunas recomendaciones y sugerencias para mejorar el servicio notarial que brindan los jueces de paz, función que deben ser ejercida con las garantías y formalidades que exige el ordenamiento jurídico notarial de nuestro país, en beneficio de los ciudadanos de la región centro andina, quienes acuden ante el Juez de Paz esperando una actuación similar al que realizaría un Notario Público.

En la investigación, además de la referencia de la labor jurisdiccional de los jueces de paz, se toma en cuenta también la realidad económica y social de nuestro país, especialmente de zonas andinas como son las regiones de Apurímac, Junín, Ayacucho y Huancavelica que, por sus características especiales de ubicación dentro del territorio nacional, desarrollo económico, de la situación de extrema pobreza que sufre una parte de sus pobladores, el centralismo y otros factores que inciden en el grado de desarrollo social y optimización de los recursos y potencialidades de la indicadas regiones, que arrastran serios problemas sociales y económicos ⁽⁸⁾.

Además de lo señalado en el plano jurídico social, si bien es cierto que la justicia de paz es un sector legitimado de la judicatura nacional y de reconocimiento social, en las regiones antes descritas así como en el contexto nacional, a pesar de ser una instancia no formal del Poder Judicial, ellos cumplen una labor importante en la búsqueda de la cultura

⁸ *Cifras de la pobreza: Huancavelica tiene el mayor índice de desnutrición crónica infantil de país con 54.6 por ciento de los niños menores de 5 años. Según Infobarómetro de la Primera Infancia, eso significa que más de 35,000 niños padecen de desnutrición; en Ayacucho: 21000 niños; Apurímac 32000 niños.*

de paz, tranquilidad entre los ciudadanos, el desarrollo de cada uno de los pueblos y comunidades de zonas más apartadas de nuestro país, pero también es cierto que tenemos que reconocer, asumir su realidad y mostrar sin engaños que en dicha judicatura existen serios problemas y dificultades en su desempeño. El Estado, la colectividad, los integrantes de la Jurisdicción no podemos soslayar, ni permitir que continúe empeorando la justicia de paz, es necesario asumir compromiso y voluntad de mejorar su labor, mantener la legitimidad lograda.

Lo cierto es que, los pueblos andinos, las comunidades campesinas y los distritos, generalmente cuentan con un Juez de Paz, quienes al ser requeridos por sus conciudadanos para resolver un conflicto o controversia, los asumen, se avocan y resuelven en su despacho. Dichos jueces en el mayor número de casos los resuelven conforme a su real saber y entender, con el criterio de justicia y equidad que todo ser humano tiene en su conciencia, aplican también los usos y costumbres del lugar, las formas tradicionales de solución de conflictos que se practican desde tiempos ancestrales, los que son elementos del pluralismo jurídico que se da y está inmerso en los pueblos andinos, los que se practican y seguirán siendo parte de la herencia cultural de nuestros pueblos originarios.

Por la tradicional y peculiar forma de impartir justicia, la judicatura de paz en años pasados se ha convertido en una de las instancias del Poder Judicial con mayor reconocimiento y legitimidad en los pueblos del ande, en el contexto nacional e internacional, con las funciones y competencias judiciales asignadas a dicha judicatura. En esa perspectiva de mantener dicha imagen, los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen la responsabilidad de preservar y mantener la legitimidad ganada, asumiendo con sentido crítico y constructivo la realidad actual, las dificultades y retos de la justicia de paz en estos tiempos.

Los jueces de paz asumen la competencia notarial por delegación normativa, reemplazando al Notario Público, con las competencias señalados en el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, desde el 03 de enero del año 2012 con el art. 17 de la Ley No. 29824, además de otras competencias que se les faculta al Juez de Paz, en asuntos de función notarial, las que se han venido incorporando e incrementando nuevas competencias legislativamente, como se da en la titulación de predios urbanos y rurales, prescritas en el Decreto Legislativo No. 667 ⁽⁹⁾ .

Al cumplir dicha función, en ocasiones puede ser por la costumbre, la falta de una adecuada capacitación, actualización y conocimientos sobre dicha función, el desconocimiento de la normatividad legal, también por alguna actuación dolosa o irregular del Juez de Paz se les apertura procesos judiciales, investigaciones penales y administrativos, en algunos casos están comprometidos terceras personas ajenas al Poder Judicial que solicitaron y participaron en el trámite del servicio notarial, al realizar una legalización, la expedición de una copia certificada, escrituras imperfectas, entre otros ⁽¹⁰⁾.

De ahí el interés de conocer con amplitud el cumplimiento, así como las dificultades que se viene dando en el ejercicio de dicha función delegada a los señores jueces de paz de la región centro andina de nuestro país.

Con la investigación se conocerá las razones por las que no cumplen adecuadamente la indicada función notarial, las que pueden ser

⁹ Conforme al art. 1 del citado Decreto Legislativo, se crea el Registro de Predios Rurales que formará parte del Registro Predial, conformado por los siguientes registros: a) el de Pueblos Jóvenes, b) el de Urbanizaciones Populares y, c) el de Predios Rurales. En el trámite de estos procedimientos el Juez de Paz tiene facultades para expedir constancias de posesión respecto de bienes inmuebles del lugar donde ejerce la judicatura.

¹⁰ Revista Suyana, Corte Superior de Justicia de Junín, fuente ONAJUP, Año IV N° 4, página 59, en la que, se releva la originalidad y formas ancestrales de resolver conflictos en la región central de nuestro país, especialmente en el valle del Mantaro.

por la carencia de talleres, falta de un adecuado entrenamiento y capacitación de los Jueces de Paz, o en todo caso por el comportamiento y conducta cuando asumen dicha función, entre otras causas y razones.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

Conocer las causas del inadecuado cumplimiento de la función notarial a cargo de los Jueces de Paz en la región centro andina del Perú: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, función en la que se viene dando inconductas funcionales, actuaciones irregulares en el ejercicio de la citada función notarial por razones de orden cognitivo y conductual.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Determinar el grado de formación cognitivo en el ámbito educativo-cultural de los Jueces de Paz de la región centro andina del Perú: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, las que influyen en la inconducta funcional que se da en el ejercicio de dicha función.
- Identificar el factor cognitivo de instrucción académica de los Jueces de Paz de la región centro andina del Perú: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, que genera que incurran en el cumplimiento inadecuado de la función notarial.
- Conocer las condiciones socio-económico de los Jueces de Paz de la región centro andina del Perú: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y su relación con la función notarial que cumplen.

- Precisar las condiciones reales de capacitación, adiestramiento para destrezas y competencias, talleres para los Jueces de Paz de la región centro andina del Perú: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac para cumplir la función notarial en las comunidades campesinas y pueblos en la región centro andina del Perú.
- Reconocer el factor conductual en el ámbito de las debilidades y falta de compromiso de los Jueces de Paz de la región centro andina del Perú que, da lugar a que incurran en el cumplimiento inadecuado de la función notarial, en el que se le asigna competencia.

1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL

Ho: No es cierto que, los Jueces de Paz del Distrito Judicial de: Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones de orden cognitivo y conductual.

H1: Es cierto que, los Jueces de Paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones de orden cognitivo y conductual.

1.5.2 HIPOTESIS ESPÉCIFICA

Ho: No es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el Artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones de formación cognitivo en el ámbito educativo- cultural.

H1₁: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz, por razones de formación cognitivo en el ámbito educativo- cultural.

Ho: No es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones del factor cognitivos de instrucción académica.

H1₂: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones del factor cognitivos de instrucción académica.

Ho: No es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones socio-económicas.

H13: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones socio-económicas.

Ho: No es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones cognitivo-conductual, en el ámbito de entrenamiento mediante talleres para el desarrollo de destrezas y competencias.

H14: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, no están dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones cognitivo-conductual, en el ámbito de entrenamiento, mediante talleres, para el desarrollo de destrezas y competencias.

Ho: No es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz por razones del factor conductual, en el ámbito de las debilidades y falta de compromiso.

H15: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, no estén dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el Artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones del factor conductual en el ámbito de las debilidades y falta de compromiso.

1.6 INQUIETUD HEURISTICA DEL AUTOR

En el Perú, de acuerdo a la información que proporciona la Oficina Nacional de Apoyo a la justicia de paz ONAJUP, ente que es parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se tiene actualmente más de 5,700 jueces de paz (¹¹), de este total, el Distrito Judicial de Huancavelica cuenta a la fecha con 206 Juzgados de Paz, Ayacucho con 295, Junín 464 y Apurímac con 233 Jueces de Paz.

Además de las demás competencias (civil, penal) asignadas por la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, anteriormente con la Ley Orgánica del Poder Judicial- entre otras funciones - a falta de un número suficiente de Notarios Públicos y Jueces de Paz Letrados en los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, al igual que en las demás Cortes Superiores del Perú, los señores Jueces de Paz en sus lugares de origen y comunidades vienen cumpliendo funciones notariales, las que están facultados por lo normado en el Artículo 17 de la ley 29824 Ley de Justicia de Paz (antes por lo normado en el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Por la cercanía de la mencionada instancia judicial y la realidad de la judicatura de paz, nace la inquietud y a la vez la preocupación académica para realizar la presente investigación relacionado a la función notarial que ejerce el Juez de Paz, judicatura que tiene sus particularidades y forma de actuar, con la finalidad de conocer en toda su amplitud cómo están ejerciendo dicha función notarial, si la cumplen adecuadamente y conforme al ordenamiento jurídico de la materia, entre otros aspectos.

¹¹ Revista Suyana, Corte Superior de Justicia de Junín, Fuente ONAJUP, Año IV, N° 4, pág. 59, en la que detalla el número de Jueces de Paz en cada uno de los Distritos Judiciales del país.

El conocimiento de una parte de la realidad social y jurídica de nuestro país, entre éstos la resolución de conflictos en los lugares apartados de nuestro país, en especial en la sierra y selva a cargo del Juez de Paz, también es una forma de acercamiento y comprensión de la función notarial facultada a dicha instancia judicial, con la evaluación y análisis de la actividad que realizan, los problemas y dificultades en dicha función.

Por ello es que me formulé la siguiente pregunta: ¿De qué manera, con qué medios y con qué tipo de formación, preparación o capacitación cumplen los jueces de paz dicha función ?. A la vez encontrar una posibilidad de respuesta: Cuáles pueden ser las causas o motivos por las que los jueces de paz incurren en deficiencias, irregularidades y desaciertos en esta parte del Perú (Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) al ejercer la función notarial ?.

Lo que se señala líneas arriba, tiene relación con una problemática de la justicia de paz que viene suscitándose en los últimos años, que nos preocupa y debe ser asumido especialmente por los órganos del gobierno del Poder Judicial: la Corte Suprema de la República y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (¹²), el hecho concreto de que, los jueces de paz en el cumplimiento de la función notarial vienen siendo cuestionados, denunciados, procesados judicialmente, así como administrativamente.

A consecuencia de las quejas formuladas contra algunos jueces de paz por presunta actuación irregular, se les ha instaurado procesos de Investigación administrativa; aparte existen casos con apertura de procesos penales en los casos que revisten presunta conducta dolosa e internacionalidad, también está la interposición de demandas en procesos

¹² Conforme a lo normado en los artículos 73 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son los órganos de gobierno de la Jurisdicción en nuestro país, la que tiene entre sus funciones, entre otros la creación de los Juzgados de Paz en todo el territorio nacional.

civiles supuestamente por haber incurrido en inconductas funcionales en el ejercicio de su cargo. En muchos casos, al final de los citados procesos se ha probado y establecido la respectiva responsabilidad civil, penal y administrativa, lo cual es consecuencia de que el Juez de Paz ha incurrido en actos irregulares, reñidos con el ordenamiento jurídico, la ética y transparencia en el ejercicio de la función notarial.

En los últimos años, por información de la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial OCMA, además de las medidas disciplinarias impuestas y por imponerse a los Magistrados de carrera del Poder Judicial por inconducta funcional que es lo más frecuente; también un grupo de 41 Jueces de Paz de la zona del altiplano puneño están siendo investigados, en los respectivos procesos disciplinarios, algunas con medidas de abstención en el cargo por responsabilidad derivada de la función notarial. Esos datos y los hechos irregulares que se detalla, es una muestra de que la justicia de paz también está con serios problemas y cuestionamientos en su actuación judicial ⁽¹³⁾.

Esto es preocupante, ya que los problemas de corrupción e inconducta funcional, también se dan y se vienen dando en la judicatura de paz. En una reciente encuesta de la Universidad Católica realizado en Lima, el 50% de los consultados creen que la corrupción es el principal problema del Poder Judicial. Para ello, la OCMA viene intensificando la fiscalización de aquellos magistrados y auxiliares que incurren en

¹³ *Diario el Comercio del 18 Diciembre 2010. pág. A14: OCMA separa a 18 Jueces de Puno por parcializarse en procesos. Habrían permitido transferir a terceros vehículos de dudosa procedencia. Por haber tramitado procesos judiciales supuestamente irregulares al final de los cuales los denunciados transferían camionetas y autos de dudosa procedencia en pago de deudas contraídas con los demandantes, OCMA que preside la Dra. Elcira Vásquez Cortez, dispuso la separación temporal en el cargo de 18 Jueces de Paz Letrados, No Letrados y Mixtos del Departamento de Puno. La drástica medida fue tomado por la Jefe de OCMA...*

inconductas funcionales. A la fecha existen 99 abstenciones en el cargo contra auxiliares judiciales, 85 a Magistrados y 41 a jueces de paz (¹⁴).

Por estas consideraciones, el tema materia de la presente investigación resulta inquietante, a la vez interesante y de preocupación institucional, por cuanto describe cómo está trabajando la justicia de paz en los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac, las que están ubicados en la región andina que se considera en la presente investigación.

La citada problemática de la justicia de paz requiere ser atendida, con el compromiso orientado a mejorar la función notarial del Juez de Paz, que tiene relación con el escaso número de Notarios Públicos en las indicadas regiones, por ejemplo en Huancavelica cuenta solo con 7 Notarios Públicos: sólo 2 son profesionales del Derecho, el resto Notarios antiguos.

Esta realidad evidencia que los citados Distritos Judiciales no cuentan con el número suficiente de Notarios Públicos, sin dejar de mencionar sobre la formación y capacidad de los mismos que dejan mucho que desear en el siglo XXI. Cinco (5) Notarios Públicos de la región Huancavelica no son profesionales del Derecho, algunos de ellos personas de avanzada edad, con limitaciones físicas hasta psicológicas, sin una adecuada formación ni la capacitación profesional para el ejercicio del Notariado, a pesar de que se busca mejorar todo ello con el del Decreto Legislativo No. 1049, la nueva Ley del Notariado (¹⁵).

¹⁴ Conforme el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura OCMA tiene como función investigar regularmente la conducta funcional, idoneidad y el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial; dicha facultad conforme a la normatividad referida no excluye la evaluación permanente que tiene que ejercer los órganos jurisdiccionales al conocer los procesos en grado. A dicho órgano de control lo jefatura un Juez Supremo Titular por un periodo de tres años.

¹⁵ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 junio 2008, que promulga el referido Decreto Legislativo que regula el Notariado en nuestro país, la misma que ha sido emitida dentro de la política del

Los Notarios Públicos en su mayor parte de ellos ejercen la función notarial en la capital de la región y en las provincias, no están en los centros poblados, comunidades o distritos de las regiones, por ese factor los ciudadanos que residen en lugares apartados no tienen las facilidades para acceder al servicio de un Notario Público, por la accidentada geografía de la serranía, las dificultades económicas, la falta de vías y medios de comunicación, vienen a ser uno de los factores que no permiten llegar con facilidad a las ciudades donde están ubicados las Notarías Públicas.

La realidad antes descrita de las citadas regiones, da lugar a que la función notarial está centrado en la capital de las provincias, constituye una de las razones para que legislativamente se haya dispuesto con el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se faculta los Jueces de Paz Letrados asumir la función notarial, como Magistrados de la carrera judicial (¹⁶), con las competencias fijados normativamente para el trámite y ejercicio en el otorgamiento de Escrituras Imperfectas, Protestos de títulos

Estado de la modernización y actualización de las relaciones comerciales, sociales y económicas, a raíz de su crecimiento económico.

¹⁶ Art. 58 LOPJ. Funciones Notariales. “ Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince días continuos, tienen además respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: **1.- Escrituras Imperfectas.**-Llevar un registro en el que anota, mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotándose fecha y número de los recibos correspondientes. Anota asimismo su apreciación sobre la capacidad de los otorgantes. El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Las actas se extienden en estricto orden cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres. Asentada y firmada el acta, el Juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro así como de la fecha de inscripción en su registro. **2.-Protestos.**-Efectuar el protesto de letras de cambio y demás documentos susceptibles de esta diligencia, con las formalidades establecidas en la ley de la materia. De la diligencia se asienta un acta en el registro al que refiere el inciso anterior, en estricto orden cronológico. El Juez imprime el sello "protesto" o dicha palabra en cualquier otra forma, en el documento objeto de la diligencia. **3.- Legalizaciones.**- Legalizar las firmas de un documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos anteriores y poner la constancia en el documento firmado.

valores, Legalizaciones de documentos y firmas, entre otras nuevas competencias que se viene asignando en los últimos años.

Como es de conocimiento general, por razones de política institucional del Poder Judicial con relación a la ubicación de los órganos jurisdiccionales, las sedes de los Juzgados de Paz Letrados están mayormente en las capitales de provincias, en los últimos años se han creado en algunos Distritos para facilitar el acceso a la justicia. Es el caso de los Juzgados de Paz Letrado del distrito de Tantará, Izcuchaca, Yauli, Acoria y Paucará, Santa Rosa, Vinchos, Salcabamba entre otros, que han sido creados conforme al inc. 24 del art. 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (¹⁷).

Es de señalar que, la justicia de paz letrada (a cargo de un Juez profesional), en su mayoría no están cerca de los pobladores del ande, de sus pueblos y comunidades. Por dicha situación, en la perspectiva de facilitar el acceso a dicho servicio notarial es que el legislador nacional- antes de la promulgación de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz- mediante el art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- adicionalmente otorgó facultades y la respectiva competencia a los jueces de paz (que mayormente son legos en Derecho) para el cumplimiento de la citada función notarial.

En ese contexto podemos señalar que, dicha competencia es una función notarial delegada, con una limitación razonable y entendible: el Juez de Paz para asumir dicha función notarial, solamente la ejercerá cuando el lugar donde ejerce la judicatura de paz está distante a más de 10 Km. del lugar donde se encuentra el despacho de un Notario Público o un Juzgado de Paz Letrado.

¹⁷ Art. 82, inciso 24: *Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: ...inciso 24): Crear y suprimir Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando así lo requiera para la mas rápida y eficaz administración de justicia ...". Es un órgano colegiado conformado por 3 Jueces Supremos, un representante de los Jueces Superiores, Juez de primera instancia y de los Colegios de Abogados.*

La competencia de la función notarial que asumen los Jueces de Paz, como hemos señalado antes tiene muchas particularidades, variantes y las dificultades del caso al momento de ejercer tan delicada labor. Estas situaciones fácticas se dan y seguirán dándose a pesar de los esfuerzos para mejorar ello; la consecuencia es que a los jueces legos se les inicia y bien iniciándose procesos de investigación administrativa y judicial.

Por lo reseñado es que, con la investigación se pretende conocer la realidad, las peripecias y vicisitudes del Juez de Paz en el desarrollo y cumplimiento de la función de carácter notarial. Con la hipótesis planteada, así como con los instrumentos y variables que se ha obtenido durante el desarrollo de la investigación científica nos permitirá llegar a las conclusiones finales, a las que se arriba previa contrastación de los resultados de la investigación con la hipótesis planteada.

Conociendo éstos, nos permitirá esbozar conclusiones así como algunas recomendaciones, sugerencias y medidas para mejorar el servicio notarial que prestan los jueces de paz, función que deben ser ejercida con las garantías y formalidades que exige el ordenamiento jurídico notarial, en beneficio de los ciudadanos de la región centro andina quienes acuden solicitando al Juez de Paz una actuación similar al que realizaría un Notario Público.

En la investigación, además de la labor jurisdiccional de los jueces de paz se toma en cuenta también la realidad económica y social de las regiones de Apurímac, Junín, Ayacucho y Huancavelica que, por sus características especiales de ubicación dentro del territorio nacional, desarrollo económico, situación de extrema pobreza de una parte de sus pobladores, el centralismo y otros, son factores que inciden en el grado de desarrollo social y optimización de los recursos y potencialidades de las

indicadas regiones, que arrastran serios problemas sociales y económicos⁽¹⁸⁾.

En ese contexto, si bien es cierto que la Justicia de Paz es un sector legitimado, con reconocimiento social en las regiones antes descritas, así como en el contexto nacional, siendo una instancia no formal del Poder Judicial ellos cumplen una labor fundamental en la búsqueda de la cultura de paz y tranquilidad de los ciudadanos, coopera con el desarrollo de los pueblos y comunidades, pero a la vez es necesario asumir su realidad y problemas actuales, lo que no podemos soslayar, menos permitir que continúe empeorando dicha situación, se requiere compromiso y voluntad de mejorar y velar para mantener la legitimidad obtenida.

Los pueblos y las comunidades del ande generalmente cuentan con un Juez de Paz, quienes al ser requeridos por sus conciudadanos por un conflicto o controversia, asume competencia y resuelve conforme a su real saber y entender con el criterio de justicia y equidad, aplicando los usos y costumbres del lugar, con las formas tradicionales de solución de conflictos que se practican desde tiempos ancestrales, los que se vienen practicando y seguirán haciendo como parte de su herencia cultural.

En esta labor, una de las funciones asignadas a los jueces de paz es la competencia Notarial por delegación normativa legal, reemplaza al Notario Público, con las competencias previstas en el art. 17 de la Ley No. 29824 (antes la regulaba el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), además de otras competencias que se les viene otorgando al Juez de Paz en asuntos relacionados a la función notarial, las que se bien incrementando en nuestra legislación, podemos mencionar el caso de la

¹⁸ *Cifras de la pobreza: Huancavelica tiene el mayor índice de desnutrición crónica infantil de país con 54.6 por ciento de los niños menores de 5 años. Según Infobarómetro de la Primera Infancia, eso significa que mas de 35,000 niños padecen de desnutrición; en Ayacucho: 21000 niños; Apurímac 32000 niños.*

participación del Juez de Paz en la titulación de predios urbanos y rurales prevista en el Decreto Legislativo No. 667 ⁽¹⁹⁾ .

Al cumplir dicha labor, quizás puede ser por la costumbre, la falta de capacitación y entrenamiento, por el desconocimiento de la normatividad notarial de nuestro país, acaso por la actuación dolosa o irregular del Juez de Paz se han iniciado procesos judiciales, investigaciones penales y administrativos por presunta actuación irregular en el trámite de una legalización, la expedición de una copia certificada, escrituras imperfectas, entre otros trámites notariales⁽²⁰⁾.

1.7 EXPLORACIÓN PRELIMINAR EFECTUADA:

Realizado una indagación previa referente a los estudios e investigaciones realizados, trabajos de los doctrinarios sobre la justicia de paz, podemos señalar que las investigaciones y estudios que se han realizado y los que vienen realizándose a la fecha sobre la función notarial del Juez de Paz en nuestro país, además de que tengan relación con las de la región andina, son muy escasas y exiguas. La mayor parte de las que he podido verificar se han centrado en estudios generales de carácter sociológico, en las resaltan su funcionamiento, la naturaleza, las características y la originalidad en el desempeño de dicha judicatura, entre otros aspectos generales.

Por ello podemos enfatizar y aseverar que, de la información recogida de los especialistas, así como de lo indagado dentro del entorno académico y jurídico de nuestro país sobre los estudios, investigaciones y tesis relacionados concretamente con la función notarial que les faculta el

¹⁹ Conforme al art. 1 del citado Decreto Legislativo, se crea el Registro de Predios Rurales que formará parte del Registro Predial, conformado por los siguientes registros: a) el de Pueblos Jóvenes, b) el de Urbanizaciones Populares y, c) el de Predios Rurales. En el trámite de estos procedimientos el Juez de Paz tiene facultades para expedir constancias de posesión respecto de bienes inmuebles del lugar donde ejerce la judicatura.

²⁰ Revista Suyana, Corte Superior de Justicia de Junín, fuente ONAJUP, Año IV N° 4, página 59, en la que, se releva la originalidad y formas ancestrales de resolver conflictos en la región central de nuestro país, especialmente en el valle del Mantaro.,

ordenamiento jurídico a los Jueces de Paz, podemos concluir que es mínima, es un tema que no ha sido abordado en forma permanente.

En algunos comentarios y estudios acerca de la judicatura de paz de nuestro país se hacen referencias generales sobre la función notarial ejercida. En algunos artículos periodísticos, revistas y libros que hemos podido verificar, por ejemplo en el libro editado por el Instituto de Defensa Legal IDL titulado “La Justicia de Paz en los Andes-Estudio Regional”, en el punto 4.1.6 del citado libro se consigna algunas precisiones genéricas sobre la competencia notarial del Juez de Paz, en forma muy resumida en 9 líneas hace referencia sobre la referida función que prácticamente es una repetición de lo normado en los art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (²¹).

Por lo expuesto antes, esperamos que la presente investigación pueda servir y constituir un aporte, un esfuerzo y por qué no un punto de partida para que se genere debate, estudio y preocupación sobre las competencias delegadas al Juez de Paz en la función notarial, de esa forma resaltar, describir y mostrar una realidad socio jurídica poco conocida en nuestro país sobre la justicia de paz especialmente respecto a la indicada función notarial que le asigna el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, anteriormente la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás disposiciones legales relacionados a la mencionada función vigentes en el Perú. Este debate debe incluir también al Notariado nacional cuya función es la que finalmente cumplen el Juez de Paz en nuestro país, por cuanto dicho servicio no está siempre al alcance de todos los peruanos.

²¹ IDL, *La Justicia de Paz en los Andes*, 2005, Pág. 160, es una publicación en la que hace referencia a los 2 citados normas legales, como es la competencia notarial facultada en primer lugar a los Jueces de Paz Letrado; el art. 68 de la LOPJ dispone “Los Jueces de Paz tienen las mismas funciones notariales que los Jueces de Paz Letrados, dentro del ámbito de su competencia”.

Lo ideal sería poner en relieve las implicancias y las relaciones con temas vinculados con la seguridad jurídica, la labor de Notario Público que están brindando los Jueces de Paz en asuntos relacionados al tráfico comercial de bienes muebles e inmuebles, derecho de familia, así como en los actos y contratos relacionados con derechos reales de los usuarios que acuden ante el Juez de Paz. También es necesario indicar que la función notarial a cargo del Notario Público, ahora ejercida por el Juez de Paz tiene relación y está ligado con las actividades del campo del Derecho Comercial y Empresarial, cuando éstos asumen competencias y facultades en dicha función para diligenciar los protestos de títulos valores en las que también tiene competencia la judicatura de Juez de Paz ⁽²²⁾.

Como resultado del debate que debe darse con los respectivos estudios, con la opinión de las instituciones vinculadas con la función notarial, entre ellos los Colegios de Notarios, los mismos Notarios Públicos, los órganos de gobierno del poder judicial, los Colegios de Abogados, la sociedad civil, es factible que la representación parlamentaria de nuestro país promulgue dispositivos legales pertinentes, se establezca políticas públicas para definir y regular dicha competencia que permita mantener el reconocimiento y legitimidad del Juez de Paz, en la perspectiva también de mejorar el mencionado servicio notarial a cargo de la referida autoridad judicial

1.8 FINALIDAD

1.8.1 FINALIDAD PRIMARIA O ESENCIAL

La finalidad de la presente investigación científica, es establecer las razones por las que los Jueces de Paz en los

²² Ley No. 27287, Ley de Títulos Valores, en su art. 74.1, prescribe que el Protesto será efectuado mediante notificación dirigida al obligado principal: a) Por Notario o sus Secretarios, b) Por el Juez de Paz del distrito correspondiente, sólo en caso de no haber Notario en la plaza...”. Por dicha normativa, si bien en pocas ocasiones los Jueces de Paz intervienen en el diligenciamiento de Protesto de títulos valores

Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función Notarial que les faculta el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz (anteriormente previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), la Ley de Títulos Valores y otros dispositivos legales relacionados con la función notarial.

En ese orden de ideas, la presente investigación científica tiene por finalidad conocer la realidad, así como los problemas que vienen suscitándose en el ejercicio de la función notarial a cargo de los Jueces de Paz, para que de esa manera considerando las variables aplicadas, interpretando y tabulando los instrumentos e indicadores, arribar a las conclusiones, con la formulación de algunas sugerencias y propuestas, en la perspectiva de que los Jueces de Paz de Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y por qué no de otros distritos judiciales puedan cumplir con criterio, eficacia, en forma adecuada y conforme a lo prescrito en el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley No. 27287 Ley de Títulos Valores y las demás normas legales que regulan la función notarial a cargo de la judicatura de paz.

Es de esperarse también que, la presente investigación genere el debate, intercambio de opiniones y experiencias respecto a la función notarial, con la posibilidad de que pudiera ser tomado en cuenta por la judicatura de paz de regiones similares a la región centro andina en especial de otras zonas de nuestro país en las que posiblemente haya similitudes en dicha labor, pero a la vez con las mismas dificultades y vicisitudes que se evidencia en la región centro andina del Perú.

En conclusión, la finalidad de la investigación científica es establecer y delinear las razones por las cuales los Jueces de Paz de los distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les facultada el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, antes previsto en los artículos 58 y 68 de la ley Orgánica del Poder Judicial, leyes especiales (²³), dificultades que son notorias a la vez preocupante en los últimos años.

1.8.2 FINALIDAD SECUNDARIA

La finalidad de esta investigación científica es conocer con mayor amplitud y rigurosidad la naturaleza y realidad de la función notarial que cumplen los jueces de paz en los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, en la perspectiva de que dicha labor y competencia se realice adecuadamente y acorde a estos tiempos. Se espera que en siglo XXI la labor de la judicatura de paz continúe manteniéndose reconocida, eficiente, con las garantías de la seguridad jurídica que corresponde, pero sin perder de vista que últimamente ha perdido prestigio, la legitimidad dentro de la ciudadanía a pesar de que no son rentados, mucho menos perciben algún estipendio del Estado en el cumplimiento de dicha labor judicial ni en la función notarial.

1.8.3 FINALIDAD ESPECÍFICA

- Diseñar una política institucional para los jueces de paz, en la que uno de sus componentes sea la posibilidad y se efectivice la oportunidad de actualizarlos y capacitarlos en sus

²³ Ley No. 27287, Ley de Títulos Valores, promulgada el 19 de junio del 2000, norma que brinda una versión amplia de los diferentes conceptos y reglas fundamentales que hacen posible que los títulos valores cumplan su función, teniendo derechos de exigir el pago de la prestación contenida en el título. Permitiendo entender los diferentes valores específicos como son: letra de cambio, el pagare, la factura conformada, el cheque, certificado bancario de moneda extranjera y de moneda nacional; ya que el título valor sirve a la persona natural como también a las personas jurídicas.

respectivos Distritos Judiciales, así como otras actividades que propendan mejorar la situación de la judicatura de paz de la región centro andina de nuestro país.

- Evitar mediante mecanismos adecuados de control, con la participación de la Jurisdicción, la sociedad, las comunidades y pueblos para que los Jueces de Paz no incurran en actuaciones irregulares, inconducta funcional en el desempeño y ejercicio de la citada funcional notarial.
- Mejorar el servicio de la función notarial en dicha instancia judicial, en beneficio de la comunidad en los casos que solicita su participación en el trámite y diligencias que tengan relación con la legalizaciones, certificación de firmas, obtención de un certificado domiciliario, entre otras facultades prescritas por el ordenamiento jurídico notarial.
- Fortalecer la confianza que debe tener la ciudadanía, preferentemente de los pueblos y comunidades andinas en el desempeño de la función notarial ejercida por los Jueces de Paz, propiciando seguridad jurídica y desarrollo social de los pueblos más alejados de nuestro país.

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1 MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL.

2.1.1 TEORÍA DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL:

Según la teoría de la Fe Pública, los actos o negocios jurídicos se crean y configuran según las normas del Derecho Material, vale decir en el campo del Derecho Civil o Mercantil, pero éstas han de perfeccionarse adquiriendo forma, en términos que permitan acreditar su verdad y legalidad, ambas garantizadas por la Fe Pública que, viene a ser la potestad legítima conferida por la Ley a los Notarios Públicos, Secretarios de juzgados, en funcionarios públicos para los fines de acreditar que los documentos que se otorgan, extienden o autorizan en debida forma y en uso de sus atribuciones son auténticos, salvo prueba en contrario (²⁴).

En otros casos, en el cumplimiento de la fe pública notarial, se trata de fijar meros hechos comprobados por el funcionario, con igual garantía de exactitud y veracidad; Es decir, se convierte en un relato sin comportar manifestaciones de voluntad; es decir, recoge hechos que son patentes o evidentes en la realidad y que no es un negocio o acto jurídico alguno.

En los dos casos, tanto para dar forma adecuada al negocio jurídico, como para consignar los hechos que se tienen a la vista, todo ello tiene que darse y perpetuarse dentro de un tipo de documento dotado de fe pública; por ello se hace imprescindible en todo país moderno, la necesidad de disponer de un sistema normativo, que regule las solemnidades y verificaciones de la fe

²⁴ Flores Polo, Pedro, *Diccionario de Términos Jurídicos*, Marsol Perú Editores S. A, página 379.

pública, lo cual pertenece a los dominios del derecho formal, un derecho formal extra judicial que está inscrito e inmerso en el origen del Derecho Notarial.

Es por ello que el Derecho Notarial surge de una manera tan rotunda y necesaria, que a la postre contribuye al progreso del derecho privado y su manifestaciones en la que se precisan de los alcances la citada fe pública. Al respecto los civilistas franceses Colín y Capitant, afirman que el Derecho Notarial, es "una de las más útiles de las instituciones jurídicas y de la vida económica de la mayoría de los países".

En este sentido, al Notario Público dentro del marco de sus funciones notariales, le corresponden tradicionalmente dos cometidos desempeñados con el esmero que ha sido la razón de su prestigio profesional, el primero: comprobar la realidad de los hechos puesto a su vista y verificación, y el segundo: legitimar el negocio jurídico, dejando todo ello acreditado en el documento notarial que se constituye en una especie de documento característico e irreductible propia de la función notarial.

El proceso evolutivo del Notariado que también es el mismo que el del instrumento público notarial "en un principio fue el documento. No hay que olvidarlo. El documento creó al Notario, aunque hoy el Notario haga el documento" observa el profesor Núñez Lagos.

Esto se ha ido produciendo a través de la historia a medida que la especulación jurídica, iniciada por las escuelas de glosadores y post-glosadores elaboran los conceptos científicos de un Derecho nuevo —que esto ha sido el Derecho Común o Intermedio con respecto al Derecho Romano — con cuyo aporte

fue desarrollándose una doctrina coherente del instrumento público que prefigura y esclarece la función del Notario, término procedente de "notar", o sea, en sentido germánico medieval, quien redacta o pone por escrito.

Es necesario señalar que la razón de ser del Derecho Notarial y su fundamento sociológico, es la constatación de los hechos y la necesidad social de su perpetuación en el tiempo, sentida desde los más remotos grupos sociales, los que constituyen los elementos embrionarios donde ha de buscarse el origen mismo de la función notarial, o si se quiere del hecho notarial.

No faltan los historiadores jurídicos de la función notarial que en su apasionada búsqueda por descubrir en los grupos sociales más antiguos, el órgano donde pudiese estar presente, actuante y fecunda la función notarial. La infinita gama de las relaciones sociales, ha creado una serie de usos y controles que actúan dentro del grupo, fijando las distintas funciones que requerían para su proceso de organización.

Así los grupos primitivos, dados a la práctica de formas rituales, debieron sentir la necesidad de realizar algunos actos llamativos o solemnes para perpetuar, en tal forma, algún hecho tenido por trascendente por el grupo. Para encontrar algún vestigio de lo que pudiera llamarse función notarial en las más arcaicas agrupaciones sociales, habrá que trabajar con elementos propios de la sociología y de la etnología. No debe olvidarse que los hechos sociales repetidos y sensibles han sido los más propicios en exigir una regulación jurídica.

En todo caso, cualquiera que haya sido la antigüedad del grupo humano, la perpetuación de ciertos hechos debió constituir imperiosa necesidad de transmitirlos, así como dejar de ellos constancia notoria de tales acontecimientos para su perpetuación y reconocimiento en los conformantes del grupo humano, así como el respeto de dichas circunstancias.

Es en el desarrollo y avance de la historia del comportamiento social del hombre donde deben buscarse las primeras formas y comportamientos humanos de la función notarial en la historia. Para buscar elementos históricos de otras ciencias, ha señalado Fichter, se hace menester el estudio científico del comportamiento humano, en lo individual y colectivo.

En ciertas relaciones privadas en el desarrollo de los grupos humanos intervendrían alguna vez "con su consejo y autoridad el jefe o la asamblea de la gentilidad"; pero por esta conjetura, sólo abstractamente podríamos separar o diferenciar en la simplicísima biología jurídica de entonces, algo esencialmente semejante a la función notarial de nuestros días cada vez mejoradas y normadas legislativamente.

El Notariado en estos tiempos de desarrollo económico y tecnológico, es también un pilar de nuestro sistema jurídico, surge de la necesidad urgente de establecer un sistema que garantice los contratos, los sistemas registrales y, en general todos los actos contractuales que se desarrollan día a día. En este contexto señalado el papel de los Notarios Públicos peruanos en la actualidad es fundamental, al dar fe de los actos que ante él se

celebran, ellos se hacen partícipe directo del afianzamiento de la ciudad jurídica en el país ⁽²⁵⁾.

Esto viene a demostrar que el sistema notarial y así como el registral es uno de los pilares necesarios para desarrollar cualquier sistema de libre empresa, de operación comercial y de desarrollo institucional y estatal que se dan en todas las latitudes. Constituye el mínimo y necesario que los países deben tener para desarrollar su sistema de producción.

En el caso del Perú, no podríamos concebir en estos tiempos que se pudiera mantener un ordenamiento jurídico carente de la solidez y seguridad que proporciona el sistema de los registros públicos, en virtud de la veracidad que suministra nuestro sistema notarial de nuestro país.

No debemos perder de vista que uno de los instrumentos más importantes, con que cuenta el profesional en Derecho, en el ejercicio del Notariado es precisamente la fe pública notarial, la cual viene a garantizar, sin lugar a dudas, la existencia de situaciones jurídicas, actos, contratos y en general, garantiza y tutela con el manto de la legalidad los actos y los contratos desarrollados por los Notarios.

Desde esta perspectiva, no podemos soslayar la relevancia de analizar la institución de la fe pública notarial. Probablemente por la facilidad con que se anota en las escrituras públicas: "El suscrito Notario da fe" o bien "Por cuanto doy fe", pasamos por alto el significado tan profundo y el valor fundamental de la fe notarial, dentro de nuestro sistema jurídico.

²⁵ Romero Valdivieso, Mario, *Revista Jurídica, El Peruano. Notarios: Afianzamiento de seguridad jurídica y desarrollo. Publicado el 3 de enero 2011, página 7.*

La fe pública (²⁶) bien utilizada, consolida el sistema jurídico vigente. No obstante, mal utilizada se constituye en una puerta para iniciar también la caída del sistema y, consecuentemente de la institucionalidad jurídica peruana, la que debe ser cuidada por todos los sectores que tienen que ver con ella.

De ahí la necesidad y la importancia para meditar sobre la evolución real de la fe pública en el contexto de la vida jurídica peruana y sobre el esfuerzo que se viene haciendo en los últimos años para su fortalecimiento, a través de una legislación acorde a los tiempos actuales, así como por los esfuerzos de los mismos Notarios Públicos por intermedio de sus organizaciones, siendo una de sus características la integridad, por la que no puede darse fe de partes del acto notarial (²⁷).

Ahondar en el tema de la fe pública, puede conducirnos hacia avances importantes en su consolidación. Ser Notario no debe significar una licencia para realizar actos que, por ignorancia o por mala fe, puedan acarrear consecuencias jurídicas nefastas para los ciudadanos de nuestro país que requiere de Notarios honestos y transparentes.

Ejercer el Notariado debe y tiene que ser una actividad digna y responsable, en tanto en su ejercicio el Notario se convierte en garante de la aplicación de la ley, fedatario público y representante del Estado en las relaciones entre los diferentes habitantes.

²⁶ Para Eduardo Couture, es la calidad genérica que la Ley acuerda, independientemente de su eficacia probatoria, a determinados documentos notariales, en razón de la investidura propia del notario que la autoriza. Pedro Flores Polo, *Diccionario de términos jurídicos*, Marsol Perú Editores S.A., tomo II, página 380.

²⁷ Torres Manrique, Fernando Jesús. *La Fe Publica Notarial*, <http://www.monografias.com>, página 2

2.2 LA TEORÍA DEL NOTARIO PÚBLICO

El Notario Público es el profesional especializado que ejerce su oficio en el campo del Derecho a quién, por cualidades humanas de honorabilidad, integridad y ética, y desde luego profesionales, el Estado le ha delegado, previo cumplimiento de requisitos legales la fe pública para que en representación de éste, intervenga en los actos y contratos que realiza la sociedad, dotándolos de seguridad, autenticidad y fuerza probatoria.

Al Notario Público podemos considerarlo como un profesional del Derecho, un hombre con vocación de servicio, cuya responsabilidad es dar seguridad jurídica en los actos y operaciones que ante él se celebran, en tiempos que cada día se realizan transacciones comerciales, relaciones sociales, actos jurídicos con celeridad, con el uso de medios electrónicos, los que requieren una actuación oportuna de funcionarios como el Notario, que en el caso del Perú se le ha conferido cada vez mayores competencias en la perspectiva de aligerar al Poder Judicial sobrecargada de causas pendientes de resolver.

El Notariado (de Notario y éste del latín *notarius*) es una Institución que comprende todo lo relativo a la notaría y a los notarios. En opinión de Neri Giménez Arnau (página 481), definir al notariado importa definir al Notario y que se le considere como grupo de profesionales de quienes la desempeñan. Se ha dicho que la naturaleza del notariado se exterioriza en la práctica en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la función notarial, la que a su vez es una prerrogativa del poder público que va encaminada a declarar el derecho mediante una manifestación con la que se da forma al acto jurídico.⁽²⁸⁾

²⁸ *El Notario Público, Función y Desarrollo Histórico*, José Gerardo Arrache Murguía, www.revistajuridicaonline.com

También debemos afirmar que el Notario es un funcionario público, en el desempeño de una función pública encomendada por la Ley, donde se requieren determinadas condiciones o requisitos de competencia profesional, de probidad personal y la autorización correspondiente del Estado, pero no quiere decir que sea funcionario público en el sentido del derecho administrativo, en cuanto no es parte de los poderes del Estado ni dependa directamente de ellos, ni perciba sueldos, ni que esté sujeto a los derechos y a los deberes de los funcionarios oficiales, por lo que, no se le puede negar desde el punto de vista de la responsabilidad emergente de sus funciones que tiene el carácter público.

La doctrina considera diversas teorías que tratan sobre la naturaleza de la Función Notarial especialmente en el sistema latino:

- a. La teoría o funcionalista;
- b. La teoría profesionalista;
- c. La teoría ecléctica; y,
- d. La teoría autonomista.

2.2.1 EL NOTARIO PÚBLICO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Respetando los principios del Derecho Continental, Romano - Germánico, base de nuestro sistema jurídico, la Ley del Notariado, a la fecha regulado por el Decreto Legislativo No. 1049⁽²⁹⁾, define al Notario como el profesional del derecho autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que le confiere autenticidad, conserva los originales y expide las copias o traslados correspondientes.

²⁹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano del 25 de junio 2008

Dentro de la función notarial también se incluye la comprobación de hechos. Estas competencias y facultades, así como otras disposiciones legales vienen siendo ampliadas por el legislador en aras de mejorar dicho servicio; por esta razón es que, desde fines del año 1996 los Notarios Públicos se encuentran facultados a conocer los denominados asuntos no contenciosos que originalmente constituían procesos judiciales, que era exclusividad competencia del Poder Judicial, estos son: la sucesión intestada, inventarios, adopción de mayores de edad, patrimonio familiar, comprobación de testamento cerrado y rectificación de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El Notario Público ejerce una función pública para dar seguridad con una presunción de verdad, la misma que le es otorgada por el Estado, los actos en los que interviene, colaborando en la formación correcta de los actos o negocios jurídicos privados dándoles solemnidad, forma y efecto legal a los mismos, permitiendo a la vez la realización normal del derecho. El Notario ejerce su función de manera exclusiva y autónoma.

Los instrumentos públicos que emite en el ejercicio de sus funciones constituyen prueba privilegiada ante cualquier órgano jurisdiccional, además desempeña sus funciones dentro del ámbito privado, esto es no depende del Estado, establece su retribución u honorarios en base al acuerdo con el usuario, dentro de los mecanismos que establecen la economía de mercado, la libre y sana competencia.

El Notariado peruano se organiza en Colegios Profesionales que, son personas jurídicas de Derecho público que contienen los denominados Distritos Notariales, constituidos por demarcaciones determinadas del territorio de la República dentro de los cuales los

Colegios de Notarios ejercen jurisdicción, que a la fecha son 22 Colegios conforme a la información de la junta Directiva del Colegio de Notarios del Perú.

2.2.2 SUPERVISIÓN Y ACCESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL

La supervisión del correcto desempeño de la función Notarial corre a cargo de los Colegios de Notarios y el Consejo del Notariado que es un órgano del Ministerio de Justicia ⁽³⁰⁾. Por la importante función de dar fe pública y dar forma a los actos y contrato, el Notario debe ostentar determinada calidez, cualidades personales y profesionales, además de llevar consigo una conducta intachable. Es por ello que para acceder a la función Notarial, los postulantes tienen que someterse a un riguroso concurso público de méritos ante un jurado muy calificado, presidido por un representante del Ministerio de Justicia, el que contiene hasta tres etapas (calificación curricular, examen escrito y examen oral de conocimientos).

Para ejercer el notariado se requiere ser Abogado titulado. Su desempeño y ámbito de su competencia se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico. Las principales normas jurídicas que regulan la Función Notarial son:

Decreto Legislativo No 1049 publicado el 28 de Junio 2008

Decreto Ley No. 26002, Ley del Notariado (26 diciembre 1992).

Ley 26662 Ley de Competencia Notarial en asuntos no contenciosos ⁽³¹⁾.

³⁰ Es el ente encargado de proponer las normas que se requiere para el mejor desenvolvimiento de la Función Notarial y de supervigilar el cumplimiento de las mismas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 25993 y el Decreto legislativo No.1049, su competencia es a nivel nacional.

³¹ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de setiembre 1996, actualizado el 26 de enero del 2011.

Decreto Ley 26501, Ley de competencia para legalización de libros contables o similares ⁽³²⁾.

Ley 26741 Ley de acceso a la Función Notarial.

Decreto Supremo 014-85-JUS Estatuto de los Colegios de Notarios del Perú.

Decreto Supremo 05-94-JUS Reglamento del Consejo del Notariado.

Decreto Supremo 015-85-JUS Código de Ética del Notariado Peruano

2.2.3 DERECHO NOTARIAL, OBJETO Y CONTENIDO.

El Derecho Notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público a cargo de los mismos.

El objeto del Derecho Notarial, conforme a la doctrina especializada es la creación del Instrumento Público, considerado por el Código Procesal Civil como un documento público (art. 235 del CPC), dentro de las pruebas en nuestro ordenamiento, al establecer que es documento público la Escritura Pública y demás documentos otorgados ante o por Notario Público, según la ley de la materia.

El contenido del Derecho Notarial es la actividad del Notario y de las partes en la creación del Instrumento Público.

2.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO NOTARIAL.

Entre éstas podemos señalar los siguientes:

³² Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de julio 1995, que establece que los Jueces de Paz Letrados y Notarios son competentes para legalizar la apertura de libros contables.

No existen derechos subjetivos en conflicto; por ello se dice que actúa en la fase normal del derecho, confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público y se aplica el Derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad a fin de concretar los derechos subjetivos.

Es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el Derecho Público y el Derecho Privado.

En sentido amplio, Neri Muñoz sostiene que el campo de actuación del Notario Público es la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica que el Notario confiere a los hechos y actos que autoriza, es derivado de la fe pública que ostenta.⁽³³⁾

2.2.5 PRINCIPIOS PROPIOS DEL DERECHO NOTARIAL.

De Fe Pública

De la Forma

De Inmediación

De Rogación

Del Consentimiento

De Seguridad Jurídica

De Autenticación

De Publicidad.

FE PÚBLICA:

En concreto, la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un Notario. Es por ello que el Código del Notariado, en su artículo 1º establece que: El Notario tiene fe pública, para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga, por disposición de la ley, o a requerimiento de las partes que requieren el servicio.

³³ www.luldelmundojimenez.webley.com, *El Derecho Notarial y Registral*; página 4.

FORMAS:

Es la adecuación del acto a la forma jurídica que mediante el instrumento público se está documentando.

AUTENTICACIÓN

Mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un Notario Público.

INMEDIACIÓN

El Notario a la hora de actuar siempre debe estar en contacto con las partes. La función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público.

ROGACIÓN

La intervención del Notario Público siempre es solicitada, no puede actuar por sí mismo o de oficio.

CONSENTIMIENTO:

El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios, si no hay consentimiento no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación, que queda plasmada mediante la firma de los otorgantes, expresa el consentimiento ante la función notarial.

UNIDAD DEL ACTO

Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto.

PROTOCOLO.

Al considerarlo como principio, se le tiene como un elemento de necesidad por las ventajas que reporta a las garantías de seguridad jurídica, eficacia y fe pública.

SEGURIDAD JURIDICA

Este principio se basa en la fe pública que tiene el Notario, por lo tanto los actos que legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza.

PUBLICIDAD

Los actos que autoriza el Notario son públicos, por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Este principio de publicidad tiene una excepción y se refiere a los actos de última voluntad, testamentos y donaciones por causa de muerte.

2.3 LA TEORÍA DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES.

El Notario Público en el ejercicio de sus funciones extiende o autoriza el respectivo Instrumento Público Notarial, en ese sentido para Salvat “es el otorgado con las formalidades que la Ley establece, en presencia de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlo”, las mismas que puede ser de dos tipos: extra protocolar y protocolar.

a) DOCUMENTOS EXTRA PROTOCOLARES. El documento extra protocolar está constituido por las actas y demás certificaciones notariales solicitadas por el público que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste al Notario por razón de su función.

Entre los documentos públicos extra protocolares más solicitados y tramitados en nuestro sistema notarial podemos señalar: Actas de los Procesos de Licitaciones, Concursos Públicos, Entrega de Premios, Celebración de Asambleas..

OTORGAMIENTOS DE PODERES.

CLASES DE PODERES: Según el caso pueden ser:

CARTA PODER: Para el cobro de pensiones, remuneraciones u otros beneficios que sean menores a media UIT.

Carta poder o poder fuera de registro: cuando se desee encargar a otra persona la entrega o recepción de diversos documentos.

Poder fuera de registro: Para la representación en un procedimiento civil, por falta o para algunos actos especiales en los procedimientos administrativos. También para el cobro de pensiones o remuneraciones equivalentes a media UIT. Asimismo, sirve para los casos que el valor de lo que se vaya a encargar no exceda a 3 UIT.

Poder por Escritura Pública: En los casos que se encargue a otra persona la venta de bienes inmuebles o para la representación en un proceso judicial. Además, para el cobro de pensiones o remuneraciones cuyo monto sea mayor a una UIT.

Cartas Notariales: Entre ellas la Constancia de Supervivencia (sirven para poder hacer el cobro de pensiones).

Legalización de libros contables: Legalización de firmas y reproducciones. Autorización de viajes de Menores (si el viaje es al interior del país basta con el consentimiento de uno de los padres. Si el menor viaja al extranjero, debe tener la autorización de ambos padres), así como la expedición de Certificados domiciliarios.

b) DOCUMENTOS PROTOCOLARES: Estas tienen condiciones necesarias para revestir calidad de documento notarial en las diferentes clases que admiten los originales producidos en el protocolo, se trata de

cuestión de existencia y no de persistencia, las que estaban regulados en el Decreto Legislativo No.1049 (antes por el artículo 25 de la Ley del Notariado, Ley 26002).

2.4 BREVE HISTORIA DEL NOTARIADO PERUANO

El ordenamiento jurídico de un Estado establece los principios y normas jurídicas con las que se debe ofrecer seguridad jurídica, bienestar y desarrollo y justicia en la ciudadanía. Entre éstas está el Notariado, el que tiene estrecha relación con el derecho, que en el caso del Perú ha tenido una evolución, el cual es necesario reseñar en la presente investigación.

2.4.1 EL NOTARIO EN EL DERECHO INCAICO.

Es el Derecho consuetudinario el que pudo haber desarrollado el Estado Inca, si “seguimos la idea de que cada pueblo genera su derecho según Von Savigny” (Arévalo Silva, E. Keycol, Evolución Histórica del Notariado Peruano, Revista Jurídica de El Peruano, del 13 octubre 2009, pág. 3).

Si bien es cierto que, atendiendo a la información de los cronistas españoles se afirmó que en el Tahuantinsuyo hubo derecho, en especial relacionando a los quipucamyocs como los que podrían considerarse similares o semejantes a las del Notario, también es cierto que a partir de los años 80, gracias a la investigaciones de la etnohistoria hay una nueva interpretación de la historia andina, lo cual ha dado lugar a una reinterpretación y revisión de la historia incaica que se había escrito a partir de las crónicas. Esta nueva concepción permite dudar o rechazar la posibilidad de que haya habido Derecho en el Estado incario.

Por ello es que, hay razones para afirmar que en el Incario no hubo derecho propiamente dicho, por ende subsisten las dudas

respecto a la función notarial de los quipucamayocs, ya que no se cuenta con conocimiento cierto del contenido de registro notarial de los quipus, ya que no hay una respuesta única, se usaron para guardar datos estadísticos, relacionados a censos, tributos, recursos del Estado, otros para recordar sucesos, guerras, alianzas, etc., mas no funciones comerciales, menos existió propiedad privada, mucho menos dinero, por lo mismo que no había necesidad de la función notarial, ya que no había objeto para ello, por tanto no hubo función notarial en el Estado Inca.

2.4.2 EL NOTARIADO EN LA COLONIA.

Los españoles al imponer el derecho castellano trajeron desde España al Escribano, que era el funcionario encargado de la fe pública, que obedecía en ese entonces a los intereses de los conquistadores. Fueron hombres que integraban la expedición y sin título alguno. Incluso llegaron a actuar en cuestiones judiciales, luego en actos contractuales, redacción de testamentos, transacciones, actas de fundación de ciudades, etc.

Por lo que podemos decir, que a la llegada de los españoles a América si estuvo presente la función notarial. Primero fueron nombrados por los Gobernadores, como es el caso de Francisco Pizarro, quienes intervenían en asuntos del gobierno, “siendo el primer Escribano Público del Estado de éstas tierras el español Domingo de la Presa, nombrado el 22 de enero de 1535, siendo unos de los actos de mayor categoría que realizaba este funcionario el dar fe del testamento” ⁽³⁴⁾.

Se sabe que las Leyes de Indias, en un momento prohíbe el nombramiento de Escribanos de Gobernación por parte de los virreyes y demás gobernantes, en razón de que existían

³⁴ Arevalo Silva, E, *Keycol, Evolución Histórica del Notario Peruano, Jurídica, del 13-10-09, pág. 4*

Escribanos Reales en las Indias, nombrados directamente por el Rey, quienes previo examen eran los depositarios de la fe pública y autorizados para intervenir en los contratos que celebraba la corona española.

Posteriormente se encuentran nombramientos de los “Escribanos de Minas y Registros”, a quienes se les haría entrega de una relación de todas las haciendas, rentas, casas y ganados que tuvieran en la provincia, así como de todos los territorios que por costumbre según la norma de la Ley de Indias, tengan a su haber. Como se advierte, la función del Notario era múltiple, con sus propias competencias.

El Virrey Francisco de Toledo dando cumplimiento a la Real cédula de 1549 organiza el Virreynato de Nueva Castilla. En esta organización estuvieron incluidos los Escribanos, designándose escribanos para los españoles y criollos, así también, escribanos para los aborígenes o indios del continente americano.

2.4.3 EI NOTARIADO EN LA REPÚBLICA.

En esta etapa se gestó el Derecho republicano después de la independencia respecto de España. Dándose un orden jurídico intermedio o llamado también derecho de transición, articulando el derecho indiano, el cual, una parte de ellos continuaron vigentes hasta la promulgación de los primeros códigos peruanos, sean civiles o penales, tanto sustantiva como subjetiva hasta la mitad del siglo XIX.

Lo señalado se verificó en la función notarial de ese entonces a cargo de los Escribanos, cuya función comenzó a distinguirse y separarse de acuerdo con los Reglamentos de los

Tribunales, siendo el primero de 1822. El más importante fue la de 1845 promulgado por el Presidente Ramón Castilla y Marquesado, cuyos artículos fueron derogados al promulgarse el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1852 ⁽³⁵⁾.

Posteriormente los Escribanos Públicos quedaron a control de las Cortes Superiores de la República de acuerdo al Reglamento de Tribunales. A continuación fueron dándose la emisión de Leyes, regulando la actividad de los Notarios, hasta la promulgación de la Ley del 21 de Setiembre del año 1886 por el Presidente Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, mediante el cual dispone que los Escribanos Públicos no podrán ejercer la profesión de Abogado en sus respectivos distritos judiciales, salvo que sea por causa propia o por la de familiares consanguíneos hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo grado.

La primera Ley del Notariado fue la Ley No. 1510 del 15 de Diciembre del año 1901 con 5 capítulos, que prescribía que el Notario es el profesional del Derecho autorizado por el Estado para dar fe a los actos y contratos que ante él se celebran, sin embargo esta Ley permitió Notarios no letrados, es decir, ciudadanos que ejercen la función sin ser Abogados, por eso tienen restricciones como el no conocer procesos no contenciosos (Rocío de la Piniela, Diario Oficial El Peruano, 11 diciembre del año 2009, página 15).

Posterior a ello es el Decreto Ley No. 26002 promulgado el 07 de Diciembre del año 1992, emitido durante el gobierno de Alberto Fujimori ⁽³⁶⁾; y, finalmente la Ley vigente del Notariado,

³⁵ El citado Código fue promulgado el 23 de Julio del año 1852, con dicha normativa el Perú inició un proceso dirigido a conseguir la codificación.

³⁶ La Ley 26002 fue derogado por el Decreto Legislativo No. 1049, que a criterio de Ghunter Gonzáles “la nueva Ley del Notariado, bien pudo concretarse en una reforma parcial de la anterior norma, pues en gran parte reproduce el contenido precedente en forma casi inalterable...(www.derecho.usmp.edu-pe/centro_derecho_registral/revista/doctrina_nacional).

como lo es el Decreto Legislativo No. 1049 del 25 de Junio del año 2008 con 4 Títulos: Del Notariado, un título sobre la función notarial; de los Instrumentos protocolares; de la organización del Notariado; de la vigilancia del Notariado, además de 9 disposiciones transitorias y finales.

2.5 LA JUSTICIA DE PAZ EN EL PERÚ.

El Perú se divide judicialmente en Distritos Judiciales que no necesariamente coinciden con la división política y geográfica existente. Aparte de la máxima instancia del Poder Judicial, como es la Corte Suprema de Justicia de la República conformado por todos los Jueces Supremos titulares, actualmente se cuenta con 32 Cortes Superiores, en las que ejercen función jurisdiccional los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, los Jueces de Paz Letrados y más de 5700 jueces de paz, instancia judicial que a la fecha está regulado por la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz. ⁽³⁷⁾

En el caso de los juzgados de paz, si bien es cierto que se tiene la cifra indicada de juzgados, también es cierto que no se tiene el número exacto de Jueces de Paz que estén ejerciendo en forma efectiva dicha función, cómo y en qué condiciones cumplen la función jurisdiccional, ya que no se cuenta con los datos estadísticos fiables como el de la judicatura ordinaria, ello por una deficiencia en las cifras oficiales que maneja el Poder Judicial respecto de los jueces de paz.

Agregar que la Justicia de Paz forma parte del Poder Judicial por disposición constitucional y legal, el texto constitucional en el art. 149 dispone que “las autoridades comunales pueden ejercer las funciones jurisdiccionales de conformidad con el derecho consuetudinario. La ley

³⁷ La Ley No. 29824, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de Enero del 2012, vigente desde el 2 de Abril 2012, la misma que en su Título Preliminar define a la justicia de paz con el carácter conciliatorio; no pertenece a la carrera judicial, así como de actuación gratuita por regla general.

establece las formas de coordinación con la justicia de paz y demás instancias del Poder Judicial”. Legalmente dicha judicatura está reconocida tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como por la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz.

En la práctica, el Juez de Paz forma parte de la comunidad, es un integrante de su entorno social y de aquello que el Instituto de Defensa Legal IDL ha convenido en llamar redes de justicia local, los que son elegidos por los integrantes de su comunidad previa conformación de una terna, cuyos resultados de elección se da cuenta a la Corte Superior respectiva para la formalización de su designación.

Esto quiere decir que el Juez de Paz forma parte de un conjunto de autoridades en el interior de una comunidad campesina o pueblos andinos en las que por tradición se eligen periódicamente a dicha autoridades generalmente en el mes de diciembre, entre ellos al Juez de Paz cuya función es administrar justicia, resolver conflictos sometidos a dicha judicatura en sus respectivos pueblos.

Es de conocimiento público que el Juez de Paz resuelve conflictos y controversias de menor cuantía y conforme a las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico dentro de su comunidad, el cual lo hace dentro los parámetros de cultura y de cosmovisión del mundo andino, en el que el poblador o el usuario del servicio judicial al suscitarse conflictos y controversias recurre a las autoridades comunales, pero con cierta preferencia a la judicatura de paz, dándose el caso que en algunas ocasiones por las capacitaciones recibidas, se abstienen de conocer algunos casos por competencia funcional como pueden ser los casos de la comisión de presuntos delitos, demandas relacionadas sobre bienes inmuebles como pueden ser acciones de reivindicación, mejor derecho de propiedad, etc. para lo cual no tiene competencia el juzgado de paz .

En algunas comunidades lo cierto es que, el Juez de Paz es la autoridad más destacada y respetada; en algunos lugares del ande peruano se da la situación de que comparte funciones y competencias con las demás autoridades de su pueblo como sucede cuando la justicia indígena o especial asume un conflicto que afecte a la comunidad en general, instancia judicial con reconocimiento constitucional. En otras ocasiones actúa con el concurso de las autoridades políticas (Gobernadores, Tenientes Gobernadores), actuaciones que constituyen formas especiales de impartición de justicia, de resolución de conflictos, las que algunas son de manera pacífica, dependiendo de la realidad organizacional y social de cada comunidad o pueblo del ande peruano.

Como señalamos antes, la justicia de paz formalmente es parte del Poder Judicial, pero en la práctica forma parte del medio social, de la comunidad, por ello podemos señalar que una de sus virtudes o características es que, se convierte en una suerte de bisagra entre el Estado y la sociedad de los pueblos del interior en la que, la presencia estatal en muchos casos se ha constatado que en algunas comunidades campesinas y poblados del interior la presencia del Estado Peruano se reduce a un discreto y modesto escudo del Juzgado de Paz, en la puerta de un maltrecho local comunal, o en todo caso en el domicilio particular o local arrendado por el Juez de Paz.

En esta instancia judicial, una característica esencial de la función jurisdiccional del Juez de Paz- reconocida desde la primera Constitución Política- es su carácter netamente conciliador al resolver los conflictos a diferencia del Juez profesional (que es más formalista por la aplicación de las normas y códigos). Por esencia un Juez de Paz desempeña su cargo sobre la base de los principios de la conciliación y la equidad. Si bien es cierto que tiene facultades para dictar resoluciones y sentencias en algunas materias de su competencia funcional, lo cierto es que dicha facultad lo utiliza en su mínima expresión, pocas son las ocasiones en las

que expide éstas, por ello es la instancia judicial en la que básicamente el mecanismo de poder estatal está diseñada por tradición e historia para avenir y conciliar a las partes en conflicto.

Además señalamos que, cada juzgado de paz aparte del Juez de Paz principal (por haber obtenido mayor número de votos en la elección) el juzgado cuenta con 2 Jueces de Paz Accesorios, los que son designados por acto administrativo para reemplazar al Juez de Paz en los casos que éste por alguna razón se ausente de la comunidad, quienes asumen dicho cargo en orden de prelación, empezando por el primer Accesorio luego por el segundo. Este reemplazo temporal no tiene ninguna relación o no es el caso del sistema de provisionalidad o suplencia que se da con los Magistrados del Poder Judicial en los casos que el titular de un juzgado no lo ocupe temporalmente.

Se sabe que el 73% de los jueces de paz se concentra en la sierra, y el 58% se dedica a la agricultura o a la ganadería ⁽³⁸⁾. Dicha información revela que dichos jueces de paz en la realidad son ciudadanos que tienen arraigo dentro de la comunidad, los que están asentados en su gran mayoría en zonas rurales de nuestro país. Recalcar que el Juez de Paz en su mayoría no son Abogados, es un miembro de la comunidad, generalmente son agricultores, ganaderos, en algunos casos hasta Profesores, ciudadanos jubilados, madres de familia, quienes por ser del mismo medio social ejercen dicho cargo con servicio a la comunidad.

Un dato relevante y preocupante obtenido por IDL es que en las encuestas que se efectuaron en 1998, se tenía que sólo el 6% de los jueces de paz eran mujeres. En la costa ese porcentaje sube al 13%, lo que está ligado del alguna manera al tema de género, el nivel educativo y

³⁸IDL, *El Otro Poder Judicial*, pág. 67, en la que da cuenta de la ubicación geográfica de los juzgados de paz en nuestro país, del que se desprende que la mayor parte de ellos están impartiendo justicia en la región andina de nuestro país.

la inserción de la mujer en el ámbito laboral que, con el paso de los años también se está revertiendo paulatinamente.

Reiteramos que, el Juez de Paz peruano no resuelve los conflictos necesariamente conforme a las normas del Derecho Positivo, en esa forma está previsto en la legislación nacional, es conforme a su leal saber y entender. Así lo dispone el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz (antes el art. 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Es lo que se entiende doctrinariamente el resolver conflictos de acuerdo al principio de equidad y con justicia. Ello no quiere decir que el Juez de Paz tiene carta libre o está facultado para resolver de cualquier manera, en forma ilegal o inconstitucional. Para ello está la garantía de la doble instancia, por la que un Juez de Paz Letrado tiene competencia para resolver la impugnación que pueda interponerse contra la decisión del Juez de Paz conforme al art. 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ⁽³⁹⁾.

En el Perú, la Constitución Política de 1993 recoge el pluralismo jurídico y desde esa perspectiva el Juez de Paz, si bien resuelve las controversias conforme a los principios de equidad, a los usos y costumbres de la comunidad en la que ejerce el cargo, también tiene el deber de observar y tener presente el límite de que con sus decisiones judiciales no se afecte los derechos fundamentales de las personas sometidas a su competencia como está previsto en la Norma Normarum de nuestro país.

De otro lado, respecto a la legitimidad y aceptación del que gozan los jueces de paz en el Perú, de una encuesta aplicada en el año 2008, a 810 pobladores usuarios de la justicia en 12 distritos judiciales de nuestro país, un 64% dijo estar satisfecho con su Juez de Paz. Un 66% consideraba que el Juez de Paz era honesto y 87% de la población

³⁹ Art. 59 de la Ley orgánica del Poder Judicial: *Las resoluciones de los Juzgados de Paz son conocidas en grado de apelación por el Juez de Paz Letrado...* ”.

encuestada opinaron que el Juez de Paz debía ser elegido democráticamente, lo cual se ha plasmado con las últimas disposiciones relacionadas a la justicia de paz.

Por ello, podemos señalar que la elección democrática es una realidad concretada, en cumplimiento de lo normado en el artículo 152 de nuestra Constitución Política que, dispone la elección popular de los jueces de paz, la que ha sido legislado por el Congreso como una forma de recoger el sentir popular, con lo que se ha convertido en una práctica democrática que se da en las comunidades y pueblos del interior con ocasión de la elección de sus Jueces de Paz y Accesitarios.

Un tema polémico, debatible y hasta la fecha no resuelto a pesar de los respectivos pedidos, resulta según estadísticas, cuando un 81% de la población considera que los jueces de paz deberían ser remunerados por el Estado. Lo que se ha constatado es que, a pesar que la ley establece que la justicia de paz es gratuita, en realidad los pobladores, el usuario de la judicatura de paz busca retribuir y en ocasiones retribuye al Juez de Paz como regla general es un reconocimiento a un servicio público que ellos consideran positivo. No podemos pasar por alto que en estos tiempos, toda persona, funcionario o servidor público requiere contar con un ingreso económico, casi todos perciben una remuneración; por esa razón correspondería retribuir o reconocer los servicios que presta el Juez de Paz, el reconocimiento económico no debería ser por la población usuaria del servicio sino a cargo del Estado. En rigor, en la actualidad la justicia de paz es gratuita para el Estado formal por estar dispuesta en la normatividad respectiva, para la doctrina y literatura relacionada a dicha judicatura, mas no en la práctica cotidiana de la justicia de paz.

Considero que es necesario reconocer y valorar a la justicia de paz, creemos que es una forma especial de impartición de justicia que debe

ser perfeccionada, mejorada, así como apoyada en todo aspecto relacionada a ella, así como redefinirla y establecer sus competencias y posibilidades de actuación en la resolución de conflictos en el lugar que ejerce su cargo, lo que implica también preocupación y atención para la mejora de su actuación con actividades de capacitación, entrenamiento en la perspectiva de idoneidad y desempeño adecuado de su función.

A la vez es necesario tener en cuenta, alertar al Estado, a los órganos de gobierno del Poder Judicial, a la sociedad en general de dos peligros o grandes tentaciones en la que frecuentemente se cae al debatir y estudiar el tema de la justicia de paz en nuestro país:

- a) En primer lugar una tentación bastante idealista, es el de considerar a la justicia de paz como la panacea y la instancia que resolverá la problemática de la Jurisdicción. Es la idea de que la justicia de paz es la solución a los problemas y falta de legitimidad del Poder Judicial. Este aspecto no pasa necesariamente por mejorar o potenciar la justicia de paz, sino por temas y problemas relacionadas a la justicia formal como pueden ser la injerencia política y económica, las influencias externas y ajenas a la judicatura, entre otros factores; superar dicha realidad y la situación de crítica permanente, finalmente permitirá espacios de transparencia e independencia a la justicia en general, por ende al Poder Judicial con la legitimidad y reconocimiento de la opinión pública. En ese sentido, la justicia de paz tiene relación con la solución de conflictos en el ámbito local, vecinal, familiar, está para resolver los problemas urgentes, cotidianos, del vecindario, de menor cuantía, las faltas penales en los pueblos más alejadas de nuestro país, es el aspecto más importante a rescatar. No debemos exagerar las bondades de la justicia de paz, toda vez que frecuentemente se evidencia un discurso muy optimista, por qué no decirlo hasta demagógico sobre la justicia de paz de nuestro país, pareciera que se pretende legitimar las permanentes

reformas judiciales, los procesos de modernización del Poder Judicial justificando con la justicia de paz. Entonces es un deber de los intelectuales y doctrinarios que, si bien se enaltece las ventajas y alcances de la justicia de paz pero no podemos utilizársela demagógicamente afirmando que dicha instancia es la solución para los problemas de la Jurisdicción nacional; si vamos por ese camino podemos estar disfrazando la realidad sin tener en cuenta los problemas reales que afronta la judicatura nacional, entre ellos el Juez de Paz.

- b) El otro peligro para la judicatura de paz es la de propender al interior de ella el exagerado positivismo o formulismo. Hay muchos Magistrados que sin mala fe consideran a la justicia de paz como un parche o paliativo del Estado oficial. Es decir, en tanto el Estado no permita el acceso de justicia en todo el territorio nacional, da la impresión de que algunos sectores o regiones que no acceden al servicio de justicia deben conformarse con un servicio de justicia de segundo grado. Una consecuencia de este peligro o tentación se verifica cuando en los cursos de capacitación para los jueces de paz se les capacita con la normatividad legal, hay una tendencia permanente para convertir a los Jueces de Paz en conocedores y aplicadores de la ley positiva, en la creencia de que es la forma adecuada de que impartan justicia en sus lugares de origen. Esta realidad comentada afecta una de las características particulares de la justicia de paz, la que está muy impregnada, arraigada en un sector del Poder Judicial que tiene que ver con su formación y capacitación. Si bien es cierto que el Juez de Paz debe conocer los lineamientos generales del ordenamiento constitucional y legal, una cultura jurídica básica y elemental como lo piden ellos mismos, también es importante incidir y reconocer que el citado juez es y tiene que ser el depositario de la cultura, principios y valores de su comunidad, sin perjuicio del respeto de los derechos

fundamentales que tienen que observar y hacer prevalecer en los pueblos del ande peruano al momento de resolver los conflictos que son sometidos a la competencia del Juez de Paz.

2.6 LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DEL JUEZ DE PAZ

Conforme al art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, en los centros poblados donde no exista Notario, el Juez de Paz está facultado para ejercer funciones notariales. Antes de la promulgación de la citada norma legal, el art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ, disponía que los Juzgados de Paz cuyas sedes se encuentren a más de 10 km de distancia del lugar donde se encuentre una sede notarial o donde por vacancia no hubiera Notario o en ausencia de este por más de 15 días continuos, el Juez de Paz tiene competencia en la función notarial para tramitar escrituras imperfectas, protestos de títulos valores y legalizaciones, además de otras competencias que se viene facultando en los últimos años.

Antes de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz (vigente del 3 enero del 2012) la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe y hace referencia sobre la citada función notarial, en primer lugar asigna dicha función (art. 58 de la LOPJ) a los Jueces de Paz Letrado. Lo cierto es que dicha judicatura letrada no están ubicados en la mayoría de los pueblos andinos, por esa razón es que dicha competencia fue ampliada a los Jueces de Paz cuando éstos están distantes más de 10 kilómetros del lugar donde ejerce su función un Notario o un Juez de Paz Letrado (Art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Por dicha competencia es que, por ejemplo para el trámite de las Escrituras públicas imperfectas la referida Ley Orgánica dispone que se lleve un libro de registro. En ella se sentará el Acta indicándose la fecha

en que se presenta la Minuta, nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación y domicilio de cada uno de los otorgantes y de sus respectivos cónyuges, cuando los tengan, la naturaleza del acto o contrato que contiene el documento, el derecho o caso a que se refiere, su valor si lo enuncia, y el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados con indicaciones de la fecha y números de los recibos.

Al final de la diligencia, el Acta de la Escritura Imperfecta será firmada por el Juez de Paz, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar; actas que se extenderán por orden cronológico, unas a continuación de otras, sin dejar espacios o claros. Una vez asentada y firmada el Acta, el Juez de Paz devolverá la escritura imperfecta a los interesados, poniendo en ella constancia autorizada del folio y libro en que ha quedado registrada.

En lo que se refiere al protesto de letras de cambio y demás documentos ejecutivos, está previsto en el inciso 6 del art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, de igual forma en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de títulos Valores vigente en nuestro país, son asuntos en las que tiene competencia también el Juez de Paz. Dejará constancia en el Libro de Registro siguiendo el orden cronológico. El Juez de Paz imprime el sello de “protesto” o la palabra indicada en cualquier otra forma, en el documento objeto de la diligencia notarial.

Los Jueces de Paz también están autorizados para legalizar firmas conforme al inciso 2 del art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, cuando el usuario, a falta de un Notario Público cercano a su lugar de residencia le solicita la legalización; en el ejercicio de dicho trámite deja constancia del hecho en un Libro especial mediante Actas que extenderá en orden cronológico y que serán firmadas por el Juez de Paz y por la persona cuya firma es objeto de legalización.

Respecto a la citada función notarial existe una situación incierta: si por dicha función el Juez de Paz debe exigir algún pago o estipendio. Sobre el particular, el art. VI del Título Preliminar de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz ⁽⁴⁰⁾ (antes en el artículo 70 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial ⁽⁴¹⁾), prescribe la gratuidad de la Justicia de Paz, excepto para aquellas diligencias que se realizan fuera del despacho judicial, no se menciona sobre la función notarial. Consideramos que en dicha función sí bien es discutible si debe o no pagarse o reconocerse dicha función, soy de la posición de que, debe ser objeto de retribución o reconocimiento económico por los usuarios del servicio, ya que toda función pública o labor prestada lo común es que es remunerada.

Un antecedente sobre dicho punto que se comenta, lo encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1960 cuando ésta prescribía que “cuando se trate de escrituras imperfectas, protestos, legalizaciones, así como diligencias que se realicen por comisión de los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Paz cobraran derechos conforme al Arancel que debe formular cada Corte Superior”.

Si bien dicha norma no ha sido plasmado ni reiterado en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente menos en Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, creemos que los órganos de gobierno del Poder Judicial, las presidencias de las Cortes Superiores de Justicia deben asumir dicha realidad, sugerir que las autoridades y ciudadanos de los centros poblados o comunidades propongan tablas de aranceles para retribuir la función notarial a cargo de los jueces de paz.

⁴⁰ Art. VI del Título Preliminar de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz dispone que “La actuación del Juez de Paz es gratuita por regla general. De modo excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará excepciones por diligencias y actividades especiales que deba realizar el Juez de Paz”.

⁴¹ Art. 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial “La justicia de paz es gratuita, salvo que la diligencia o actuación se realice fuera del despacho judicial, en cuyo caso, perciben los derechos que fije el Consejo Ejecutivo Distrital”.

2.7 MARCO JURÍDICO- POSITIVO

2.7.1 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO: art. 143.

La citada norma constitucional prescribe que el Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución.

Igualmente la norma constitucional establece que, no existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir dicha función, en este caso la función de administrar justicia a nombre de la nación, con excepción de los organismos de la justicia militar y el arbitraje, ambas competencias con reconocimiento constitucional las que son ejercidas conforme a sus atribuciones.

El Poder Judicial conforme a lo normado en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de la materia es el poder del Estado que mediante los juzgados y salas jurisdiccionales asumen competencia para impartir justicia a través de sus respectivas instancias: los Juzgados de Paz, los Juzgados de Paz Letrados, los Juzgados Especializados y Mixtos, Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República.

El funcionamiento, atribuciones y facultades de los organismos del Poder Judicial se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que establece su estructura orgánica en lo funcional y administrativo, precisa las funciones de cada uno de los estamentos, así como las obligaciones y derechos de los que integran el citado poder del Estado esto es Magistrados y Trabajadores jurisdiccionales y administrativos.

La citada Ley Orgánica, así como la Ley de la Carrera Judicial, los códigos procesales define los derechos y deberes de

los Jueces, quienes son los encargados de administrar justicia; de igual de los justiciables, apoderados y abogados que son las partes procesales que están siendo procesados o quienes solicitan tutela jurisdiccional efectiva. De igual forma regula también la actuación de los auxiliares jurisdiccionales que son los encargados de brindar apoyo a los Jueces.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente vigente en nuestro país ha sido promulgado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS del 28 de Mayo de 1993, publicado el 2 de Junio del mismo año, consta de 304 Artículos, 1 Disposición Complementaria Única y 33 Disposiciones Finales y Transitorias.

Es de resaltar que, la misma Constitución Política del Perú en el artículo 138º, dispone que: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes pertinentes", función jurisdiccional que tiene que es asumido dentro de un Estado Constitucional de Derecho.

Lo previsto en la Constitución Política de 1993 sobre la potestad exclusiva de administrar justicia a cargo del Poder Judicial también ha sido desarrollado normativamente en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incidiendo que: No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. En su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico; disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (⁴²).

⁴² Art. 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma desarrolla legislativamente lo normado en el art. 139 de la Norma Fundamental.

El desempeño del Poder Judicial en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, su actuación jurisdiccional, actos y responsabilidades está regulado por ordenamiento jurídico, las que tienen que observar, aplicar y resolver conforme a la normatividad legal cuando se suscitan los conflictos. La justicia tiene que estar al servicio del pueblo con un efectivo sistema nacional de administración de justicia, una organización judicial que permita el acceso a la justicia con las niveles e instancias judiciales conforme a la gravedad de una falta o delito en los casos que se juzga por la comisión de un hecho criminal que afecta bienes jurídicos tutelados, así como cuando asumen competencia jurisdiccional respecto a pretensiones constitucionales, civiles, familia, laborales y otras materias que son sometidas a la Jurisdicción.

Entre estas competencias también está la resolución de las Faltas penales que, vienen a ser el la conducta o acto por la que se infringe en forma dolosa e intencional la ley penal, ordenanza o reglamento que no reviste tal gravedad para la sociedad, casos en la se impone una sanción leve, por ejemplo en los casos de una riña callejera, el arrojar basura en lugares prohibidos, etc., casos en las que tienen competencia los juzgados de paz, cuyos jueces investigan y sentencian en los citados casos de faltas conforme a la competencia asignada por el legislador.

2.7.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: art. 152.

Con fecha 16 de junio del 2005 se publicó en Diario Oficial El Peruano la Ley N° 28545 que regula la elección de los Jueces de Paz. Dicha norma legal desarrolló el mandato constitucional contenido en el artículo 152º, según el cual, los Jueces de Paz son elegidos democráticamente en cada una de sus comunidades.

No obstante que el legislador nacional estableció en la primera disposición final de la indicada Ley que, “dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente Ley, el Poder Judicial dictará las normas reglamentarias que se requieran para llevar a cabo las elecciones de jueces de paz”, recién el año 2006 Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), conforme a las atribuciones previstas en el art. 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo reglamenta para que se viabilice la elección democrática de los Jueces de Paz.

Antes de la emisión del Reglamento Resolución Administrativa No. 139-2006-CE-PJ publicado el 30 de Noviembre del año 2006, la situación era preocupante no sólo por que dejaba en suspenso las elecciones de los nuevos jueces de paz, sino también porque en muchos casos el mandato del anterior juez designado había concluido con el consiguiente perjuicio del servicio judicial. Tuvo un efecto negativo ya que se privó por un buen periodo de tiempo de la protección judicial a los ciudadanos de zonas rurales en todo el territorio nacional, el derecho de los pobladores de zonas alejadas del país al derecho fundamental de acceso a la justicia.

Es preciso señalar que la reglamentación inoportuna de la ley N° 28545 contravino la norma del artículo 152° de la Norma Normarum, toda vez que el CEPJ pretendió –para el suscrito de manera inconstitucional- sustituir la elección popular de los jueces de paz dispuesta por el constituyente, por una “designación” en base a los méritos de las personas propuestas, labor que estaba a cargo de una comisión ad hoc nombrada para tal efecto en cada Corte Superior de Justicia.

Lejos de reglamentar la citada ley en el plazo señalado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con fecha 19 de octubre del año 2005, expidió una Resolución Administrativa mediante la cual dispuso que, en tanto se apruebe las normas reglamentarias que señala la Ley N° 28545, se procediera a la “designación temporal de jueces de paz en las Cortes Superiores de Justicia del país que así lo requieran, conforme al procedimiento vigente”, situación que felizmente ha sido superado.

El contenido constitucional del artículo 152º, es inequívoco, los jueces de paz deben ser elegidos en forma directa y democrática, mediante elección popular por los miembros de la comunidad. Hacer de la “designación” un procedimiento general de elección de jueces de paz contradice el espíritu de la Constitución Política. La “designación” fue un procedimiento en base a méritos y currículum de los posibles designados, a cargo de una comisión ad hoc nombrada por la Corte Superior. Puede ser un procedimiento excepcional, pero la misma es incompatible con lo establecido en la norma constitucional.

Con la reciente Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, se ha dispuesto que los jueces de paz así como sus accesitarios serán elegidos por un periodo de 4 años ⁽⁴³⁾, para el ejercicio del derecho a la tutela judicial, derecho fundamental que junto con el debido proceso se incorporan al contenido esencial de los derechos fundamentales, como elementos del núcleo duro de los mismos, permitiendo de esa manera que, a un derecho corresponda siempre un proceso y que un proceso suponga siempre un

⁴³ Art. 13 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz: *Duración el cargo. El Juez de Paz ejerce sus funciones por un periodo de cuatro (4) años, puede ser reelegido o seleccionado nuevamente. Los Jueces de Paz accesitarios son designados también por ese periodo.*

derecho; pero, en cualquiera de ambos supuestos su validez y eficacia la defina con respeto a los derechos fundamentales (⁴⁴).

2.7.3 LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: art. 61 al 71

Es una realidad que para una gran mayoría de ciudadanos existen barreras lingüísticas, culturales y geográficas que limitan el acceso al servicio de impartición de justicia. A pesar de que el año 2006 fueron exonerados del pago de los aranceles judiciales los ciudadanos de 531 distritos más pobres del Perú, para miles de peruanos aún subsisten barreras económicas, distancia y facilidad al sistema judicial para la solución de sus conflictos, entre ellas la función jurisdiccional.

Para atenuar esas deficiencias, para facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos, es la razón por la que desde el año 1822 en el Perú se estatuye la Judicatura de Paz que no está a cargo de Abogados salvo excepciones, quienes están facultados para impartir justicia con criterio de equidad, aplicando usos y tradiciones de la comunidad. Dicha judicatura de paz actualmente cuenta con un número aproximado de 5700 jueces de paz, los que ejercen función jurisdiccional en todo el territorio nacional.

Los jueces de paz asumen competencia en los procesos por faltas penales, violencia familiar, pago de alimentos, deudas y pagos de dinero hasta por la suma de 11,100.00 nuevos soles (⁴⁵), además competencia en la función notarial.

⁴⁴ *María Elena Guerra Cerrón, Hacia una Justicia de Paz pagina XXI, los Jueces de Paz también tiene que dar cumplimiento a los derechos fundamentales, por ello en sus capacitaciones, uno de los temas que se desarrolla es lo relacionado con los derechos humanos*

⁴⁵ *Art. 16, inciso 2 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 3 de Enero del 2012.*

Gracias a dicha instancia judicial miles de peruanos acceden a un servicio de justicia oportuna y ágil. Se evita en muchos casos que se recurra a la violencia como sucede con los linchamientos, la justicia por mano propia. En los casos que no son de competencia del Juez de Paz, los conflictos son derivados a las instancias judiciales competentes previa orientación al demandante o denunciante.

La justicia de paz de alguna manera es una de las instituciones que mejor refleja los cambios sociales producidos en el Perú en las últimas décadas. Hasta 1969, las Cortes Superiores nombraban al Juez de Paz recayendo la designación en los "vecinos notables", lo cual implicaba que el cargo era ejercido por los terratenientes o personas de su entorno. Evidentemente no siempre actuaban según criterios de justicia: "La primera vez que fui a Cajamarca, los Jueces de Paz ayudaban a los hacendados a quemar las casas de los campesinos", recuerda una periodista, situación que se dio en los pueblos andinos.

Con la puesta en marcha de la Reforma Agraria, los Jueces de Paz en la región andina generalmente son campesinos elegidos por su comunidad. La elección se realiza en una asamblea, a mano alzada o por voto secreto. El Alcalde, el Presidente de la Comunidad, la autoridad política son los que dan fe del proceso de la elección. En algunos lugares se exige al votante su Documento Nacional de Identidad, en otros basta que los participantes sean residentes conocidos. Las elecciones se realizan en quechua, shipibo o aguaruna. En todos los casos, el requisito es que la persona sea buen vecino, colaborador y responsable.

La justicia de paz es un mecanismo de justicia que a través del tiempo ha funcionado bien, reconocida por la efectiva

prestación del servicio judicial, precisamente porque se adaptaba a los diferentes contextos culturales. Por eso es que las Cortes Superiores ratificaban a los Jueces de Paz elegidos en la comunidad, siempre que no tuvieran antecedentes penales y que el Acta de elección reflejara la voluntad de la mayoría de los asistentes al acto electoral de un determinado pueblo o comunidad.

Sin embargo a mediados del año 2010, el intento de formalizar la Justicia de Paz generó ciertos problemas en la historia de dicha judicatura. La Ley 27539 otorgó la facultad de organizar las elecciones a la ONPE y se suspendieron todas las elecciones comunales para el Juez de Paz. El nuevo procedimiento fue simplemente inaplicable, porque los Juzgados de Paz no se encuentran demarcados con precisión y los votantes no están empadronados en función del Juzgado de Paz. Por 4 años en muchos lugares no se sabía quién era el Juez de Paz, muchos de ellos renunciaron o en algunos casos se prorrogó su mandato contra su voluntad, sin la aceptación personal.

El 16 de junio del año 2006 al promulgarse la Ley No. 28545, se admitió que la forma más viable de regular la elección de los Jueces de Paz, era simplemente reconociendo lo que cientos de comunidades y centros poblados venían practicando en los pueblos y comunidades de nuestro país, con buenos resultados y con la legitimidad del caso. Por eso es que se dispone que sólo en las ciudades urbanas las que cuentan con una población numerosa el Poder Judicial pueda solicitar la intervención de la ONPE.

2.7.4 DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, LEY DEL NOTARIADO.

Dentro del notariado peruano, si bien es cierto que pudo concretarse en una reforma parcial de la anterior norma derogada, ya que reproduce el contenido precedente en forma casi

inalterable, de lo que se colige es que el legislador nacional es consciente del respeto que inspira la tradición del notariado latino, esa es la razón por que no se advierte cambios drásticos de la actual legislación respecto a la anterior.

La nueva ley se preocupa reiteradamente en afirmar y exigir una correcta actuación del Notario, de tal suerte que le permite mantener la confianza ciudadana de la que afortunadamente aún goza. Otro punto importante que se ha tenido en cuenta es adecuar el notariado a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones TICs, a fin que pueda intervenir en la certificación a través de formato virtual y no físico; asimismo, se autoriza que los traslados de los documentos notariales puedan realizarse en forma telemática.

Por otro lado, debe tenerse en consideración que un punto fundamental que inspira el cambio normativo es modernizar la regulación del procedimiento disciplinario a fin de estatuir un conjunto de reglas acordes con el debido proceso y que tiendan a darle efectividad mediante la introducción de medidas cautelares.

Una de las innovaciones más polémicas es aquella referida a imponer la edad de 75 años como causal de cese en el ejercicio de la función notarial, lo cual resulta- en nuestra opinión- un acierto indiscutible por dos motivos: primero, no pueden exigir cargos de servicio público de carácter vitalicio, aunque el titular no sea un empleado público, ya que por línea de principio el notariado moderno se separa del viejo sistema de “compra de oficios” precisamente porque la actividad deja de ser propiedad del titular; en segundo lugar, en toda actividad, especialmente pública, debe propenderse a la renovación de los cargos a través del ingreso de una nueva generación de juristas.

Otra precisión importante de la Ley del Notariado es la distinción entre procedimiento disciplinario pertinente sólo para el caso de infracciones y cuya competencia corresponde al Tribunal de Honor conforme a lo normado en el art. 147⁽⁴⁶⁾, y la declaración de cese del Notario Público por pérdida de las cualidades señaladas en el art. 10, que es competencia de la junta directiva del Colegio de Notarios respectivo (art. 21-1).

La ley también introduce una novedad radical que parece no haber sido comprendida, lo que ha originado polémicas innecesarias; ahora el Notario Pública podrá extender un instrumento aclaratorio sin necesidad de intervención de los otorgantes cuando advierta algún error en la Escritura Pública, siempre que esta provenga de la propia declaración del Notario (art. 48-2). Esta figura bastante conocida en el Derecho comparado se denomina “escritura pública sin compareciente”, y tiene como finalidad permitir que el Notario Público corrija las erratas en las que haya incurrido respecto a sus propias manifestaciones contenidas en el instrumento, sin que en ningún caso quede autorizado a modificar la declaración de voluntad de las partes.

Con respecto a las Escrituras Públicas la modificación más importante está referida al deber de identificación que correspondan al Notario Público. La nueva ley establece que este tiene la obligación de acceder a la base de datos del RENIEC, en aquellos lugares en los que se pueda contar con acceso al Internet y sea posible que la citada entidad brinde el servicio de consultas, con la cual se puede verificar imágenes, datos y huellas dactilares

⁴⁶ Art. 147 del Decreto Legislativo 1049: Competencia Disciplinaria. La disciplina del Notariado es competencia del Consejo del Notariado y el Tribunal de Honor de los Colegios de Notarios. Contra las resoluciones del Tribunal de Honor de los colegios de notarios sólo procede recurso de apelación. Las resoluciones del Consejo del Notariado, agotan la vía administrativa.

(art. 55). De esta manera, se busca poner punto final a un mal endémico de la institución notarial: las suplantaciones de identidad que tienen como efecto poner en duda la actuación misma del Notario y su utilidad pública.

Sobre el Decreto Legislativo No. 1049 nueva Ley del Notariado, el balance es muy positivo, ya que en síntesis podemos señalar que introduce reformas sentidas y necesarias para la seguridad documental, mejora sustancial del procedimiento disciplinario, se adapta a las nuevas tecnologías, y por sobre todo reafirma que la importancia de la función notarial está vinculada necesariamente con la actuación correcta de su protagonista: el Notario Público.

Es necesario aclarar que, si bien es cierto que la delimitación temporal de la investigación es del 01 de Enero del 2004 hasta el 31 de Diciembre del año 2006, también es cierto que la presente investigación, se ha ido afinando y desarrollando conforme las circunstancias, situaciones y cambios normativos del notariado público de nuestro país.

Estos cambios normativos, también de alguna manera inciden en la función notarial que cumplen los jueces de paz, si bien es cierto que nuestro país avanza con relación a los índices de crecimiento económico de los últimos años, corresponde también modernizar sectores del Estado entre ellos la judicatura de paz respecto a la función notarial. A falta de Notarios Públicos en todos los rincones del país, es posible que un Juez de Paz sea requerido para dar fe de actos comerciales, legalizaciones de documentos y otros, actuaciones para los cuales se requiere capacitarlos y actualizarlos en dicha función.

2.7.5 LEY Nº 26501

La Ley No. 26501 prescribe que los Jueces de Paz Letrado y Notarios Públicos son competentes para legalizar la apertura de libros contables. Esta Ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 12 de Julio del año 1995, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de Julio del mismo año, la misma que otorga facultades para que el Juez de Paz Letrado al igual que el Notario Público también legalice la apertura de libros contables.

En el artículo 1° de la citada norma legal, dispone que la legalización de apertura de libros contables y otros que la ley señale es competencia tanto de los jueces de paz letrados como de los notarios públicos, a elección del usuario, en la práctica en los lugares donde existen éstos se prefiere a los últimos.

La citada normatividad legal de alguna manera y en forma supletoria, por costumbre y principalmente a falta de notarios públicos y jueces de paz Letrados en los pueblos y comunidades del ande ha dado lugar para que los jueces de paz legalicen también la Apertura de libro de actas de asociaciones que se constituyen en los pueblos alejados de nuestros país, clubes de madres que se organizan para la prestación de asistencia social mediante comedores populares, programas de vaso de leche, etc.; el Cuaderno de Obras que se requieren en la ejecución de obras públicas en el ande peruano, entre otras necesidades relacionadas a la citada legalización de libros.

Lo señalado es una de las funciones notariales más frecuentes que vienen realizando los jueces de paz en los últimos tiempos en zonas en las que no se encuentra autoridades judiciales que está autorizados por el citado Decreto Ley (Juez de Paz Letrado) menos los Notarios Públicos, labor notarial que se

evidencia y se cumple en la región andina de nuestro país a cargo del Juez de Paz de la región centro andina del Perú.

2.8 LA INTERCULTURALIDAD JURIDICA

2.8.1 PLURALIDAD JURIDICA.

El concepto de pluralidad jurídica identifica la diversidad jurídica de una localidad, región o país. Es un concepto que nos sirve para constatar la existencia de esa diversidad en forma sincrónica horizontal. Al igual que en un espacio social es posible encontrar una diversidad de culturas, igualmente la posibilidad de constatar la existencia de múltiples sistemas jurídicos ⁽⁴⁷⁾.

En ese sentido, hacemos referencia al texto de (legal pluralismo) de Sally Engle Merry ⁽⁴⁸⁾ “¿Qué es pluralismo legal?, Este concepto es definido generalmente como una situación en la que dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo espacio social (Pospisil, 1971; Griffiths, 1986; Moore, 1986). Pospisil en su trabajo pionero sobre niveles jurídicos apunta que “todo subgrupo que interactúa u opera en la sociedad, tiene su propio sistema legal, en el cual es necesariamente diferente en algunos aspectos de los otros grupos” (1971; 107). Por subgrupos, él entiende unidades tales como la familia, el linaje, la comunidad o una confederación política que aparecen como partes integrantes de una sociedad homogénea jerárquicamente dividida y muy similar en reglas y procedimientos. Un reciente trabajo suyo define el sistema jurídico de manera amplia, buscando incluir tanto el sistema de cortes y juzgados que son partes del Estado, como formas no legales de ordenamiento normativo.

⁴⁷ Academia de la Magistratura, *Interculturalidad Módulo Auto instructivo, Especialista responsable de la elaboración: Antonio Peña Jumpa, Lima 2011, pág. 9.*

⁴⁸ Traducido por Eduardo Castillo, Rosa Kong y Martín Moscos (1990), revisado por Antonio Peña Jumpa.

Algunos de éstos son partes de instituciones como fábricas, corporaciones y universidades, en los que incluyen códigos escritos, tribunales y fuerzas de seguridad, algunas veces copiado de la estructura y la forma simbólica del derecho estatal (Macaulay, 1986; Henry, 1983), Otros ordenamientos normativos son sistemas informales en los que los procesos de establecimientos legales, de protección para el cumplimiento de estas reglas de sanción a los infractores de las mismas reglas, aparecen como naturales o dadas por hecho, como ocurre dentro de la familia, grupos de trabajos y colectividades (Abel, 1982; 1983)” (⁴⁹) (pp. 870- 871).

2.8.2 PLURALIDAD JURIDICA, INTERCULTURALIDAD Y DERECHO.

El concepto de interculturalidad jurídica complementa al concepto de pluralidad jurídica. El concepto de interculturalidad jurídica busca entender la dinámica de los diversos sistemas jurídicos en su medio cultural, social y geográfico. Por ello la interculturalidad significa interrelación de culturas o grupos humanos de culturas diferentes. Siguiendo esta información interculturalidad jurídica, significará, la interacción de grupos humanos con culturas diferentes en cuanto a normas, procedimientos, principios o conductas consideradas jurídicas por el mismo grupo.

“El hablar de interculturalidad como realidad fáctica es centrarnos en primer lugar, en los modos en los que se producen estas incorporaciones mutuas, pero hay algo más, si reconocemos que cualquier cultura es el producto, entre otras cosas de una larga historia de intercambios, el concepto de interculturalidad llegaría prácticamente a identificarse con el de cultura y, por tanto, se volverá inútil y redundante. Por ello, proponemos reservarlos para

⁴⁹ *Idem.*

señalar situaciones de influencias mutuas particulares: las circunstancias a convivir, a compartir espacio geográfico y social común de modo cotidiano, permanente, duradero e intensivo. Esta situación se ha dado, por ejemplo, en España de moros, cristianos y judíos y se dio de modo general, en las asociaciones del Mediterráneo. También se daba en los andes prehispánicos y siguió dándose, en un contexto ciertamente muy distinto, luego de la invasión española. Basta mirar los grandes cambios culturales producidos por las migraciones internacionales masivas para constatar el mundo se está volviendo, en ese sentido, cada vez mas intercultural.

Una situación de interculturalidad es siempre compleja y la manera como se tratan los conflictos puede ser muy diversos. No corresponde precisamente a una situación de tranquilidad y completa armonía, sino más bien a una vida en medio de muchas tensiones e injusticias que, sin embargo abre muchas posibilidades de enriquecimiento mutuo, aun cuando este no sea fácilmente asumido y reconocido. En una situación así, en efecto, el aprendizaje no es sólo de quienes se encuentran en la situación más desventajosa o en situación de subordinación, sino también de quienes comparten la cultura de prestigio. Pensemos por ejemplo, cuántos niños latinoamericanos fueron criados desde el pecho por una madre sustituta indígena afro descendiente. ¿Acaso no ha sido influenciado por la cultura de la mujer en brazos de la cual se criaron? Sin embargo, esta parte de la herencia cultural latinoamericana no es fácilmente reconocida y esta represión inconsciente es, sin duda, una de las fuentes del racismo en el subcontinente.” (pág. 42- 43)⁵⁰

⁵⁰ (Ansion, Juan (2007) ;”la Interculturalidad y los desafíos de una nueva forma de ciudadanías”, en :educar en ciudadanía intercultural, Lima: foro editorial PUCP, red internacional de estudios interculturales PUCP, universidades de la frontera chile,” (PP. 37-61)

2.8.3 EL CONFLICTO INTERCULTURAL.

Un conflicto intercultural es aquel que se produce en un contexto de interculturalidad jurídica cuando dos o más partes (identificados como sujetos colectivos normalmente con propios sistemas jurídicos) tienen intereses, aspiraciones, subjetividades o incertidumbres incompatibles. Esto significa que los intereses, aspiraciones, subjetividades o incertidumbres de los miembros de un sistema jurídico identificados con un grupo cultural determinado se contradicen o se oponen a los intereses, aspiraciones, subjetividades o incertidumbres de los miembros de otros sistemas jurídicos identificados con un grupo cultural.

Un ejemplo común de conflicto intercultural en nuestro medio, es el que corresponde al conflicto entre los miembros de una comunidad campesina y los miembros de una empresa privada dedicada a la extracción de minerales. La primera tiene intereses o aspiraciones basadas en la explotación de la tierra y sus recursos sin destruirlas o sin alterarlas, mientras que la segunda tiene intereses o aspiraciones de exploración de las mismas tierras y sus recursos pero transformando y hasta contaminando dicha tierra, la mayoría de los casos por un largo periodo de tiempo. La primera aspira a desarrollar una economía de subsistencia en armonía con la tierra, en tanto la segunda busca un provecho económico de plusvalía sobre los recursos de esa tierra en armonía con el mercado internacional. La primera se guía bajo un sistema jurídico comunal, basado en relaciones familiares y comunales, mientras que los segundos se guían bajo el sistema jurídico formal del Estado basado en la economía del mercado. El choque de ambos intereses o aspiraciones es de grandes proporciones porque sus defectos en uno u otro sentido no solo afecta a los grupos en

disputa, si no a grupos culturales vecinos a la colectividad en general (⁵¹).

Como se advertirá, los conflictos interculturales están presentes en las comunidades y pueblos de la región andina de Perú, en ellas está inmersa también la actuación del Juez de Paz, en la que muchas veces es presionado por sus coterráneos a que resuelva dichos conflictos. En algunos casos asumen competencia por la presión; en otros casos saben que no tienen competencia, decisión judicial a veces incomprendida, ya que cuestionan su designación como autoridad judicial al señalar que tipo de autoridad judicial es, si no tienen competencia para resolver los conflictos intra-comunales y las inter- comunales.

En ese entramado poco difícil para el Juez de Paz, por la que no puede asumir competencia en todos los conflictos que se dan dentro de la comunidad o entre dos o más comunidades, ello implica que las partes o personas que requieren el concurso del Juez de Paz se ven obligados a recurrir a la justicia ordinaria o profesional, instancias judiciales ante los cuales en muchos casos se presentan barreras o límites para acceder a ellas, la que puede dar lugar la justicia estatal, especialmente, por el lugar de ubicación geográfica, formalidades procedimentales, sociales, económicas y otras que señalaremos a continuación.

2.8.4 BARRERAS SOCIALES Y ECONÓMICAS.

Estas barreras están referidas a las condiciones sociales y económicas que identifica a los ciudadanos y los limita a acceder con facilidad al sistema de la justicia estatal. Las condiciones sociales comprenden a nivel de educación, el nivel de ingreso

⁵¹ Academia de la Magistratura, Interculturalidad Módulo Auto instructivo, Especialista responsable de la elaboración: Antonio Peña Jumpa, Lima 2011, pág. 19.

económico, su ubicación en el espacio rural o urbano, su identificación de clase social, etc. Así por ejemplo un ciudadano de un pueblo, por su situación y condiciones sociales puede verse limitado a acceder a un Juzgado Mixto de su provincia para resolver un problema de linderos que tienen con su vecino cuando: desconoce la existencia del juzgado y su competencia, carece de recursos para contratar un abogado o pudiendo hacerlo su propiedad carece de un registro formal que lo permita garantizar y sustentar su derecho de propiedad ante la otra parte, entre otros.

De otro lado, las condiciones económicas se refiere directamente a los niveles de ingreso y las posibilidades de contar con éstos durante un determinado periodo para asegurar la alimentación, vivienda, servicios públicos, educación de un ciudadano y de las personas que dependen de él. Así hablamos de barreras económicas cuando una persona no puede afrontar los gastos directos e indirectos de un proceso judicial, cuando no puede pagar las tasas judiciales y los servicios de un Abogado (gastos directos) o cuando no puede cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros durante el proceso (gastos indirectos).

Las barreras sociales y económicas aparecen muy vinculadas, al extremo que se confunden, el nivel de ingreso que aparece como principal causa económica también produce una serie de condiciones sociales como la estratificación social. En lugares alejados, en las zonas rurales, las barreras sociales y económicas afectan en extremo a los ciudadanos: al ser lugares distantes no hay jueces ni fiscales profesionales para estos ciudadanos, se les obliga a desplazarse a las ciudades capital de

región, con los costos adicionales. El gasto económico se acrecienta y su condición social es afectado significativamente (⁵²).

2.8.5 BARRERAS CULTURALES Y LINGÜISTICAS

La pluriculturalidad de nuestro país y la presencia dentro de ésta de grupos sociales o culturales marginales, es una de las causas de las barreras culturales y lingüísticas de un sector de ciudadanos respecto al sistema justicia estatal. Al igual que en el apartado anterior, lo cultural y lo lingüístico se confunden como situaciones de causa común.

Tengamos en cuenta previamente el tema de la población. Si bien se carece de un censo desarrollado que describa con objetividad el número de habitantes por identidad étnica o cultural, se puede afirmar que al menos la mitad de la población del Perú, comparte una identidad cultural diferente a la sociedad oficial nacional (también identificada como sociedad dominante o occidentalizada). Esta diversidad se aprecia por las numerosas comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, caseríos, anexos, parcialidades, centros poblados de nuestro andes y la Amazonía, cuya población al menos alcanza el 30% del total nacional, si a ello sumamos una población semejante de migrantes que habitan las zonas urbanas, notaremos que el 50% de la identidad cultural diferente es una realidad.

Esta pluralidad de habitantes nos conduce a confirmar la presencia de diversos sistemas jurídicos, con su propia cultura jurídica como se indicó, pero también con la presencia de muchas barreras culturales en su interacción. Así cuando un miembro de una cultura diferente al de la sociedad nacional comete un hecho cuestionable bajo sus cultura, pero extremadamente reproachable

⁵² *Idem.*

por la cultura del sistema jurídico estatal, se suscita el conflicto donde destaca la aplicación de esa barrera cultural por ejemplo, el matrimonio de un poblador rural mayor (novio) y una niña de 13 años (novia) “que autoridad debería juzgarlo” ¿Bajo qué leyes? Igual ocurre con el caso de los ronderos o comuneros en general que aprehenden a un abigeo infraganti y lo castigan bajo su sistema de sanciones. Posteriormente esta persona sancionada comunalmente recurre al sistema de justicia oficial para denunciar a los ronderos y comuneros suscitándose un proceso penal contra estos. ¿La autoridad que juzga es imparcial? ¿Bajo qué Ley ?.

Si bien existe normas que nos puedan conducir por un análisis cultural de los conflictos, como ocurre con el artículo 2 inciso 19, el artículo 149 de la Constitución, así como el artículo 15 del Código Penal, las barreras culturales siguen presentes en la concepción de nuestros operadores del Derecho.

Un aspecto operativo que agudiza esta barrera cultural se encuentra en el aspecto lingüístico. En nuestros Andes y en las grandes ciudades tenemos millones de ciudadanos que tienen como idioma materno el quechua, sin embargo ningún proceso judicial se desarrolla en este idioma. Igual ocurre en determinadas regiones como el sur andino donde el aymara es predominante, o en nuestra Amazonía en general donde están presentes cuando menos 64 idiomas diferentes. ¿Se conoce de algún proceso judicial en Aymara o Awajun ?, lo más probable es no.

El problema se complica aún más, cuando el Derecho Constitucional a la propia lengua o lengua materna se confunde con políticas de usos de intérpretes o peritajes especiales. Si bien estas políticas o propuestas ayudan mitigar el problema, no lo

solucionan y muchas veces genera mayores conflictos cuando se tiene que entender al intérprete, al perito, por ejemplo ⁽⁵³⁾.

2.8.6 BARRERAS DE GÉNERO Y BARRERAS INSTITUCIONALES.

El género se refiere a los roles del hombre y la mujer en la vida social, más allá de su identidad sexual. ¿Cuál es el rol que cumple la mujer en una determinada sociedad? Son preguntas a evaluar la situación del género en esa sociedad y plantear políticas públicas al respecto.

En la actividad jurisdiccional, no es difícil deducir que un juez varón aprecia e interpreta las normas de manera diferente al de una juez mujer, a propósito del mismo caso. En un caso de violencia familiar, por ejemplo, un juez varón será en promedio menos drástico con el denunciado que una juez mujer. En un caso de violación sexual la juez mujer será en promedio más drástica que el juez varón.

El problema se vuelve complejo cuando constatamos que la mayoría de los operadores del Derecho son aún varones en nuestro país. Esto trae como consecuencia que las mujeres víctimas resulten con menos garantías para su tratamiento judicial. En zonas rurales el problema aparentemente es mayor, en tanto las autoridades locales incluyendo a los jueces de paz, resultan ser varones en su totalidad. Sin embargo, en grupos culturales como los Aymaras (Antonio Peña Jumpa, año 1998, al año 2004) no siempre el predominio formal en la comunidad significa subordinación de la mujer: la familia actúa como un órgano garantista.

⁵³ *Idem.*

Con las barreras de género, se relacionan las barreras institucionales. ¿Qué tanto nuestra formación de profesionales del Derecho, de padres o madres de familia, de jóvenes y de niñas o niños ha partido de un criterio equitativo de género? En nuestro medio institucional, incluyendo la universidad y las instituciones públicas en general, la formación académica y aparentemente neutral predomina omitiendo un tratamiento apropiado de las barreras de género, como también de las barreras culturales y sociales.

Las barreras institucionales sin embargo, abarcan muchos aspectos que se entrecruzan y estructuran propiamente el sistema jurídico del Estado. La modernización del sistema de justicia por ejemplo, trae consigo una burocratización difícil de administrar: a la especialidad de los jueces, la creación de nuevos juzgados, la descentralización de los juzgados, la jerarquización de los juzgados o cortes y otros; se suma la creación de nuevas plazas y la contratación de nuevo personal, el control sobre los mismos nuevos jueces, etc. Pero a su vez esta “modernización” nunca termina y la corrupción se apodera de la burocracia apareciendo como una nueva barrera de acceso a la justicia ⁽⁵⁴⁾.

2.8.7 COMUNIDAD ANDINA Y JUSTICIA.

En el contexto antes desarrollado, al igual que el Derecho, la justicia comunal es un aspecto muy importante dentro del funcionamiento de un pueblo, de la comunidad andina. En su contenido, la justicia comunal puede ser apreciada en dos niveles de conflicto relacionados con las áreas de su derecho.

⁵⁴ *Idem.*

Los conflictos familiares son resueltos, recurriendo a órganos de resolución propios de su mundo familiar, con propios procedimientos, con los acuerdos o decisiones y propias formas de ejecución de los mismos. Por ejemplo, en las comunidades Aymaras del sur andino, los órganos familiares son los miembros mayores de la familia nuclear (padre o hermano- mayor por ejemplo), los padrinos o compadres (de matrimonio o bautizo), las propias partes familiares y comuneros ancianos. Los procedimientos que aplican estos órganos se relacionan con la mediación, ejercitando a través del diálogo constante en su idioma materno. Los acuerdos a los que arriban pueden consistir en “buenos arreglos” o en “arreglos forzados”. Por último la ejecución del acuerdo se produce inmediatamente, después de arribar al arreglo, con el apoyo de los otros familiares y de las autoridades comunales, de ser necesario.

El principio de honor familiar es el que guía la resolución de estos conflictos familiares. Los conflictos familiares de otro lado, comprenden también propios órganos de resolución, propios procedimiento, decisiones finales y formas de ejecución. Los órganos de resolución común a nivel de los conflictos comunales son, siguiendo el mismo ejemplo de los aymaras: las autoridades comunales, que comprenden al presidente de la comunidad y al teniente gobernador principalmente, y la asamblea comunal que agrupa al conjunto de miembros de la comunidad.

2.8.8 JUSTICIA DE PAZ E INTERCULTURALIDAD

El Juez de Paz es ante todo un juez empírico, que no se forma en la universidad, sino en la experiencia de la vida diaria y en su comunidad. Su valor e importancia radica justamente en la capacidad empírica que tiene de conciliar o recomponer la relación de dos partes en conflicto dentro de una comunidad o pueblo.

Esta cualidad empírica ha hecho que los jueces de paz sean operadores del Derecho con legitimidad reconocida a diferencia de la justicia ordinaria. Estudios de Hans Jurgen Brandt (1990) demuestra cómo estos jueces alcanzan un alto porcentaje de aceptación en la población (49.1% de los encuestados los consideran muy buenos, y 41.9% los considera como buenos) y en los litigantes (63.3% consideran estar satisfechos con su labor) ⁽⁵⁵⁾.

De otro lado los jueces de paz, especialmente en la región andina, dentro de la comunidad o de los centros poblados, es parte de la justicia indígena o especial, ya que dichos jueces no son ajenos a sus pares, son también vecinos de lugar donde se ejerce el cargo, habla además del español el idioma quechua o aymara u otro idioma que predomina en el lugar donde se va actuar. Por ello en los últimos tiempos el interés y liderazgo del Poder Judicial en estos temas, por cuanto moviliza y compromete a todos sus miembros a trabajar por el reconocimiento y coordinación entre los sistemas de justicia existentes en el país, acciones que se van cristalizando gracias al trabajo que se realiza en diversos distritos judiciales como es el caso de Apurímac a través de la Escuela de Justicia de Paz Intercultural ⁽⁵⁶⁾.

Bajo dichos presupuestos se puede concluir que el Juez de Paz es un ciudadano del lugar, que habla el idioma del lugar, es parte de la interculturalidad jurídica. La formación académica no es importante para su elección, como si lo puede ser su capacidad de

⁵⁵ Academia de la Magistratura, *Interculturalidad Módulo Auto instructivo, Especialista responsable de la elaboración*: Antonio Peña Jumba, Lima 2011, pág. 69.

⁵⁶ Negrón Muñoz, Fernando, *La Justicia de Paz y la Justicia Indígena en la agenda del Poder Judicial, Boletín Informativo de la Escuela de Justicia de Paz Intercultural, Año I, nro. 1, Abancay octubre 2011, pág. 9.*

sentido común y pragmatismo al resolver conflictos en su comunidad.

2.9 REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAMELICA:

2.9.1 REGIÓN HUANCAMELICA.

Está ubicado en la cadena occidental y central de la sierra central, enclavado en las altas montañas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junín. Limita al norte con Junín; al sur con Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Su belleza natural y sus recursos energéticos lo convierten en una región de gran potencial para su desarrollo.

Tiene una población total de 427,009. Hombres: 206,506. Mujeres: 220,503; con 7 provincias número de distritos: 93; en cuando a su división administrativa la región La región Huancavelica tiene una extensión de 22,131.47 km² y se divide en siete provincias: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampá, Huaytará y Tayacaja.

2.9.2 DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAMELICA

La Corte Superior de Justicia de Huancavelica fue creada mediante Ley N° 9696 con fecha 06 de enero del año 1944, acontecimiento en que se realizó la sesión de instalación respectiva en el local designado para el funcionamiento de la Corte Superior, el cual estaba ubicado en los altos de la Prefectura de Huancavelica, contando con la presencia del señor Carlos Palomino Prefecto del Departamento quién presidió el acto por mandato de la Resolución Suprema de fecha 02 de diciembre del 1943, así como el Doctor Celestino Manchego Muñoz Senador por

el departamento de Huancavelica y el Doctor José Manchego, Diputado por la provincia de Castrovirreyna.

En la primera sesión de Sala Plena, se eligió por unanimidad como presidente de la Corte al Doctor Alejandro Álvarez León para el año judicial del año 1944, siendo el primer Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica.

Es importante señalar que, la Corte Superior Justicia de Huancavelica actualmente está constituido por las provincias de Castrovirreyna, Angaraes, Acobamba, Huancavelica y el distrito de Pilpichaca perteneciente a la provincia de Huaytará, como es de advertirse no está constituido por las 7 provincias que son parte de su demarcación política, el cual está diseñado para permitir a los ciudadanos el acceso al servicio de justicia especialmente por las dificultades de acceso geográfico a la capital de la región Huancavelica.

2.9.3 ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

La provincia y capital de la región Huancavelica cuenta con Sala Penal, Sala Civil, 1° juzgado penal, 2° juzgado penal, el primer juzgado civil, segundo juzgado civil, 1° juzgado de paz letrado, 2° juzgado de paz letrado, juzgado de paz letrado de ascensión, juzgado de paz letrado de Izcuchaca, además de 109 juzgados de paz.

La provincia de Acobamba cuenta con un juzgado mixto, un juzgado de paz Letrado, además de 40 juzgados de paz.

La provincia de Angaraes, actualmente cuenta con un juzgado mixto, juzgado de paz letrado y 24 juzgados de paz.

En la Provincia de Castrovirreyña funciona un Juzgado Mixto, Juzgado de Paz Letrado en el distrito de Tantará, mas 25 Juzgados de Paz.

2.10 REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN

2.10.1 REGIÓN JUNIN.

Superficie y Ubicación Geográfica.

Esta región se encuentra ubicada en la zona central andina, cuenta con 9 provincias, con territorio que cuenta con una área total de 44,197 Km² abarca dos regiones naturales, limita con los departamentos de Huancavelica y Ayacucho al sur; Pasco y Ucayali al norte, Lima al oeste, y Cusco por el este.

La superficie de la región Junín es propicia para la agricultura y ganadería; con una población censada en el año 2007 que asciende a 1'232, 611 habitantes. La provincia de Huancayo, especialmente el área urbana concentra el 37,8 por ciento del total.

El departamento de Junín, fue creado el 13 de Setiembre del año de 1825 y políticamente se halla constituido por nueve provincias: Huancayo (la capital, Chupaca, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Chancha mayo, Satipo y Concepción)

2.10.2 DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN.

La Corte Superior de Justicia de Junín fue creada por Decreto Supremo del 4 de mayo del año 1920 y se instaló el 15 de mayo del año de 1920, bajo la presidencia de Augusto B. Leguía.

Huancayo es sede de de la Corte Superior de Justicia de Junín, ente rector del Distrito Judicial de Junín. De acuerdo a la

organización judicial del país, en el territorio de la ciudad de Huancayo funcionan ocho juzgados de paz letrado (tres pertenecientes al distrito del Tambo, cuatro al distrito de Huancayo, y uno a Chilca). Diecisiete juzgados especializados (cuatro de familia, cinco civiles, siete penales y un juzgado laboral) y seis salas superiores (tres penales y tres mixtas).

La competencia de la Corte de Junín se extiende a toda la región Junín, además de la provincia de Oxapampa perteneciente a la región Pasco; la provincia de Tayacaja de la región Huancavelica, las que son por razones de cercanía a la sede judicial de Huancayo donde se encuentran los órganos jurisdiccionales de segunda instancia.

2.10.3 ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

En la ciudad de Huancayo capital de la región Junín y sede de la Corte de Junín, cuenta con las siguientes Salas Superiores: Primera Sala Mixta, Segunda Sala Mixta, Primera Sala Penal, Segunda Sala Penal, Tercera Sala Penal.

Igualmente la citada Corte cuenta con la primera sala mixta descentralizada de la merced, segunda sala mixta, La Merced y la recientemente creada sala mixta de Tarma.

En cuanto a los juzgados de la provincia de Huancayo, como sede principal cuenta con 07 Juzgados Civiles. A la vez con 8 Juzgados Penales, además de los cuatro Juzgados de Familia y un Juzgado Laboral.

El Distrito de El Tambo cuenta con tres juzgados de paz letrados, la ciudad de Huancayo, con 05 Juzgados de Paz Letrados y el Juzgado de Paz Letrado de Chilca.

En las provincias del Distrito Judicial de Junín, entre ellas la provincia de Chanchamayo- La Merced cuenta con el Juzgado Civil, Primer Juzgado Penal, Segundo Juzgado Penal, Primer Juzgado de Paz Letrado, Segundo Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado de Paz Letrado de Pichanaki.

La Provincia de Chupaca con un Juzgado Mixto y un Juzgado de Paz Letrado de Chupaca. Mientras que la Provincia de Concepción con un juzgado mixto, un juzgado de paz letrado, además de un juzgado penal transitorio. La provincia de Jauja con el primer juzgado penal, segundo juzgado penal, juzgado civil y juzgado de paz letrado.

La provincia de Tarma tiene en su sede al juzgado mixto de Tarma, primer juzgado penal, segundo juzgado penal, primer juzgado de paz letrado, segundo juzgado de paz letrado. En tanto que la provincia de Junín con un juzgado mixto. La provincia de Yauli-La Oroya con el primer juzgado mixto, segundo juzgado mixto, juzgado de paz letrado.

La provincia de Satipo con dos juzgados mixtos de paz letrado, el juzgado penal de Satipo transitorio, un juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado de San Martín de Pangoa. Finalmente la provincia de Tayacaja- Pampas (Huancavelica) con un juzgado mixto, un juzgado de paz letrado. La provincia de Oxapampa (Pasco) con un juzgado mixto y un juzgado de paz letrado en Villa Rica.

El distrito judicial de Junín es el que cuenta con mayor número de jueces de paz: un total de 464 juzgados de paz.

2.11 REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE AYACUCHO

2.11.1 REGIÓN AYACUCHO.

UBICACIÓN:

El departamento de Ayacucho se encuentra ubicada en la zona sur – central de los Andes peruanos, cuenta con 11 provincias y 109 distritos, con un área total de 43 815 Km², La población censada en el año 2007, ascendió a 612,489 habitantes, con una densidad de 14 habitantes por Km².

La región de Ayacucho políticamente se halla constituida por once provincias: Huamanga, Cangallo, Huanca Santos, Huanta, la Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuaman.

2.11.2 DISTRITO JUDICIAL DE AYACUCHO.

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho fue creada por Ley del Congreso el 4 de diciembre de 1832, siendo Presidente de la República el General Agustín Gamarra, Presidente de la Cámara de Senadores Manuel Tellería y Presidente de la Cámara de Diputados José María Pando, debiendo componerse dicha Corte con siete vocales y un fiscal.

INSTALACIÓN.

El 21 de marzo de 1844, después de doce años de creada se instaló la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con la asistencia del Secretario General de la Junta de Gobierno, don Manuel Mariano Basagoitia, vocales y fiscales nombrados, autoridades principales del departamento, vecinos notables y ciudadanía en general, la misma que se llevó a cabo en un salón provisional acondicionado para el efecto en el local de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, siendo su

primer Presidente el doctor Pedro José Flores y Vocales don Gervasio Álvarez y Pablo José Ruiz.

Inicialmente la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se instaló y funcionó en el edificio de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pero el 5 de diciembre del año 1939 el gobierno, por intermedio del Ministerio de Fomento y Obras Públicas adquirió en dicha ciudad la vieja casona de la familia García del Barco. En el Siglo XVIII, la casona perteneció al regidor José García del Hoyo y después a la familia García del Barco; su restauración se culminó en el año 1952. El 18 de marzo del año 1953 se inaugura el local de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, siendo Presidente de Corte el Dr. Benjamín A. Salcedo, funcionando en dicho lugar hasta la actualidad.

El Distrito Judicial de Ayacucho tiene como sede a Huamanga, su competencia se extiende a 9 provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos, Sucre (Ayacucho) y Churcampá (Huancavelica). Señalar que las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara se ha incorporado recién.

2.11.3 ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

La sede de la Corte superior, esto es la ciudad de Huamanga, cuenta con los siguientes órganos jurisdiccionales: Salas Superiores: 02 Salas Penales, y una Sala Especializada Civil, además de los Juzgados especializados: dos Juzgados Civiles, un Juzgado de Derecho Constitucional, además 06 Juzgados Penales. Además cuenta con 02

Un Juzgado de Familia, 03 Juzgados de Paz Letrados, el Juzgado de Paz Letrado – Comisaría 28 de Julio, el Juzgado de

Paz Letrado – Comisaría Carmen Alto (02 turnos), está también los Juzgados de Paz Letrado de San Juan Bautista y del Distrito de Vinchos.

La provincia de Cangallo cuenta con un Juzgado Mixto, Juzgado de Paz Letrado de Totos, Juzgado de Paz Letrado de Chuschi. La Provincia Huancasancos con un Juzgado Mixto, la Provincia de Huanta, con una Sala Mixta, además de Juzgado Mixto, Juzgado Penal, Juzgado de Paz Letrado, Juzgado de Paz Letrado de Sivia.

La Provincia de La Mar con un Juzgado Mixto de Ayna San Francisco, Juzgado de Paz Letrado de Ayna – San Francisco, Juzgado Mixto de Chungui, La Mar. La Provincia de Sucre con un Juzgado Mixto. En tanto que la Provincia Víctor Fajardo tiene Juzgado Mixto. La Provincia de Vilcashuaman con un Juzgado Mixto, finalmente la Provincia Churcampá con un Juzgado Mixto.

La Corte Superior de Justicia cuenta además con 295 Juzgados de Paz, convirtiéndose también como una de las Cortes Superiores con mayor número de Jueces de esa instancia judicial.

2.12 REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE APURÍMAC

2.12.1 REGIÓN APURÍMAC.

La región Apurímac tiene una superficie territorial de 20, 895 km² y representa el 1,6 por ciento del territorio nacional, siendo la provincia de Aymaraes la más extensa con el 20,2 por ciento de la superficie territorial de la citada región.

Está ubicada en el sur este de los andes centrales del Perú, El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 concluye que la población de la citada región fue de 404 190 habitantes,

ubicándose en el área rural el 54,1 por ciento de la población y el 45,9 por ciento en el área urbana.

La región Apurímac está constituido por 7 provincias y 80 distritos. La ciudad capital es Abancay, las provincias de Andahuaylas, Aymaraes y Grau son las provincias que políticamente se encuentran divididas en el mayor número de Distritos.

2.12.2 DISTRITO JUDICIAL DE APURIMAC.

La Corte Superior de Justicia de Apurímac fue creada por Ley N° 8242 y se instaló, el 7 de septiembre del año 1936, bajo la presidencia de Óscar R. Benavides.

Tiene como sede la ciudad de Abancay y su competencia se extiende a toda la Región Apurímac. El 22 de mayo del año 2009, en un histórico acto llevado a cabo en la Sala del Oidor del Palacio de Justicia del Cusco, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco Dr. Darwin Somucurcio Pacheco, suscribió el Acta de transferencia e incorporación de la provincia de Cotabambas a la competencia territorial del Distrito Judicial de Apurímac, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 123-2009-P-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

2.12.3 ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

En la provincia y capital de la región Apurímac Abancay, que es la sede de la Corte Superior de Abancay, cuenta con la primera Sala Mixta de Abancay, una Sala Penal Transitoria, además de un Juzgado Mixto, Primer Juzgado Penal, Segundo Juzgado Penal, Tercer Juzgado Penal Transitorio de Abancay, Primer Juzgado de Familia, Primer Juzgado de Paz Letrado, Segundo Juzgado de

Paz Letrado, Juzgado de Paz Letrado Transitorio, Juzgado Civil Transitorio, Juzgado de Familia Transitorio, Tercer Juzgado de Paz Letrado Tamburco, Cuarto Juzgado de Paz Letrado – Casinchihua, Juzgado de Paz Letrado – Pueblo Joven Centenario, Juzgado de Paz Letrado de Curahuasi.

La provincia de Andahuaylas cuenta con una Sala Mixta Descentralizada Itinerante, además del primer juzgado civil, dos juzgados penales, dos juzgados de familia, dos juzgados de paz letrados, segundo juzgado civil transitorio, juzgado de paz letrado de Huancarama.

La provincia de Antabamba cuenta con un juzgado mixto y un juzgado de paz letrado. En tanto que la provincia de Aymaraes con un juzgado mixto y juzgado de Paz Letrado de Chalhuanca. La provincia de Chincheros con un juzgado mixto y juzgado de paz Letrado, la provincia de Grau con un juzgado mixto, juzgado de Paz Letrado de Chuquibambillas como el juzgado de paz letrado de mamara. La provincia de Cotabambas con juzgado mixto y un juzgado de paz letrado.

Además de los órganos jurisdiccionales antes señaladas la Corte de Apurímac cuenta con 233 Juzgados de Paz.

2.13 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMPARADO

2.13.1 LA JUSTICA DE PAZ EN EL DERECHO COMPARADO

Al igual que en nuestro país, también en España, Portugal así como en algunos países latinoamericanos es materia de debate, polémicas, críticas y posiciones encontradas con relación a la función pública de impartición de justicia a cargo de los Poderes Judiciales de nuestros países, las que en su mayoría tienen bajos niveles de aprobación y legitimidad por la ciudadanía, por ello es

que periódicamente en cada uno de nuestros países se discute reformar la justicia, modernizarla y principalmente que sea efectiva y eficiente la función jurisdiccional, de fácil acceso para los ciudadanos.

Principalmente por la temática del acceso a la justicia es que, además de la justicia ordinaria muchas veces ineficiente, se viene promoviendo otros medios alternativos de solución de conflictos, la justicia de cercanía y la justicia de paz rural y urbana, los que permitan y faciliten el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, sin las barreras que a la fecha existen y vulneran el derecho fundamental a la justicia. En ese entendido, a continuación recogemos la diversidad de dichas instancias de cercanía, con las características propias de la justicia de paz, las que se vienen implementando en España y los países vecinos.

2.13.1.1 COLOMBIA

a) ANTECEDENTES DE LA FIGURA DEL JUEZ DE PAZ

En el caso de Colombia, el artículo 247 de la Constitución del Estado dispone que, “la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.

La normativa constitucional ha sido desarrollado legislativamente, en especial para los centros urbanos con la llamada Justicia en equidad, que viene a ser también una forma o modalidad de la justicia comunitaria, justicia en equidad que, en sentido genérico debe verse como una herramienta en la que se apoya el sistema jurídico, para subsanar las distancias que puede haber entre derecho y la justicia⁵⁷.

⁵⁷ *ARDILLA Amaya, Edgar, Coordinador. A dónde va la justicia en equidad en Colombia. Corporación Regional, Medellín, 2006, Pág. 98*

Los fines buscados por el constituyente al incorporar la figura de los jueces de paz en el ordenamiento colombiano, se reflejan consultando los debates surtidos en la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre el particular en la Gaceta Constitucional No. 66 Informe de Ponencia, de ellos se resalta que la consagración constitucional de esta figura fue resultado de varias iniciativas presentadas por diferentes delegados a la Asamblea, que confluían en cuanto a los rasgos principales de la nueva figura que se proponía.

Es necesario precisar también que la institución de los Jueces de Paz en Colombia, no es nueva, fue introducida desde las épocas más tempranas de la colonización española en América, pero progresivamente cayó en desuso, hasta el punto de que al final del siglo XX, durante la década de los años ochenta, Perú era el único Estado Latinoamericano que aún conservaba en plena vigencia y que se mantiene hasta la fecha⁵⁸.

En general, la introducción de esta figura al ordenamiento – junto con la de otras formas alternativas de resolución de conflictos- obedeció no sólo al imperativo de descongestionar la Rama Judicial para atender con más eficacia las necesidades ciudadanas de impartición de justicia, sino también a un replanteamiento fundamental de la relación existente entre el Estado en particular, aunque no exclusivamente la Administración de Justicia y la

⁵⁸ REVILLA, María Teresa: *'La Justicia de Paz y las organizaciones sociales en el Perú. En: Barrios Giraldo, Adriana Elvira (ed.): "Conflicto y Contexto Resolución Alternativa de Conflictos y Contexto Social. Instituto Ser de Investigaciones Tercer Mundo Editores Colciencias Programa de Reinserción, Bogotá, 1997: (a) cercanía a la comunidad cuyos conflictos cotidianos habrá de resolver el Juez de Paz, (b) competencia para resolver conflictos menores de manera ágil e informal es decir, sin ritualismo o formulas procesales, (c) respetabilidad del juez dentro del medio social en el cual habrá de desempeñar su función (d) adopción de fallos en equidad, (e) coercibilidad de sus decisiones y f) elección por parte de la comunidad.*

sociedad, tanto desde la perspectiva genérica de la consagración del Estado Social de Derecho en tanto fórmula política fundamental, como desde el punto de vista específico de la introducción de una serie de mecanismos alternativos a la justicia formal para la resolución de los conflictos sociales, fue deseo del constituyente, consolidar un modelo nuevo de interacción entre la ciudadanía y el poder público, que –entre otras- fomentará, un acercamiento progresivo de los mecanismos formales de promoción de la convivencia y paz social a las realidades sociales en las que habrían de operar el Estado.

La figura de los jueces de paz también es reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró al Constituyente colombiano del año 1991. Ya ha señalado la jurisprudencia de esta corporación que “la institución de los Jueces de Paz, se inscribe dentro del concepto de democracia participativa, al permitir la intervención del ciudadano en el cumplimiento de funciones del Estado, como lo es en este caso, la Sentencia C-536 del año 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y que “esta institución guarda también relación con algunos de los deberes que la Constitución consagra a cargo de la persona y del ciudadano, concretamente los de 'propender al logro y mantenimiento de la paz (art. y 95-6 C.P.) y el de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95-7 C.P.).

En este mismo orden de ideas, es aplicable a los jueces de paz, lo que la Corte Constitucional ha afirmado respecto de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos: “no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan.

En este sentido, es incuestionable su estirpe democrática, en la medida en que generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional evitando conflictos en la sociedad y logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia, estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia social. Así lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-893 del año 2001, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández.

Señala la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, ponente en la Sentencia C-893/91, que: “los mecanismos alternativos de solución de conflictos no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan. En este sentido, es incuestionable su estirpe democrática, en la medida en que generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por ende el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia social. Desde esta perspectiva, se ha considerado que el presupuesto básico para la efectividad de la justicia consensual es la existencia de una sociedad civil organizada, integrada cultural, valorativa y normativamente”, pues al decir de Auerbach “Sólo cuando existe congruencia entre los individuos y su comunidad, con valores y deberes compartidos, existe la posibilidad de justicia sin Derecho”.

El objetivo final que se desarrollan en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en qué casos acudir al Juez de Paz, para minimizar los procedimientos y evitar así las congestiones en

la justicia ordinaria, con el único ánimo de alcanzar el mejor beneficio para su cliente y en el menor tiempo posible, eso sí teniendo muy en cuenta, cual es la competencia, jurisdicción y alcances de este mecanismo alternativo, en la Administración de Justicia, que también es reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró al Constituyente del año 1991.

En esa medida, la creación de los jueces de paz fue prevista como un canal para que el ciudadano común participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal: “se trata, en últimas que personas, que en principio no cuentan con una formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del Derecho.

Con todo vale anotar que se trata de inconvenientes, en apariencia pequeños o intrascendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial”⁵⁹.

En el caso de Colombia, fue voluntad expresa del Constituyente conferir al Legislador un amplio margen de configuración en cuanto a la regulación de la institución de los jueces de paz, puesto que no sólo dejó a decisión suya la determinación del momento y la forma en la que tales jueces serían creados –“la ley podrá crear jueces de paz...” (art. 247, C.P.)- y designados –“...podrá ordenar que se

⁵⁹ Sentencia C-536 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo, Mesa

elijan por votación popular” (id.)-, sino que no impuso límites específicos (distintos a los que representan las demás disposiciones constitucionales) a la potestad reconocida al Legislador en esta materia.

En ejercicio de esta amplia potestad otorgada por el Constituyente, el Congreso de la República aprobó la Ley 497 del año 1999 que, le da vida a los Jueces de Paz y Jueces de Reconsideración y los reglamenta. Una de las principales tareas de este Juez, es encontrar los postulados de la costumbre en la comunidad que lo ha elegido, detecta el conflicto como tal; si éste es transigible, conciliable y desistible lo trata y ayuda a encontrar soluciones.

Al señalar ello, el texto constitucional del año 1991 da la posibilidad de que un Juez de Paz encargado de resolver en equidad, juez además de comunitario, elegido por la comunidad, con la posibilidad de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, no sólo ha ampliado la oferta pública de justicia, sino que ha consagrado el pluralismo jurídico, como característica del ordenamiento colombiano, a partir de la nueva Constitución.

Esto implica la liquidación del monopolio estatal en dos significados esenciales: el de la fijación de la regla y la resolución de las controversias. Significa además que en relación con las fuentes del Derecho y con el poder de resolver las controversias entre particulares, la jurisdicción de paz es la primera frontera constitucional entre Estado y Sociedad⁶⁰.

Señalar finalmente que, los fallos de los jueces de paz, deben ser cumplidas en su integridad, como ha establecido su Corte Constitucional en la que señala que, ".....en ese orden de ideas, se

⁶⁰ Armando Morales, Investigador, <http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1656>

debe concluir que las decisiones adoptadas por los Jueces de paz en los asuntos en los que tiene competencia para el efecto, tienen fuerza obligatoria y definitiva, lo que significa que ponen fin al conflicto de que se trate, y en esa medida deben ser cumplidas por las partes y por las autoridades, cuyo concurso sea necesario a fin de lograr su acatamiento, como quiera que tienen los mismos efectos que las sentencias dictadas por los jueces ordinarios. De otra forma no tendría sentido que, la Constitución y la Ley les hubiera confiado la función de decidir en equidad, los asuntos de los que, de acuerdo con el ordenamiento, pueden conocer....”⁶¹

A diferencia de nuestro país, los jueces de paz de Colombia no tienen competencia para cumplir funciones de los Notarios Públicos, solo resuelve conflictos, información que nos ha hecho conocer la Dra. Sonia Timaná, Fiscal en lo Penal del Circuito de Cali, quien por ejercer su función en zonas periféricas de la citada ciudad tiene coordinación permanente con la judicatura de paz.

En conclusión, en Colombia para ser Juez de Paz se requiere ser mayor de edad, disfrutar plenamente de los derechos civiles y políticos. Haber residido por lo menos un año en la comunidad, la elección popular es por 5 años. Los jueces de paz y los de reconsideración constituyen una especie de segunda instancia y forman parte del Poder Judicial. Es una labor ad honorem no sujeta a remuneración, forman parte de la rama judicial del poder público. Pertenecen al orden municipal, con competencia y cuantías no superiores a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay medidas de carácter comunitario quien no cumpla con lo ordenado en las sentencias, multas de hasta por 15 salarios o actividades comunitarias.

⁶¹ Sentencia T-638/10, demandante: Carlina Peñaloza Patino, Demandado: Inspección de Policía del Barrio la Riviera de Cali, Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza, 17 de Agosto del 2010.

2.13.1.2 ESPAÑA

En España, especialmente en las zonas rurales está arraigado la Justicia de Paz que viene el órgano jurisdiccional que suele estar personalizado en un individuo particular, de un municipio donde no hay juzgado de primera instancia. Realiza funciones de Juez y es tratado como tal aunque no sea letrado de formación.

Generalmente el Juez de Paz es elegido por la mayoría del consistorio del pueblo y todos los vecinos censados o residentes, quienes pueden optar por dicho cargo. Dicha autoridad generalmente es el mediador entre discusiones familiares o entre deudas de poca cantidad, menos de 90 euros. Las escenas más cotidianas del pueblo, así como discusiones entre vecinos u hermanos suelen ser gestionadas y resueltas por la figura del Juez de Paz.

El sistema judicial español ha otorgado competencia para que los Jueces de Paz tengan a su cargo los Registros de Estado Civil, por lo mismo que son los responsables de la custodia y llevanza de los libros que registran nacimiento, estado civil, los hechos que afectan la capacidad de obrar y la defunción de las personas de su municipio.⁽⁶²⁾

Los juzgados de paz en España son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en un municipio en el que no existe un juzgado de primera instancia e instrucción. Generalmente están atendido por jueces legos (no profesionales), llamados jueces de paz que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, encargados de

⁽⁶²⁾ www.cosaslegales.es/que_hace_el_Juez_de_Paz

resolver cuestiones de menor relevancia, los juzgados de paz prestan al ciudadano el servicio más sencillo dentro de la compleja administración de justicia.

La figura y competencias de los jueces y juzgados de paz están regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley 6/1985 del 1 de julio de 1985.:

a) CARACTERISTICAS Y NOMBRAMIENTO

Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en su artículo 99 dispone:

1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz

2. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados.

Artículo 101. 1. Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez de primera instancia e instrucción y tomarán posesión ante quien se hallará ejerciendo la jurisdicción.

Artículo 102. Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes aun no siendo licenciados en Derecho reúnan los requisitos establecidos en dicha Ley para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el

desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Los jueces de paz y los sustitutos en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.

Los jueces de paz son compensados por su actividad en los términos que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta compensación que varía según el número de habitantes del municipio es compatible con las percepciones que ingresen provenientes de otras actividades profesionales compatibles con el ejercicio del cargo. Mientras dura su cargo los jueces de paz integran el Poder judicial, gozando para ello de inmovilidad temporal.

b) COMPETENCIAS

Los juzgados de paz conocerán en el orden civil, de la substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la Ley determine. Cumplirán también funciones de registro civil y las demás que la Ley les atribuya.

En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir igualmente, en actuaciones penales de prevención o por delegación y en aquellas otras que señalen las leyes respectivas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que pueda haber una única Secretaría para los juzgados de paz. De esta manera, encontramos distintos tipos de juzgados de paz, unos que están abiertos de lunes a viernes y son los denominados Juzgados de

Paz. Otros solamente están abiertos durante unos días en concreto de la semana (Agrupaciones de secretarías de juzgados de paz).

Esto es debido a que existen pueblos muy pequeños (menos de 7.000 habitantes) que, hasta hace pocos años carecían de personal profesional específico de justicia que pudiera atenderle adecuadamente. Por ello se crearon las Agrupaciones de Secretarías (un mismo Secretario atiende a varios Municipios), para que su pueblo cuente con una persona que le pueda orientar, además evitarle desplazamientos innecesarios. Como es lógico, esta persona junto con otros profesionales de la justicia están obligados a desplazarse cada día de la semana a un municipio distinto.

En aquellas poblaciones que cuenten con una cantidad inferior a 7.000 habitantes o que no estén agrupados los juzgados de paz, para formar una agrupación de secretarías de juzgados de paz, es personal del propio Ayuntamiento quien atiende las funciones del juzgado de paz. En centro de estudios jurídicos y formación especializada organiza anualmente seminarios de formación para jueces de paz de todo el territorio, para darles la información más actualizada sobre sus competencias, así como sobre otras materias relacionadas con el ejercicio de su cargo.

c) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 99 a 103.
- Reglamento Orgánico de Jueces de Paz, reglamento 3/1995 de 7 de junio, del año 1995.
- Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 47 y art. 250.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 14.

- BOE de 17 de junio del año 2008, sobre funcionamiento y organización de los Registros Civiles de los juzgados de paz y su informatización. ⁽⁶³⁾

En el país ibérico, para acceder a la judicatura de paz deben cumplir con los requisitos para ingresar en la carrera judicial. Lo hace el pleno del Ayuntamiento del pueblo y son nombrados por la Corte de Justicia por el periodo de 4 años, no hay recurso de apelación. Forman parte del Poder, reciben una retribución económica 90 euros. Su desempeño judicial está reglamento, tiene competencia penal mas no cumple función notarial.

2.13.1.3 ECUADOR

En Ecuador, la justicia de paz fue incluida en el ordenamiento constitucional del año 1998, como un método alternativo de solución de conflictos, y que fue reinsertada dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en la Constitución de la República del año 2008, desarrollada dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, como una alternativa más a la justicia formal ordinaria que, como en la mayoría de nuestros países es ineficiente, dilatorio y en ocasiones inalcanzable para ciertos grupos sociales, por los numerosos casos en las instancias del Poder Judicial, sino fundamentalmente por la desconfianza que siente la sociedad ecuatoriana respecto al sistema de justicia de su país.

El constituyente ecuatoriano ha buscado herramientas para mejorar el sistema de justicia, en esa idea la Carta Magna del año 1998, reincorpora a la justicia de paz como medio de solución de conflictos. Sin embargo, dicha figura en la práctica no generó la

⁶³ [http://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado de Paz](http://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado_de_Paz) (Espana%C3%B1a)

importancia ni la seriedad que requería para su aplicación. En la Constitución del año 2008, se reinstaura la existencia y estructura básica de la justicia de paz, con lo que se la refuerza y consolida pues pasa a constituirse en un órgano jurisdiccional de la función judicial, dotando al Juez de Paz de ejecutar las sentencias que él mismo emitió, al igual que los demás jueces.

Se ha establecido un enfoque más pragmático para la justicia de paz, sin desconocer su carácter sui generis al utilizar métodos alternativos de solución de conflictos. El Código Orgánico de la Función Judicial, determina las bases institucionales de su aplicabilidad. A pesar de las disposiciones legales que fundamentan la base de la justicia de paz, sus disposiciones no han resultado suficientes, en mayo del año 2010, hubo un intento de normar la figura a través de un reglamento, que no pasó de ser un proyecto, por lo indicado la insuficiencia normativa se ha mantenido en el citado país.

a) EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

En América, la Constitución de Cádiz del año 1812 a pesar de su breve vigencia, fue la norma que influyó en los textos constitucionales de las nuevas repúblicas de las colonias americanas, para la implementación de la justicia de paz. El primer país que incorporó en su Constitución del año 1816 a la justicia de paz fue Venezuela, seguido de Perú, en el primer texto constitucional del año 1823 y Bolivia en la Constitución del año 1826 ⁽⁶⁴⁾.

⁶⁴ PROJUSTICIA (Propuesta de justicia de Paz para el Ecuador, ha elaborado una interesante definición de Justicia de Paz al identificarla como: el ejercicio estatal jurisdiccional autónomo e independiente, dentro de la función Judicial, que, con base en los valores comunitarios, promueve el acceso a la justicia, a nivel parroquial y local, así como también facilita el manejo de conflictos a partir de la mediación, equidad y la búsqueda de la convivencia pacífica.

Con respecto a Ecuador, en el siglo XIX la justicia de paz no estaba reconocida por los textos constitucionales a pesar de encontrarse vestigios de la justicia de paz desde la época prehispánica en la que, los conflictos eran ventilados ante los caciques de los pueblos indígenas o en algunos casos, las diferencias se solucionaban mediante la intervención de los mayores o ancianos. Durante la colonia los reyes españoles crearon instituciones como las Encomiendas, el defensor natural y el cabildo para dar un trato equitativo a los indígenas. En este período, los clérigos desempeñaron una función mediadora entre criollos, indios y blancos y, consecuentemente defendían los principios de la justicia y paz. En esta época ya se denota la figura de los jueces de paz.

La definición de justicia de paz en Ecuador se puede calificar de carácter mixto, en base a que pertenece a la función judicial del Estado y por otra parte aplica las formas no contenciosas de solución de conflictos de sus pueblos como: la conciliación y la equidad. Por ende, posee una estructura propia, sui generis que la hace distinta de los demás órganos del poder judicial. Es una instancia de conciliación de las poblaciones comunitarias, de carácter no formal, ejercida por personas legas o miembros de la comunidad, los mismos que solucionan conflictos comunales, vecinales utilizando mecanismos como la conciliación, el diálogo, acuerdos amistosos u otros métodos practicados por la comunidad con el fin de restablecer el equilibrio y la paz social de sus pueblos, sin perjuicio de que el encargado de resolver el conflicto pueda juzgar en equidad en caso de que no prosperen dichos mecanismos.

b) CARACTERÍSTICAS.

El Juez de Paz en Ecuador, lego en Derecho, es el que debe ser imparcial y neutral, es decir no debe tener preferencia por ninguna de las partes. Su neutralidad garantiza a las partes un tratamiento imparcial e igualitario a lo largo de la conciliación. No puede imponer acuerdos a las partes, pero puede proponer fórmulas o criterios de Solución.

El Juez de Paz debe ser un líder comunitario, leer, escribir y expresarse en su propia lengua y poder establecer una relación de confianza, tener la capacidad de entender los problemas de la comunidad donde fueron elegidos; practicar la escucha activa, ser respetuoso y gozar de credibilidad frente a las partes. Como se ha señalado, la conciliación es la herramienta esencial de la labor jurisdiccional del Juez de Paz, el cual constituye un instrumento procesal idóneo para la solución de diferendos que se producen entre personas que tienen un vínculo entre sí: parejas, familiares, vecinos, etc. Ellos procuran solucionar su problema antes de poner en peligro sus relaciones. La equidad es la principal herramienta de la que dispone el Juez de Paz en su labor. Suele definirse como lo “justo comunitario” o lo “justo local” decisiones se sometan a una concepción de justicia aceptable en cada contexto comunitario.

Dichos jueces son hacedores de justicia y no aplicadores de las normas jurídicas, por eso su actuar debe estar basado en la equidad y no necesariamente en el Derecho. Esto porque las decisiones jurídicas pueden ser injustas en un caso concreto.⁶⁵

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 190 señala que: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos

⁶⁵ PROJUSTICIA, *Propuesta de Justicia. de Paz para el Ecuador*, op. Cit.p.11.

procedimientos, se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza, se pueda transigir”. Por ello, una de las características del Juez de Paz es su carácter conciliador, a diferencia del juez profesional del resto de la estructura judicial. Este carácter conciliador implica que el Juez de Paz, no se sujeta al Derecho positivo en el momento de solucionar el conflicto, sino que, aplica técnicas como la conversación persuasiva, la escucha activa para lograr un advenimiento entre las partes, sin necesidad de estar sometidos a la presión de formalismos que impiden la solución del conflicto de una manera pacífica. Si bien la ley lo dota al Juez de Paz de imperium para dictar sentencias en algunas materias, dicho poder lo utiliza en su mínima expresión y básicamente como un mecanismo de presión para avenir y conciliar a las partes. En este sentido es importante destacar que la conciliación es voluntaria y no existe presión por parte del Juez de Paz.

c) LA JUSTICIA DE PAZ ES UNA INSTITUCIÓN SUI GENERIS EN ECUADOR.

Uprimny en su artículo “Justicia de Paz y justicia informal” desarrolla una aproximación conceptual de sus potencialidades y limitaciones, señala que “La justicia de paz goza de una doble naturaleza, es decir es una institución bisagra entre las formas no estatales de solución de conflictos y el Derecho oficial, pues si bien es una autoridad reconocida⁽⁶⁶⁾ constitucionalmente, decide aplicando la equidad local para lo cual incorpora en su lógica muchos elementos del derecho no oficial y de los usos y costumbres propios”. Pues en el Ecuador como lo señala Vintimilla, la justicia de paz es una institución bisagra que sirve de nexo o

⁶⁶Vintimilla, José, *Los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en las Comunidades Indígenas Ecuatorianas*, artículo publicado en el libro *Resolución Alternativa de Conflictos*, Centro de Mediación de la CLD, Quito, 1997, p. 184.

punto entre la justicia estatal y comunitaria, más aún si usa los MASC comunitarios y la equidad o justicia que emerge del caso concreto, o sea se centra en el Derecho justo y no en la justicia legal ⁽⁶⁷⁾.

De acuerdo a lo señalado en líneas anteriores se concluye que, la Justicia de Paz en Ecuador es una jurisdicción especial que al encontrarse dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y que al utilizar mecanismos informales de solución de conflictos, como la conciliación y la equidad se convierte en una institución sui generis, pues es diferente a las demás órganos jurisdicciones del Poder Judicial, por ende su tratamiento tiene que ser regulado en forma especial.

Tiene muchos beneficios, su poca formalidad y la pertinencia de que jueces legos sean los encargados de solucionar los conflictos de sus comunidades, hace posible que personas con bajo nivel cultural, o difícil e imposible acceso a la justicia ordinaria, puedan acceder a ella en sus propios barrios, comunas o comunidades. Se presenta como la solución ideal para atender los problemas de estos sectores, más aún cuando para su consecución, tratamiento y proceso de la misma se toman en cuenta los principios y costumbres de las personas que habitan en esa circunscripción territorial, dotando al proceso de confianza, pues el encargado de impartir justicia, es una persona que goza de la confianza y admiración de los habitantes de su comunidad.

En Ecuador, atendiendo a la tendencia latinoamericana y sobre todo andina en el ámbito de transformación de la justicia, ha reubicado a la figura de la justicia de paz en el país como parte de los órganos jurisdiccionales que administran justicia en el Ecuador

⁶⁷ J. Vintimilla y S. Andrade, *Los Medios Alternativos....op. cit p. 135. 37*

y ya no como un método alternativo de solución de conflictos, equipara su competencia al de la justicia ordinaria. Así lo establecen las normas vigentes, tanto es así que, a diferencia de la Constitución Política anterior a la actual, la Justicia de Paz integra el órgano jurisdiccional de administración de justicia. Es parte del proceso de reforma ideológica, constitucional y legal orientado a la búsqueda de un mejor nexo entre el Derecho y la sociedad pluricultural y multiétnica que los caracteriza.⁶⁸

La Constitución Política del año 2008 (publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del año 2008, Decreto legislativo No. 040) y el Código Orgánico de la Función Judicial son la normativa actual para el tratamiento a esta nueva figura de justicia. El art. 189 del citado Código dispone que: “Las juezas y jueces de paz, resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad, ni prevalecerá sobre la justicia indígena. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos, y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. Las juezas y jueces de paz, deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de

⁶⁸ J. Vintimilla y S. Andrade. *Los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en las Comunidades Indígenas Ecuatorianas*, op. cit .p .36

acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz, no se requiere ser profesional en Derecho”.

Usar estos mecanismos conciliatorios componedores de la paz, facultan al Juez de Paz a proponer alternativas de solución a las partes, a fin de terminar con las desavenencias, pero les prohíbe textualmente el imponer acuerdos. Asimismo se establece que la resolución en equidad, es decir la sentencia emitida por el juez de paz puede ser sometida a control constitucional. Dicho control proclama que, cualquiera que sea la decisión del juez de paz, la Corte Constitucional puede entrar de oficio o a petición de parte a verificar que dicha decisión, se enmarque dentro de los principios constitucionales.

En lo referente a la remuneración de los jueces de paz, el Código en mención determina en su artículo 248 que, las juezas y jueces desarrollarán su labor como un voluntariado social, por lo que no percibirán remuneración por el desempeño del cargo. De acuerdo a la norma mencionada anteriormente, se establece el voluntariado social para el desempeño del cargo de Juez de Paz. El cargo de Juez de Paz es ad honorem, no sujeto a remuneración, que sólo goza del reconocimiento, colaboración y aceptación de la comunidad. Como emolumento reciben cursos de capacitación, becas en el país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros.

Se prohíbe al Juez de Paz que se ausente de su jurisdicción por más de 03 meses o en forma reiterada, esto con el fin de precautelar que los temas de la comunidad no dejen de ser atendidos y sus problemas solucionados, asimismo el Juez de Paz no puede ser una persona que tenga que trasladarse reiteradamente de su lugar de residencia con el fin de salvaguardar

la continuidad de un proceso de juzgamiento de paz. Aunque podría acudir a los sitios o lugares donde acontecen los conflictos dentro de su competencia en atención a su potestad de juzgar. Se establecen también ciertas prohibiciones de carácter general en carácter de parentesco o afinidad con las máximas autoridades de sus respectivas circunscripciones territoriales con el fin de apartar cualquier tipo de vicio que pueda anular la confianza en este tipo de jurisdicción.

Por último, el art. 253 del Código Orgánico de la Función Judicial determina las atribuciones y deberes de las juezas y jueces de paz. En el primer inciso de este artículo una vez más, se especifica la tipología de conflictos que la ley faculta al Juez de Paz para declararse competente: los conflictos individuales, comunales, vecinales y patrimoniales de un monto de hasta 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. Es decir, en los casos donde los montos sean más altos, tendrá el Juez de Paz que declararse incompetente y remitir la causa al juez competente en la materia. Se hace referencia en este mismo inciso a que el Juez de Paz deberá resolver en base a un proceso conciliatorio, procurando el advenimiento de las partes por sus propias propuestas, sin imponer acuerdos, ya que esto iría en contra del concepto mismo de la conciliación, y si eso llegare a fallar y no se pudiera llegar a un acuerdo conciliado, deberá el Juez de Paz imponer su criterio en base a un proceso equitativo, que no siempre será el esperado pero que no declarará un vencedor ni un perdedor, se establecerá una sentencia en equidad que beneficie a las dos partes en desacuerdo.

En el segundo inciso, se recalca que los jueces de paz, quedan inhabilitados para privar a un ciudadano de la libertad, ya que estos deberán, en caso de que se haya cometido una

contravención sancionada con privación de libertad imponer penas alternativas, las mismas que no se detallan y que no se presentan en un cuadro valorativo en relación al bien jurídico protegido para poder tomar la decisión, de qué penas establecer como alternativa a la privación de libertad.

El tercer inciso, establece que la justicia de paz, no prevalecerá sobre la Justicia Indígena, este concepto como lo señalamos anteriormente, determina la jerarquía superior de la justicia indígena por sobre la de paz. Cabe resaltar que en el caso que una de las partes alegue que su causa está siendo conocida por una autoridad indígena, la misma debe ser remitida de inmediato a la autoridad indígena.

2.13.1.4 BOLIVIA

En Bolivia si bien no existe la justicia de paz como tal, se ha incorporado en la nueva Ley del Órgano Judicial, en cada juzgado a los Conciliadores, quienes según la misma no requieren que éstos sean necesariamente Abogados y dispone que, sus resoluciones tengan un carácter definitivo. Es una forma de generar el acceso de la justicia, como servicio público, que garantice al ciudadano acceso, gratuidad, celeridad y probidad en los juicios, así como saber de los contenidos sobre políticas públicas, que mejoren e incorporen mecanismos para la resolución de controversias y faciliten el acceso de la justicia hacia la ciudadanía, especialmente para los sectores más vulnerables. Como se observa tiene características parecidas a la denominada justicia de paz, sin embargo también existen varias transformaciones como la incorporación de la jurisdicción indígena originaria campesina con igualdad de jerarquía a la ordinaria que buscan generar mayor accesibilidad del ciudadano al sistema de administración de justicia en el país del altiplano.

Los doctrinarios en Bolivia han señalado que es necesario trabajar una agenda de justicia, desde una perspectiva integral y sistemática orientada a fortalecer institucionalmente, ampliando con equidad e independencia otros mecanismos existentes y formas de impartir justicia donde la sociedad tenga un rol protagónico, por lo que un tema de mucha preocupación es el problema latente del acceso a la justicia en la región andina.

a) APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA.

Los cambios propuestos ayudarán a crear mayor accesibilidad, esencialmente cuando se habla de la incorporación de justicia indígena con igualdad de jerarquía, donde sus fallos y resoluciones son emitidos por sus propias autoridades y tengan carácter definitivo, lo cual es muy positivo. La Ley de Deslinde Jurisdiccional compuesta de 17 artículos., regula los ámbitos de aplicación de la justicia indígena y los mecanismos de coordinación y cooperación con las diversas jurisdicciones establecidas en la Constitución Política del Estado Pluricultural, como son la ordinaria y agro ambiental, el cual ha sido dado dentro del marco del pluralismo jurídico.

La promulgación de la Ley del deslinde jurisdiccional, que marca los límites y alcances de la jurisdicción indígena originaria campesina en sus distintos ámbitos es muy positiva ya que, marca un paso fundamental para la implementación efectiva. La CPEP establece el componente estructural del pluralismo jurídico que permite reconocer a la justicia indígena, el cual debe hacerse efectiva en la práctica. “Es decir, la norma por sí misma no cambia las cosas, es necesario avanzar a su implementación plena, la accesibilidad es un tema de suma importancia, por lo que es vital la participación ciudadana de forma proactiva y propositiva, para que

el sistema de justicia mejore, toda vez que la justicia ordinaria no se da abasto para resolver los diversos conflictos, el retardo judicial o mora en el trámite de los procesos iniciados por los ciudadanos, es provocada por la exagerada carga procesal de causas para un número limitado de jueces” según un estudio presentado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Von Borries.

En Bolivia hay 754 jueces para atender cerca de 591,000 causas presentadas en los tribunales, lo que significa que cada juez debe tramitar en promedio unas 783 causas. Esa diferencia provoca la mora judicial creciente, reconocida coincidentemente como uno de los males endémicos de la justicia boliviana. De acuerdo con estudios recientes, al menos 6 de cada 10 presos en todo el país permanecen en esa condición, sin una sentencia ejecutoriada ⁽⁶⁹⁾.

b) LAS CASAS DE JUSTICIA Y LOS CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA.

La Constitución Política del Estado dispone en su art. 13.1 lo siguiente: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, individuales y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.”

Dicho contexto constitucional establece claramente el deber del Órgano Ejecutivo de promover los derechos de toda la población boliviana, por ello el Ministerio de Justicia tiene la obligación, el deber de promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos, ejecuta esta atribución a través de dos

⁶⁹.Diario la Patria, La Paz, 17 de junio 2010<http://www.justiciaenlosandes.org/contenido/los-juzgados-de-paz-y-conciliaci%C3%B3n-bolivia>.

entidades: las Casas de Justicia creado por Resolución Ministerial N° 79/06 de 27 de octubre del año 2006 y los Centros Integrados de Justicia creados mediante Decreto Supremo 28586 del 17 de enero del año 2006.

Tanto las Casas de Justicia como los Centros Integrados de Justicia promueven el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que coadyuven a la solución de conflictos. De igual forma tiene que ver con las atribuciones contenidas en el inciso f) del artículo 81 señalado, respecto a coadyuvar a la protección judicial y administrativa de los derechos fundamentales, cuando su violación provenga de servidores públicos o actos de particulares que afecten de manera generalizada los intereses del pueblo.

Son entidades, que tienen por objeto viabilizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad boliviana, en un marco de respeto y preservación de sus derechos fundamentales, teniendo presencia actual en la ciudad de La Paz y Cochabamba, cuyas atribuciones de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 79/06 son las siguientes:

- a. Orientación y/o asistencia legal gratuita, asistencia psicológica, médica y social, conciliación y patrocinio legal gratuito para casos administrativos y judiciales de filiación.
- b. Resolución Alternativa de Conflictos en el marco de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas.
- b) Defensa y restitución de derechos, acompañando, representando y exigencia de sanciones ante los tribunales y autoridades competentes.
- c) Fortalecimiento de los conocimientos y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, generando procesos planificados y sistemáticos encaminados a motivar a ciudadanos

y ciudadanas, a adoptar nuevas actitudes o comportamientos en el ámbito de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales.

- d) Promoción y procesamiento de las iniciativas de la sociedad civil sobre las reformas a la normativa jurídica vigente.
- e) Ejercer representaciones del Ministerio de Justicia en el ámbito departamental.

c) LOS CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA.

Son entidades implementados como un componente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, tienen el objetivo de procurar el respeto a los derechos fundamentales, llegando a la población más distante proporcionando el acceso a la justicia en coparticipación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia, por cuanto a diferencia de las Casas de Justicia, funciona un Juzgado de Instrucción Mixto, establecido en la Ley de Organización Judicial actual. Se ubican en lugares alejados de los centros urbanos a fin de que los servicios lleguen de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita y cercana a la población más vulnerable de la sociedad boliviana. Actualmente existen en la Ciudad de El Alto, en las localidades de Coroico, Chimoré, Yapacani, Plan 3000, en Santa Cruz y Max Paredes, en la ciudad de La Paz.

Conforme al Decreto Supremo 28586, sus atribuciones son las siguientes:

- a) Información Legal básica sobre trámites y procedimientos para el ejercicio de los Derechos Fundamentales y las posibilidades de resolución de conflictos a su alcance;
- b) Orientación jurídica;
- c) Difusión sobre derechos;
- d) Educación en derechos;
- e) Resolución Alternativa de Conflictos;
- f) Resolución Judicial de conflictos a través de los Jueces de los Centros Integrados de Justicia, de conformidad a lo previsto en la Ley de Organización Judicial;
- g) Todos los demás servicios y programas que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

d) LAS FUNCIONES DE LAS CASAS DE JUSTICIA Y LOS CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA.

Sus funciones se resumen en la Conciliación, nuevo medio alternativo de resolver conflictos, sin necesidad de instaurar un proceso judicial por cuanto los acuerdos arribados tienen el valor legal de cosa juzgada dispuesto por la Ley 1770 del 10 de marzo del año 1997 y reconocido por la Ley de Organización Judicial. Con la sola invitación al diálogo, las personas involucradas en un conflicto, en presencia y ayuda de una persona imparcial llamado Conciliador, las partes de manera voluntaria, encuentran la solución de sus divergencias en ejercicio pleno de sus derechos. El acuerdo logrado entre las partes se plasma en un Acta de Conciliación que tiene la fuerza coercitiva para su eficaz cumplimiento a través del Órgano Judicial.

La Orientación Jurídica es la información sobre los derechos de las personas a fin de que tengan el conocimiento y alcances para que puedan hacer respetar y resolver los problemas de manera correcta. Este servicio ayuda también a conocer los requisitos y costos de los trámites administrativos ante instancias administrativas.

En tanto el Patrocinio Legal es el servicio que le permite a una persona a tener la asistencia de un Abogado en procesos judiciales en materia civil y familiar. Permite que los ciudadanos de escasos recursos, puedan acceder a la tutela judicial de sus derechos, sin necesidad de recorrer grandes distancias por cuanto funcionan Juzgados de Instrucción en materia civil, familiar y penal en los Centros Integrados de Justicia.

La Asistencia Integral, es el servicio que facilita acudir a las entidades públicas y/o privadas adecuadas para resolver sus problemas. Consiste en el acompañamiento, remisión y/o representación institucional para resolver los problemas ayudando al ciudadano o ciudadana en el análisis y revisión de trámites y expedientes y todo lo que pueda ser obrado en el marco de las competencias del Ministerio de Justicia.

Las Casas de Justicia y los Centros Integrados de Justicia, tienden a la transformación cualitativa y cuantitativa del modo de enfrentar la conflictividad, descolonizando la idea de que sólo el Órgano Judicial tiene la facultad y los procedimientos para conocer y resolver los conflictos. El Órgano Ejecutivo a través de la utilización de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos y de la capacitación ciudadana, también puede pacificar la sociedad al igual que la Justicia Indígena Originaria Campesina que también contribuye con sus propias estructuras en la disminución de la conflictividad (⁷⁰).

e) RELACIÓN ENTRE JUSTICIA ESTATAL Y JUSTICIA COMUNITARIA.

Con relación a la justicia comunitaria u originaria, no debe comprenderse únicamente a partir de movimientos que se están adelantando alrededor de la transformación del Estado.

Las comunidades no son un simple material sobre el que esculpen los actores externos a ellas. Ellas toman al menos uno de dos caminos para el establecimiento y sostenimiento de figuras de justicia comunitaria. De un lado pueden desarrollar- con cierta autonomía- instituciones e instancias propias de gestión y

⁷⁰<http://www.justicia.gob.bo/index.php/component/content/article/164>

regulación de los conflictos. Así como asumir, surtir y desarrollar en su seno, figuras de administración de justicia creadas por el Estado, para el manejo de un cierto rango de conflictos. Desde el lado del Estado, se pueden apreciar dos tipos de movimientos frente a la justicia comunitaria: por un lado, el reconocimiento de ciertas figuras nacidas en las comunidades y la validación de sus actuaciones ante el sistema jurídico nacional; de otro lado, el establecimiento de ciertas instancias y procedimientos mediante los cuales las comunidades alcanzan decisiones válidas, ante el sistema jurídico nacional.

Según Edgar Ardila, existen tres grandes modalidades de justicia comunitaria:

Primera modalidad: Es aquella justicia comunitaria que, es el resultado de una organización de la administración de justicia estatal como los Jueces de Paz que existen en varios países. Aunque las dinámicas comunitarias son definitivas en la viabilidad de esta modalidad, tales figuras constituyen una parte del sistema general de administración de justicia del Estado. Ello se evidencia en que normas y mecanismos de control estatal definen precisas competencias, unos procedimientos para constituir tal figura de administración de justicia, los procedimientos mínimos para tramitar los conflictos y; aunque muy laxamente un marco jurídico para la toma de decisiones (Santos, 1992; De La Torre, 2005). De acuerdo con los criterios de Ermo Quisbert no podría considerarse una auténtica justicia comunitaria.

La segunda modalidad se trata de ciertas dinámicas de justicia comunitaria que se desarrollan en comunidades, principalmente tradicionales (como las indígenas), a las que el Estado por expresa prescripción legal, reviste de un estatus de

validez ante el ordenamiento jurídico nacional. En tales casos la ley estatal no las constituye sino que las reconoce. En consecuencia, son las dinámicas comunitarias con figuras muy diversas no necesariamente reconocibles en leyes nacionales las que definen el estatuto de existencia y funcionamiento de la figura, así como el marco normativo para la toma de decisiones. En esta modalidad de justicia, el sistema estatal define unas reglas de coordinación de la rama judicial con ellos (⁷¹).

La tercera modalidad, son aquellas figuras de justicia comunitaria que germinan y se desarrollan en comunidades tradicionales (como la justicia gitana o marginales o perseguidas) como la justicia popular en Sudáfrica y que no alcanzan el reconocimiento o la validación por parte de la ley y las instituciones del Estado. En tales casos, la definición de las competencias, la implantación de las figuras de administración de justicia, sus métodos y mecanismos de trámite, así como el marco regulativo de las decisiones están bajo el resorte de la comunidad.

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en Bolivia y su relación con la jurisdicción Ordinaria.

Conforme a la publicación “Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado” del constitucionalista boliviano Boris Wilson Arias López se tiene que el art. 304-I-8 de la Constitución del año 2009 al igual que el art. 171-III de la Constitución del año 1967 reformada el año 1994, subordinan la jurisdicción indígena originaria campesina a la Constitución y la ley, lo que contrasta con el art. 410-II-3, de la CPE que establece el mismo rango jerárquico normativo entre la legislación nacional y la

⁷¹ http://es.Wikipedia.org/wiki/justicia_comunitaria/cite_note-4

indígena originaria campesina; por lo que, bajo el principio de maximización de la autonomía indígena la única manera de entender el art. 304-I-8 de la Constitución es bajo el entendido de que la referida “ley” únicamente es la Ley de Deslinde Jurisdiccional invocada por el art. 191-II-3 de la propia Constitución del año 2009.

Por otra parte, la jurisdicción indígena originaria campesina tiene su límite en su propia naturaleza, así lógicamente al constituirse como un sistema jurídico con una estructura y procedimientos propios, no abarca a la justicia por mano propia, al ajusticiamiento o linchamiento efectuada por una muchedumbre transitoria y eventual que además se constituye como un delito cuya investigación debería corresponder a la jurisdicción ordinaria.

Asimismo, el art. 190-II de la CPE establece que: “la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución” que, conforme al Bloque de Constitucionalidad del art. 410-II de la Constitución Política del Estado alcanza a los derechos humanos. En este contexto, la limitación de la jurisdicción indígena originaria campesina por los derechos fundamentales y los derechos humanos encuentra su fundamento en la concepción de la función judicial “única” señalado por el art. 179-I de la CPE evitando todo tipo de “apartheid jurídico” y fundamentando la “complementariedad” de los sistemas jurídicos de Bolivia (compatibiliza la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria).

Sin embargo, debe aclararse que incluso los derechos humanos deben aplicarse e interpretarse no únicamente a partir de cánones occidentales, sino conforme a los “...principios, valores

culturales, normas y procedimientos propios” (art.190-I de la CPE) de cada nación o pueblo indígena originaria campesina (interpretación intercultural) sin desconocer su núcleo esencial que los hacen universales y sin perder de vista que, amparados en una cultura o en un consenso social, tampoco se puede encubrir prácticas discriminatorias a minorías como lo son las mujeres, los niños, entre otros.⁽⁷²⁾.

En el sistema boliviano, la justicia no solo son los órganos judiciales, sino están incluidos otras formas de solucionar los conflictos, como la justicia comunitaria, conciliación, arbitraje y la justicia de paz. La propia Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) establece el derecho de fiscalizar la gestión pública en todos sus ámbitos, por lo que promueve acciones que vayan a buscar el control y mejora en todos los sistemas de justicia, tiene como objetivo abrir las puertas a la participación ciudadana para que ejerza un verdadero control social dentro del sistema judicial, de manera que los sectores organizados puedan contribuir a lograr que las labores de impartición de justicia se desarrollen de manera más eficiente; para ello se ha promulgado la Ley de Deslinde Jurisdiccional que marca los límites de esta nueva normativa indígena de forma clara y cómo se va a desenvolver su sistema de justicia en el país del altiplano.

La accesibilidad es un tema primordial para los administradores de justicia, en función a ello se esperan que las condiciones del ciudadano mejoren. Además que en su nivel la Justicia Indígena Originaria Campesina desarrolle sus funciones de manera articulada y coordinada, siendo que la responsabilidad la tienen los miembros de la comunidad a través de sus propias autoridades, además del ciudadano, quien no debe ser aquel

⁷² [Hhttp://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_comunitaria](http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_comunitaria)

observador desde afuera, sino ser proactivo y propositivo para que el sistema de justicia mejore⁽⁷³⁾.

⁷³http://www2.larazon.com/version_temp.php?ArticleId=1822&EditionId=2737&idp=41&ids=355

CAPITULO III: METODOLOGÍA

METODOLOGÍA–POBLACIÓN–MUESTRA–INSTRUMENTOS–VARIABLES.

3.1 MATERIAL Y MÉTODOS:

La presente investigación se realizó en los Distritos Judiciales de la región centro andina de Perú: Apurímac, Junín, Ayacucho y Huancavelica, los que cuentan con 1198 Juzgados de Paz. Durante los meses de Enero a Diciembre del año 2013. Así mismo los sujetos de estudio fueron: 258 Jueces de Paz, los que fueron seleccionados aleatoriamente y comprendidos en los Distritos Judiciales antes mencionados.

3.1.1 METODOLOGÍA:

3.1.1.1 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO

El método a emplearse es de carácter cualitativo
Es cualitativo, porque se fundamenta en el análisis, características e información de variables nominales y ordinales.

3.2 TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN.

3.2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN.

Observacional, Explicativo no Experimental, Aplicativo
Es Observacional porque está sujeto a la medición y comportamiento de las variables sin intervención directa sobre éstas.

Es Explicativo porque está sujeto al estudio y al análisis de las variables de estudio que son: La función notarial del Juez de Paz, su formación cognitiva y actitud conductual.

Es Aplicativo porque está orientada a proponer soluciones al problema planteado, relacionado con la función notarial del Juez de Paz en la región centro andina de nuestro país.

3.2.2 POR EL TIEMPO Y PERIODO DE ESTUDIO.

Ex post facto

Se le da esta denominación porque la Investigación realizada es no experimental sistemática de observación, de hechos ocurridos, sin posibilidades de manipulación de las variables.

3.2.3 DIMENSIÓN ESPACIAL Y SOCIAL:

El estudio se realizó en los Distritos Judiciales de la región centro andina: Apurímac, Junín, Ayacucho y Huancavelica, regiones que cuentan con 1198 Juzgados de Paz.

Así mismo los sujetos de estudio fueron: 258 Jueces de Paz de los distritos judiciales considerados en la investigación.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Observacional, explicativo no experimental, aplicativo, transversal, retrospectivo.

Es Observacional porque está sujeto a la medición y comportamiento de las variables sin intervención directa sobre las variables independientes.

Es explicativo porque está sujeto a un minucioso análisis de las variables de estudio: La Función Notarial inadecuada del Juez de Paz relacionado con problemas de carácter cognitivo conductual.

Es Aplicativo porque está orientada a proponer soluciones al problema planteado.

Es Transversal porque es observacional y descriptivo, además permitirá medir la prevalencia de la exposición de las variables de la Investigación, en un momento determinado.

Es Retrospectiva porque los datos obtenidos para la investigación corresponden a hechos ocurridos en un pasado.

3.4 ESTRATEGIA DE PRUEBA DE HIPOTESIS.

La hipótesis y su comprobación se realizaron a través de datos correlacionales obtenidos con la aplicación de una encuesta en una muestra conformada por 258 jueces de paz.

3.4.1 MUESTRA POBLACIONAL

Está conformada por 258 jueces de paz de los distritos judiciales de la región centro andina: Apurímac, Junín, Ayacucho y Huancavelica, quienes ejercen la función jurisdiccional en 1198 juzgados de paz.

3.4.2 TECNICA DE INVESTIGACIÓN

3.4.2.1 TÉCNICAS

Entrevista: A los especialistas y conocedores de la función Notarial de los Jueces de Paz.

Análisis de Registro Documental: En función del acopio de la documentación y archivos de la judicatura de paz, el análisis doctrinario y teórico de las mismas así como de trabajos relacionados al tema Búsqueda por Internet: Dicho medio complementa la investigación de la fuente no encontrada en el ámbito nacional, este instrumento nos permitirá conocer sistemas

jurídicos y experiencias en países extranjeros, especialmente las más cercanas a nuestro país y que cuenten con el servicio de justicia de paz.

Análisis micro comparativo de sistemas jurídicos extranjeros: para procurar conocer un marco legal relacionada a dicha realidad.

Cuadros Estadísticos: Para la codificación y tabulación de la información contenida en los instrumentos de recolección, de ella se obtendrán los resultados los cuales serán plasmados en cuadros estadísticos, posteriormente se graficarán los valores numéricos de los cuadros señalados para la comprensión global, rápida y directa de la información.

El presente trabajo es una investigación científica Observacional, explicativo no experimental, aplicativo, transversal, retrospectiva, pues está orientada a descubrir las variables tanto la independiente y concurrente como las variables dependientes del problema de investigación. Es una investigación aplicada por que está orientada a proponer soluciones al problema planteado, por cuanto al concluir la presente investigación se formulará propuestas de política institucional dentro del Poder Judicial, que comprenda un conjunto de actividades y políticas destinadas a mejorar el acceso a la justicia, en particular el fortalecimiento de la justicia de paz en el campo de la función notarial, del principio de la fe pública que el ordenamiento jurídico específicamente el art. 17 de Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz (antes la Ley Orgánica del Poder Judicial) le ha asignado dicha competencia notarial.

3.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

Al interesarme en el problema de la Investigación: La función Notarial de los Jueces de Paz, inicialmente estuve en un dilema respecto a la delimitación espacial, mi inquietud era si debía considerar en dicha delimitación en la tarea investigativa solamente a la región Huancavelica con las 4 provincias que conforman el Distrito Judicial de Huancavelica o en todo caso considerar sólo a una de las provincias de la referida región.

Después de analizar detenidamente, tomando en cuenta el número de juzgados de paz de Huancavelica, así como con la sugerencia del Asesor de Tesis en su momento, decidí tomar en cuenta un área geográfica que comprenda a los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, las que están ubicadas geográfica y políticamente también en las 4 regiones antes señaladas.

Los citados 4 distritos judiciales tienen mucho en común, entre éstas podemos considerar la situación de pobreza y extrema pobreza de una parte de sus pobladores, todas están ubicados en la zona andina, con costumbres similares, el idioma quechua hablado por el mayor porcentaje de pobladores a excepción de la región Junín que tiene otro dialecto, entre otros factores. Son las condiciones sociales y jurídicas que generan similitud y semejanza en la labor de los jueces de paz, principalmente de las zonas rurales donde siempre existe un Juez de Paz.

Es necesario señalar que, igualmente tuve algunos inconvenientes respecto a la delimitación temporal, esto es relacionado al periodo de tiempo a considerar en la Investigación, los años que debía de considerarse en la labor investigativa. El

Asesor de Tesis recomendó que fuera un periodo de tiempo razonable.

Luego de varias posibilidades, finalmente se decidió por un espacio temporal de 3 años. Dicho periodo de tiempo se inicia 01 de enero del año 2010 hasta el 31 de Diciembre del año 2012. Estimamos que los 3 años es un periodo razonable, asequible para obtener datos e información de la justicia de paz de los mencionados años, información de reciente data que obran y se puede ubicar en las respectivas Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac.

También hacer la precisión de que al margen de ello, las referencias estadísticas, bibliográficas y normativas a considerarse serán datos antes y después del periodo a considerar en la tarea de investigación.

3.5.2 DELIMITACIÓN CUANTITATIVA

En este acápite, la Corte Superior de Justicia de Huancavelica al 31 de diciembre del año 2010 tenía registrados 205 juzgados de paz. Con dichos juzgados se da cobertura a la mayoría de los distritos, comunidades campesinas, centro poblado y anexos del Distrito Judicial de Huancavelica, a excepción de las provincias de Pampas, Churcampa y Huaytará que tienen competencia territorial y es parte de otras Cortes Superiores vecinas.

Igualmente la Corte Superior de Junín cuenta con 464 Jueces de Paz, es la Corte con el mayor número de juzgados de paz, que por información de la ODAJUP Junín, al parecer sus jueces de paz reciben y tienen una atención prioritaria por parte de

los órganos de gobierno de la citada Corte Superior. Ayacucho en el año 2010 cuenta con 295 jueces de paz y Apurímac con 233.

Es necesario hacer presente que los referidos jueces de paz, por razones económicas, laborales, de salud, falta de tiempo y principalmente porque no perciben ningún reconocimiento económico por la labor que despliegan como jueces, muchos de ellos estando en el ejercicio de la función jurisdiccional renuncian al cargo asumido. Esta realidad cotidiana y permanente puede variar el número exacto de los jueces de paz que estén ejerciendo la función jurisdiccional en forma efectiva ya que, en la práctica se dan casos de juzgados de paz en las que no se puede ni se ha podido reemplazar por otros ciudadanos, en algunos casos por la falta de interés o incumplimiento de las autoridades e integrantes de la comunidad quienes tienen la obligación de renovar periódicamente a dichas autoridades judiciales, así como resolver las dificultades que se van presentando para que alguna persona ocupe dicho cargo.

En casos como el señalado en el párrafo precedente, el Juez de Paz es y debe ser reemplazado por los Jueces de Paz Accesitarios en el orden preestablecido, en primer término por el primer Accesitario, si éste por alguna razón se ve imposibilitado de asumir el cargo lo asume el segundo Accesitario. En varios casos, en algún juzgado de paz los Accesitarios muchas veces también pueden y están renunciando a dicha función, lo que genera que algunos juzgados de paz de la región centro andina no están funcionando por falta del Juez de Paz.

Estando a señalado antes, por información de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de Huancavelica (ODAJUP) a cargo del Licenciado Edgar Ayuque Castro, en el Distrito Judicial

de Huancavelica estarían funcionando y atendiendo a la colectividad aproximadamente unos 200 juzgados de paz, es decir varios juzgados de paz no están funcionando por diversas razones.

Del total de jueces de paz de los 4 distritos judiciales, en la presente investigación, de manera aleatoria se ha tomado como muestra a 258 Jueces de Paz que constituyen el 21.5% del total de Jueces de Paz que están ejerciendo actualmente el cargo en los distritos judiciales de: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

3.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Saber con exactitud cuántos elementos tenían que ser considerados a partir de la población, en el plano cuantitativo y cualitativo, fue una tarea que se fortaleció con algunos antecedentes que se conoce por estudios que se llevaron al respecto; las consideraciones que habitualmente se hacen para las muestras son del 15% al 20% de la población aproximadamente. Al respecto Stepha Marcathy señala que "(...) el tamaño de la muestra depende de los recursos financieros propios, de la naturaleza del problema en sí, de las categorías que se emplearán en el análisis, de la naturaleza del universo de trabajo (si es homogéneo o heterogéneo) y de la finalidad última para la cual se han reunido los datos".

En la presente Investigación el tamaño de la muestra fue determinada utilizando un criterio de un muestreo probabilístico o muestreo aleatorio simple, en este caso de los jueces de paz de los 4 distritos judiciales de la región centro andina de nuestro país.

Por ello se ha seleccionado la muestra en una cantidad representativa, teniendo en cuenta ciertos criterios, estableciéndose como unidad de análisis a los jueces de paz de los 4 Distritos Judiciales de la región centro andina, para conocer con la información recogida, las

características de dicha población, en base a los objetivos del trabajo, con el fin de conocer cuáles serán los parámetros de la muestra. Luego saber el tamaño de la muestra y sabiendo qué tipo de muestra a utilizarse en la investigación nos permitirá concluir y contrastar la hipótesis planteada en la tarea de investigación.

3.6.1 MUESTRA POBLACIONAL

Las 4 Cortes Superiores de Justicia antes señaladas, al 31 de diciembre del año 2012 tiene registrado un total de 1198 juzgados de paz. Con dichos juzgados se da atención a la mayoría de los distritos, comunidades campesinas, centros poblados y anexos de los citados departamentos, en las que el Juez de Paz cumple la función jurisdiccional, siendo una de éstas competencias la función notarial.

Como se reitera, principalmente por diversas razones económicas, laborales, de salud y por la falta de un reconocimiento económico por el estado por la labor que cumplen como jueces de paz, muchos jueces renuncian a sus cargos, en esos casos son reemplazados por el primer y el segundo Accesorios (⁷⁴), algunos de éstos también renuncian, es decir no tienen interés en el cargo, lo que da lugar a que algunos juzgados de paz no estén prestando servicio efectivo, por lo que del total de juzgados de paz de las 4 regiones que en número alcanza a los 1198, algunos de ellos no están prestando el servicio judicial.

Reiteramos que en la presente investigación de la muestra poblacional constituida por los 4 distritos judiciales, la muestra a tomarse a en cuenta es la de 258 jueces de paz que, si bien no es

⁷⁴ La Ley No. 28545 (promulgado el 20 marzo 2010) que regula la elección de los jueces de paz, también en el mismo acto permite la elección de los Jueces de Paz Accesorios, quien son los encargados de reemplazar ante la ausencia del titular.

la totalidad de los jueces consideramos que es una parte representativa, razonable, significativa y atendible para la investigación.

3.6.2 UNIDAD DE ANALISIS

Como hemos señalado anteriormente en esta investigación, del total de 1198 juzgados de paz, el marco muestral está conformado por 258 Jueces de Paz de los cuatro Distritos Judiciales: Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín.

3.6.3 CLASE DE MUESTRA

La clase de la muestra en la presente investigación científica, es el muestreo aleatorio simple, mediante la cual las unidades de análisis son extraídas del total por elección aleatoria que debe distinguirse de la elección en forma causal.

Para los efectos de asegurar la elección aleatoria esta debe ser controlada. Por ello la muestra se obtiene cuando las unidades de ésta han sido seleccionadas de tal manera que todos los grupos diferentes de unidades que se forman con las unidades de la población, hayan tenido la misma probabilidad de constituir la muestra.

3.6.4 MEDICIÓN DE MUESTRA

La Medición de las muestras, como instrumentos de la presente investigación se tiene como anexos en la parte final, las que nos irán indicando – especialmente en la interpretación de las muestras – señalándose la parte pertinente de la misma.

El presente trabajo de medición de muestra se desarrolló aplicando la tabulación ordenada de los datos, de acuerdo a las características comunes que permiten su mejor utilización en los

campos estadísticos, habiendo alcanzado los porcentajes que corresponden a cada rubro.

3.6.5 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION.

- **Entrevista:** Se aplicó la técnica de la entrevista a los jueces de paz, especialistas y conocedores de la función notarial de éstos.
- **Análisis de Registro Documental:** En función del acopio de la documentación y archivos de la judicatura de paz, el análisis doctrinario y teórico de las mismas, así como de trabajos relacionados con el tema.
- **Búsqueda por internet:** Dicho medio complementa la investigación de la fuente no encontrada en el ámbito nacional, este instrumento nos permitirá conocer sistemas jurídicos y experiencias en países extranjeros, especialmente las más cercanas a nuestro país y que cuenten con justicia de paz.
- **Análisis micro comparativo de Sistemas Jurídicos Extranjeros:** Para procurar conocer un marco legal relacionada a dicha realidad.
- **Cuadros estadísticos:** Para la codificación y tabulación de la información contenida en los instrumentos de recolección, de ella se obtendrán los resultados los cuales serán plasmados en cuadros estadísticos, posteriormente se graficarán los valores numéricos de los cuadros señalados para la comprensión global, inmediata y directa de la información.

3.6.6 VARIABLES – DETERMINACIÓN.

3.6.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (VI)

VARIABLE	TIPO	DIMENSIÓN
Función inadecuada del Juez de Paz	Nominal	Discreta
Razones cognitivas y conductuales en el ejercicio la función notarial del Juez de Paz	Nominal	Discreta
Región Centro Andina: Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac	Nominal	Discreta
Facultades y competencia de la función notarial otorgadas al Juez de Paz	Nominal	Discreta
Ley 29824, Ley de Justicia de Paz R	Nominal	Discreta

a

zones de orden cognitivo y conductual

3.6.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE (VD)

Incumplimiento de función notarial de los jueces de paz de los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac.

Los jueces de paz de los distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, al tener facultades y competencia para ejercer la función notarial, no están cumpliendo adecuadamente dicha función, incumplimiento por inconducta funcional, falta de ética con repercusión moral.

3.6.7 VARIABLE CONCURRENTES

Las facultades y competencia otorgadas al Juez de Paz para el ejercicio de la función notarial, contenida en el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz.

3.6.8 VARIABLE, TIPO Y DIMENSIÓN

CAPÍTULO IV: ANALISIS, PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis, Presentación, Interpretación y Discusión de Resultados.

Los resultados presentados, han sido desarrollados bajo el procesamiento de datos cualitativos en cuadros de doble entrada y gráficos para casos de distribución de variables nominales; los resultados obtenidos han sido realizados en una muestra poblacional de 258 jueces de paz de la zona o región centro andina de Perú.

A continuación se encontrarán 11 cuadros bidimensionales, con sus respectivas traducciones descritos en tablas de distribución de frecuencias absolutas, simples y acumuladas, así como distribuciones de los mismos valores traducidos en valores porcentuales.

Estos cuadros servirán de análisis para el estudio de la contrastación de hipótesis, además cabe señalar que los mencionados datos guardan estricta relación con la presentación de los objetivos y la formulación de las hipótesis de la presente investigación, de esta manera se podrá desarrollar la contrastación de hipótesis, de manera ordenada, explícita y entendible ya que, las tablas y gráficos están ordenados sistemáticamente según los objetivos y las hipótesis formuladas en la presente investigación.

4.2 Presentación de Resultados en Cuadros de Distribución Binomial y Gráficas para Distribución de Variables Cualitativas Nominales.

Las variables de investigación científica que a continuación se detallan, reflejan factores e indicadores de análisis, estos están traducidos y presentados en valores discretos cuantitativos. Para la obtención del presente resultado se aplicaron en cuentas, metodológicamente controladas y mostradas en frecuencias absolutas simples y acumuladas, complementados estos resultados con números expresados en

porcentajes. El ordenamiento y presentación de los resultados dan la suficiente información para que, con criterio científico se pueda procesar la información y derivar en una acertada selección de hipótesis que con criterio válido sustente la presente investigación.

4.2.1 ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA Y VENTA. DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 1.

ESCRITURA PÚBLICA IMPERFECTA

¿Quién redacta la Escritura Pública Imperfecta de Compra - Venta?

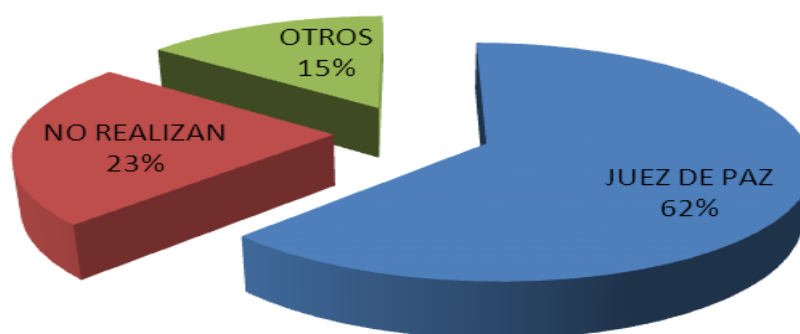
La Escritura Pública Imperfecta es uno de los documentos de la función notarial que diligencian los jueces de paz (62,43%), en atención a lo comentado, y en consideración de los puntajes obtenidos, se evidencia que dichos documentos son redactados por personas distintas al Juez de Paz (14.70%), es decir los usuarios del servicio judicial, quienes acuden al juzgado de paz con la finalidad de que el Juez de Paz consigne sus sellos respectivos, así como consigne su firma, dicho trámite están incurso dentro de los parámetros de un trámite irregular.

Un 62,43% de los jueces de paz encuestados señalan que son los responsables de la elaboración del citado documento.

INSTRUCCIÓN	ESTADO	Datos Absolutos	Datos Absolutos Acumulados	Datos Porcentuales BVs	Datos Porcentuales Acumulados
Nivel Instrucc.	Completa	56	56	21,7%	21,7%
PRIMARIA	Incompleta	48	104	18,6%	40,3%
Nivel Instrucc.	Completa	69	173	26,8%	67,1%
SECUNDARIA	Incompleta	38	211	14,7%	81,8%
Nivel Instrucc.	Completa	31	242	12%	93,8%
SUPERIOR	Incompleta	16	258	6,2%	100%
Total		258		100%	

NUMÉRICO NOMINAL	Datos Absolutos	Datos Absolutos Acumulados	Datos Porcentuales	Datos Porcentuales Acumulados
JUEZ DE PAZ	161	161	62,43%	62,43%
NO REALIZAN	59	220	22,87%	85,30%
OTROS	38	258	14,70%	100%
TOTAL	258		100%	

Escritura Pública



4.2.2 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA DEL JUEZ DE PAZ.

DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 2

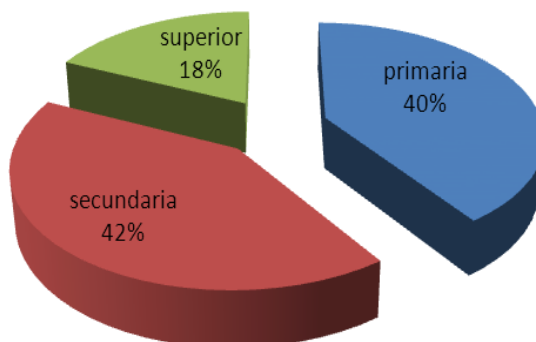
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA

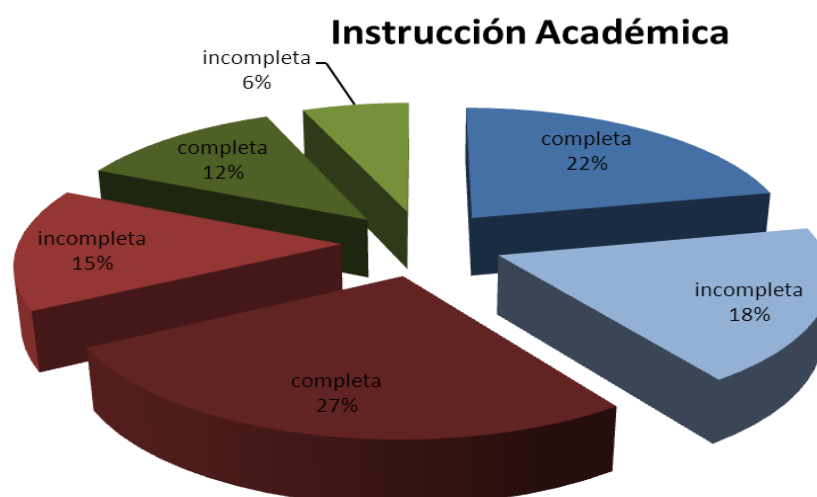
¿Cuál es el grado de Instrucción del Juez de Paz?

El gráfico muestra el nivel de instrucción, desarrollo cultural y educativo de los Jueces de Paz de la región centro andina, el cual refleja el bajo nivel de formación académica de los mencionados jueces, en su mayoría ellos tienen educación primaria, lo cual no es suficiente para ejercer función de mucha responsabilidad, aspecto que de alguna manera incidirá de modo negativo al momento de ejercer la función notarial.

En segundo orden están los jueces de paz que tienen educación secundaria; también se dan casos de algunos jueces de paz con formación superior en una cantidad mínima, la que es ejercida especialmente por Docentes o Profesores del sector educación, quienes trabajan en las comunidades y pueblos de la región andina.

Instrucción Académica





4.2.3 CAPACITACIÓN DE JUECES DE PAZ. DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 3

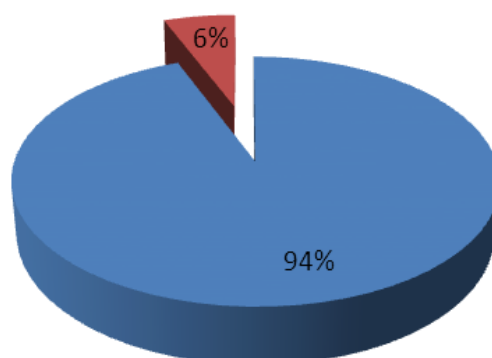
CAPACITACIÓN – JUECES DE PAZ

¿Diga si Ud. ha sido capacitado o entrenado por los capacitadores de los Jueces de Paz de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica?

NO	SI						
	1	2	3	4	5	6	8
	Capac.	Capac.	Capac.	Capac.	Capac.	Capac.	Capac.
58	91	70	24	8	2	4	1
	200						
22.5 %	77.5 %						

Capacitaciones - Jueces de Paz

■ Recibieron de 0 - 3 capacitaciones ■ Recibieron de 4 - 8 capacitaciones



El presente cuadro muestra que el 94,1% de los encuestados han recibido de 0 a 3 capacitaciones, siendo equivalente para 243 jueces de paz, señalamos además que solamente el 5,9% de los jueces de paz equivalente a 15 jueces han recibido de 4 a 8 capacitaciones. Los valores constatan la realidad de las capacitaciones que recibieron los jueces de paz en dicha zona andina y que desde luego por los resultados mostrados podemos apreciar que se trata de una formación escasa, no adecuada para asumir el cargo judicial y la función notarial, más aun teniendo en cuenta que el periodo que ejercían el cargo es un periodo breve de 2 años (a la fecha el ejerce por 4 años) además de que, los lugares de capacitación (en especial la capitales de región) son distantes a los pueblos y comunidades en el que ejercen su labor el Juez de Paz.

4.2.4 HONORARIOS DE LOS JUECES DE PAZ.

DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 4.

HONORARIOS DE LOS JUECES DE PAZ

¿Diga Ud., si por la función notarial que cumplen como Juez de Paz reciben algún pago u honorario?

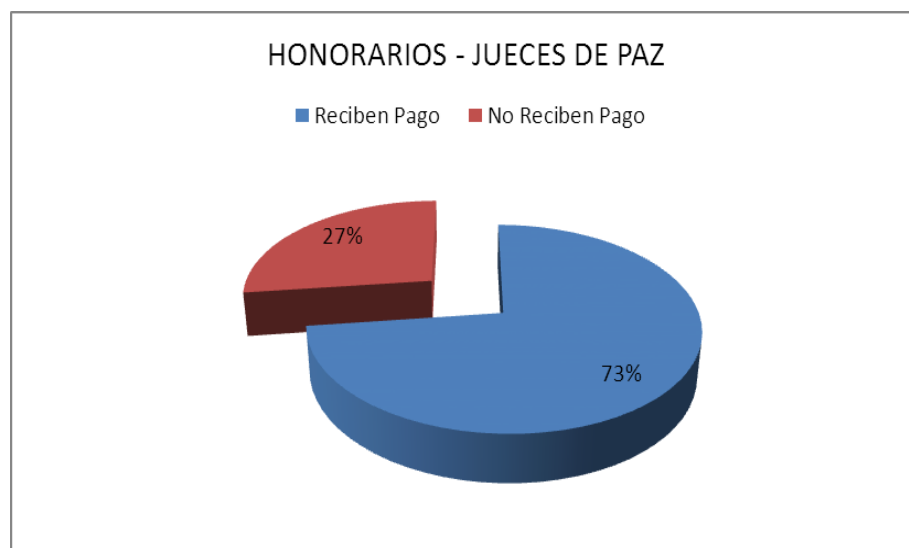
El Juez de Paz no debe recibir ningún estipendio económico por la gratuidad de la función jurisdiccional que ejerce, conforme lo dispone la Ley de Justicia de Paz y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la práctica, el ejercicio de la función notarial es una de las posibilidades por las que el Juez de Paz puede obtener algún ingreso económico a su favor.

Sin embargo, el gráfico muestra que el mayor número de ellos, según el cuadro de distribución de frecuencias, se registra que un 73% de los encuestados si reciben una contra prestación económica al momento de cumplir la función notarial.

Ello es cierto, ya que a falta de un reconocimiento económico por parte del Estado, el Juez de Paz logra obtener algún ingreso al momento de ser requerido para un trámite de carácter notarial, considerando que un buen número de ellos son ciudadanos dedicados a la agricultura que, por ser periódica o temporal no garantiza una retribución o ingreso permanente.

SI	NO
188 Jueces de Paz	70 Jueces de Paz
73 %	27 %



4.2.5. TRAMITES EN LA FUNCIÓN NOTARIAL

DATOS DISCRETOS

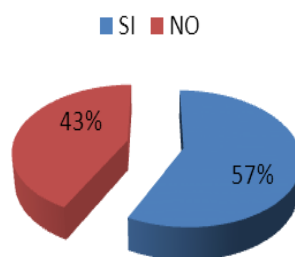
CUADRO N° 5

TRAMITES DEL JUEZ DE PAZ EN LA FUNCIÓN NOTARIAL

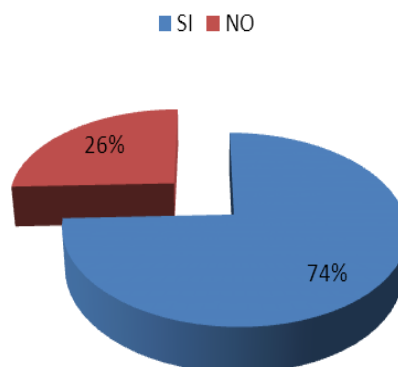
¿Diga Ud., si en su actuación como Juez de Paz, realiza la función notarial de tramitar: Escritura pública imperfecta; legalización de firmas; certificación de documentos; legalización de libros y actas?.

ESCRITURA PUBLICA IMPERFECTA		LEGALIZACIÓN DE FIRMAS		CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS		LEGALIZACIÓN DE LIBROS Y ACTAS.	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
148	110	192	66	194	64	242	16
57.4%	42.6 %	74.4 %	25.6 %	75.0 %	25.0 %	93.8 %	6.2 %
258		258		258		258	

ESCRITURA PUBLICA IMPERFECTA

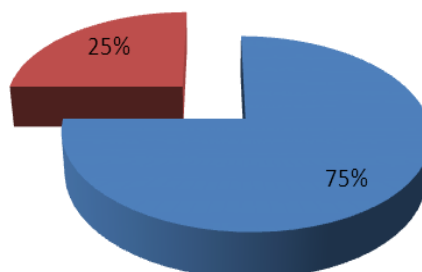


LEGALIZACIÓN DE FIRMAS



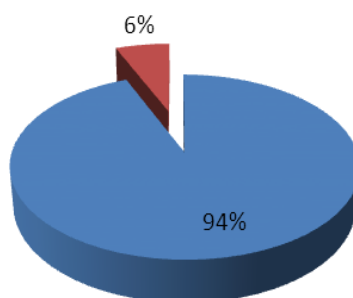
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

■ SI ■ NO



LEGALIZACIÓN DE LIBROS Y ACTAS

■ SI ■ NO



4.2.6. LOS CAPACITADORES DEL JUEZ DE PAZ

DATOS DISCRETOS CUADRO N° 6

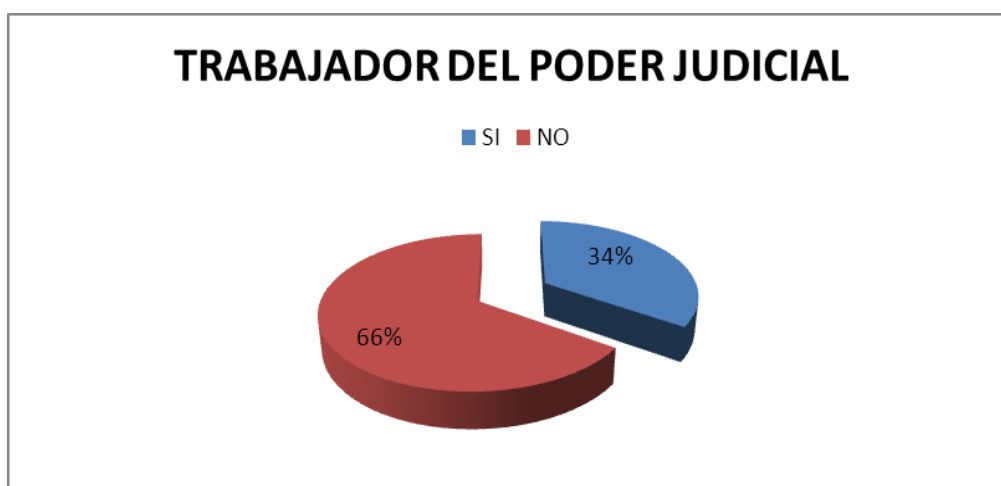
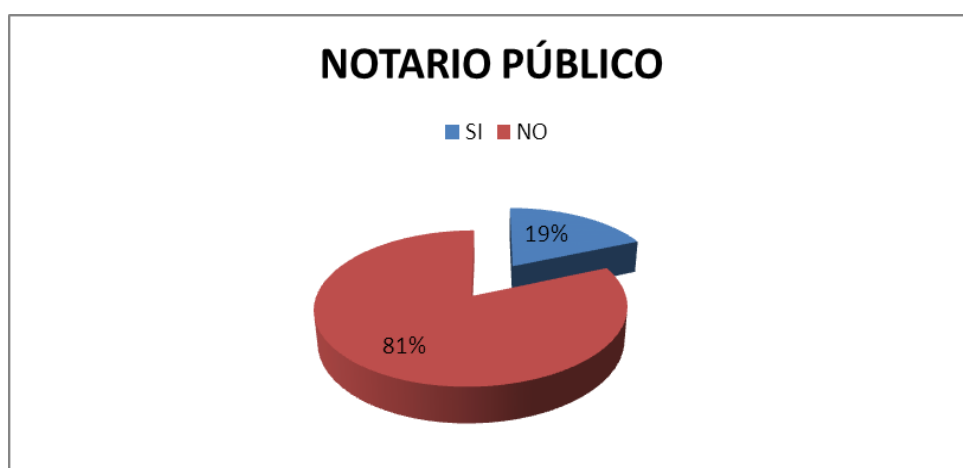
LOS CAPACITADORES DEL JUEZ DE PAZ

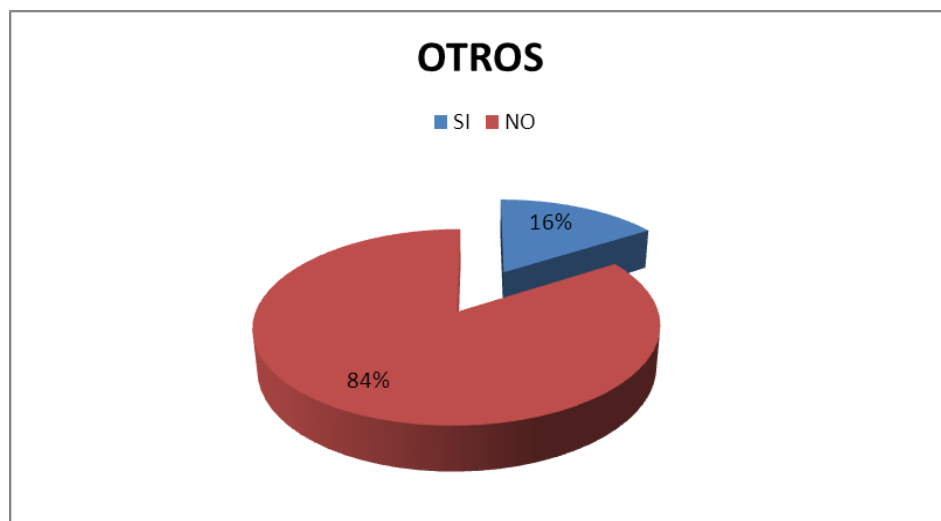
¿Diga Ud., quienes han sido sus capacitadores en la función Notarial?

Con relación a la capacitación de los Jueces de Paz en la función notarial, mayormente ha estado a cargo de los Jueces y trabajadores del Poder Judicial, en razón de que las Cortes Superiores son los que realizan y participan en las referidas capacitaciones, por cierto exiguas.

En el caso de los Notarios Públicos su participación ha sido muy escasa, a excepción de las capacitaciones que se han realizado en el Distrito Judicial de Junín, mas no en las demás regiones materia de la investigación, ello por falta de convocatoria a dichos funcionarios.

NOTARIO PUBLICO		JUEZ DEL PODER JUDICIAL		TRABAJADOR DEL PODER JUDICIAL		OTROS	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
48	210	74	184	89	169	41	217
18.6%	81.4%	28.7 %	71.3 %	34.5 %	65.5 %	15.9 %	84.1 %





4.2.7. CAPACITACIÓN DE JUECES DE PAZ.

DATOS DISCRETOS

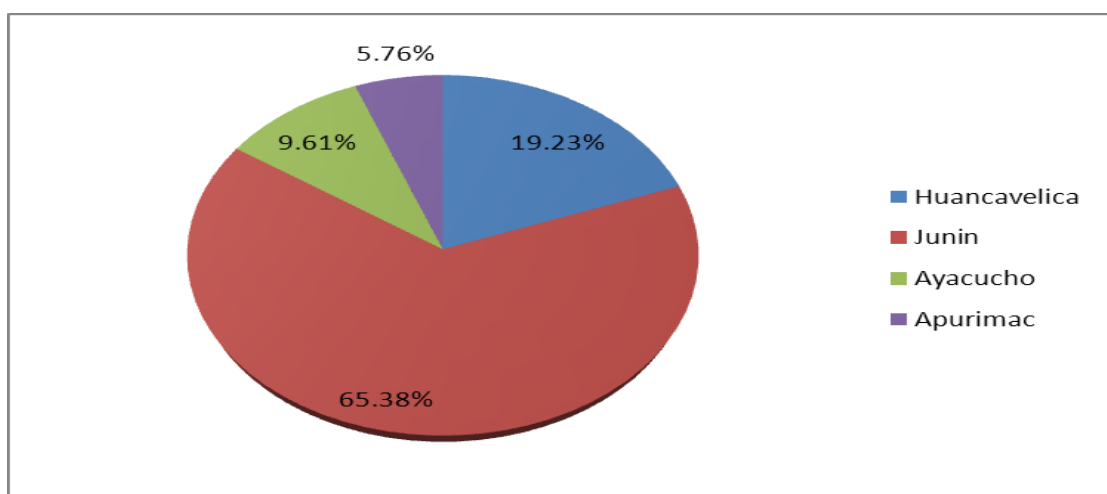
CUADRO N° 7

CANTIDAD DE CAPACITACIONES

¿Cuál ha sido la cantidad o número de capacitaciones de Jueces de Paz, según los Distritos Judiciales en los años 2010, 2011 y 2012?

DPTO. PERIODO.	HUANCAVELICA	JUNIN	AYACUCHO	APURIMAC	TOTAL
2010	02	08	02	01	13
2011	01	12	01	01	15
2012	07	14	02	01	24
TOTAL	10	34	05	03	52
PORCENTAJE	19,23%	65,38%	9,61%	5.76%	100%

CAPACITACIONES DE JUECES DE PAZ, SEGÚN LOS DISTRITOS JUDICIALES EN LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012



El siguiente cuadro señala las capacitaciones de los Jueces de Paz llevados a cabo en los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac durante los años 2010, 2011 y 2012. Los valores porcentuales obtenidos resultan del análisis comparativo de la muestra total que se toma en cuenta, siendo considerados para la presente Investigación 258 Jueces de Paz.

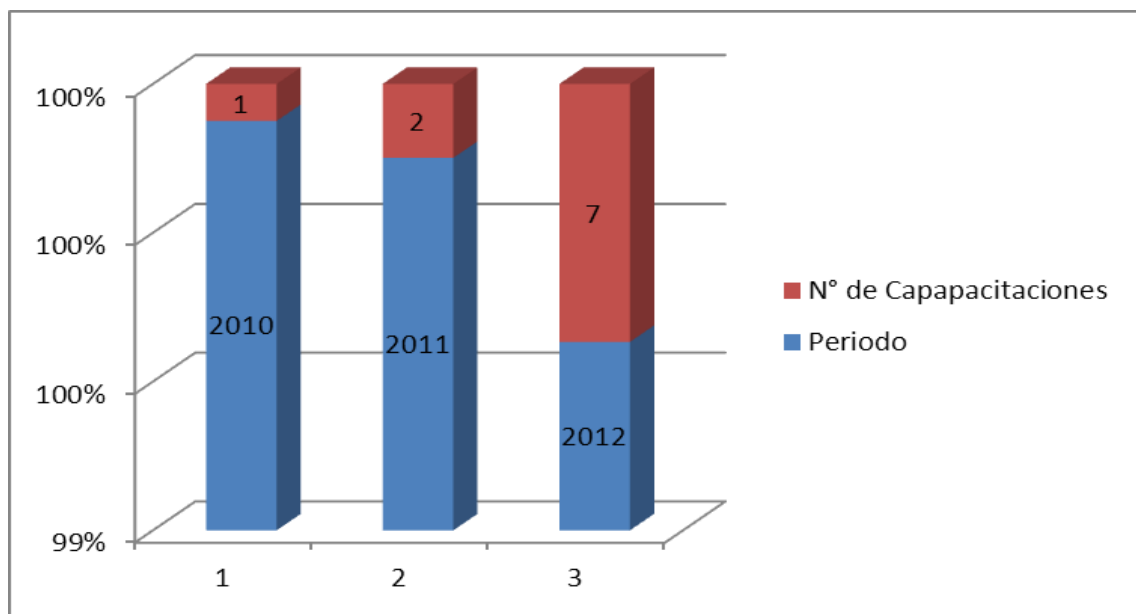
4.2.8. CAPACITACIONES REALIZADOS EN HUANCAMELICA.

DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 8

CAPACITACIONES EN HUANCAMELICA

DISTRITO JUDICIAL HUANCAMELICA				
PERIODO O AÑO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	TOTAL CAPACITACIONES EN LAS 4 REGIONES: 52 (100%)
N° CAPACITACIÓN	02	01	07	19.23%



El cuadro que sigue a continuación detalla las capacitaciones realizados por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica para los Jueces de Paz (las que en su mayoría se han realizado en la ciudad de Huancavelica), durante el periodo de los años: 2010, 2011 y 2012, las que han sido exiguas, alcanzando el 19.23 % del total realizados en los 4 Distritos Judiciales considerados en la investigación.

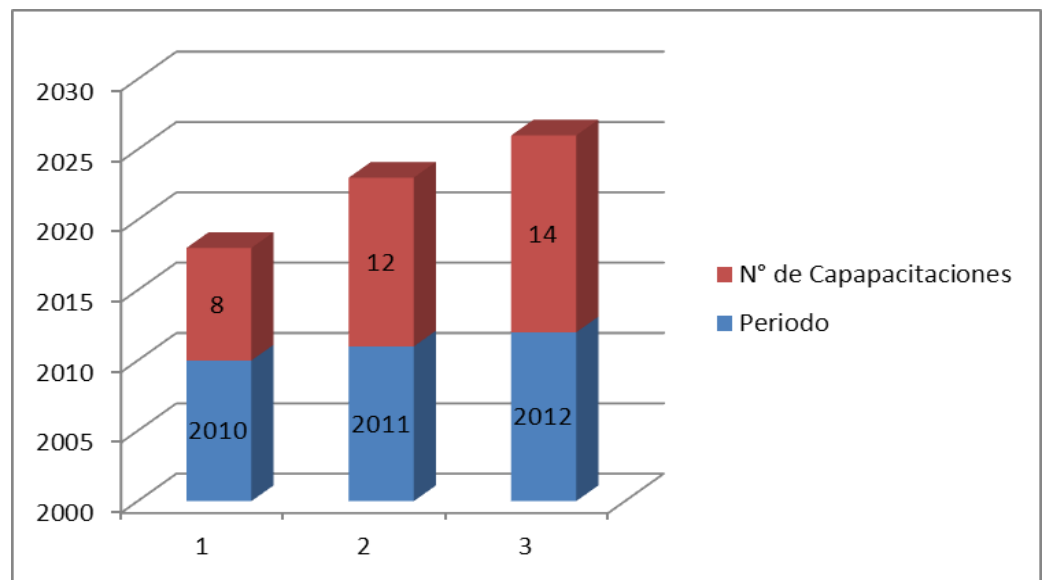
4.2.9 CAPACITACIONES REALIZADOS EN JUNIN.

DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 9

CAPACITACIONES EN JUNIN

DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN				
PERIODO O AÑO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	TOTAL CAPACITACIONES EN LAS 4 REGIONES: 52 (100%)
Nº CAPACITACIÓN	08	12	14	65.38 %



El siguiente cuadro ofrece las capacitaciones de los Jueces de Paz llevados a cabo en el Distrito Judicial de Junín, durante el periodo de de los años: 2010, 2011 y 2012, con un total de 34 actividades en los 3 años, resultando ser la más activa en ese rubro.

Por ello es pertinente resaltar que, por el número de actividades realizados en dicha Corte Superior por intermedio de la ODAJUP-Junín, es una muestra de la preocupación por el Juez de Paz, sabemos de la calidad de dichos eventos, algunos descentralizados y con la participación multidisciplinaria de profesionales de diversas actividades.

4.2.10 CAPACITACIONES REALIZADOS EN AYACUCHO.

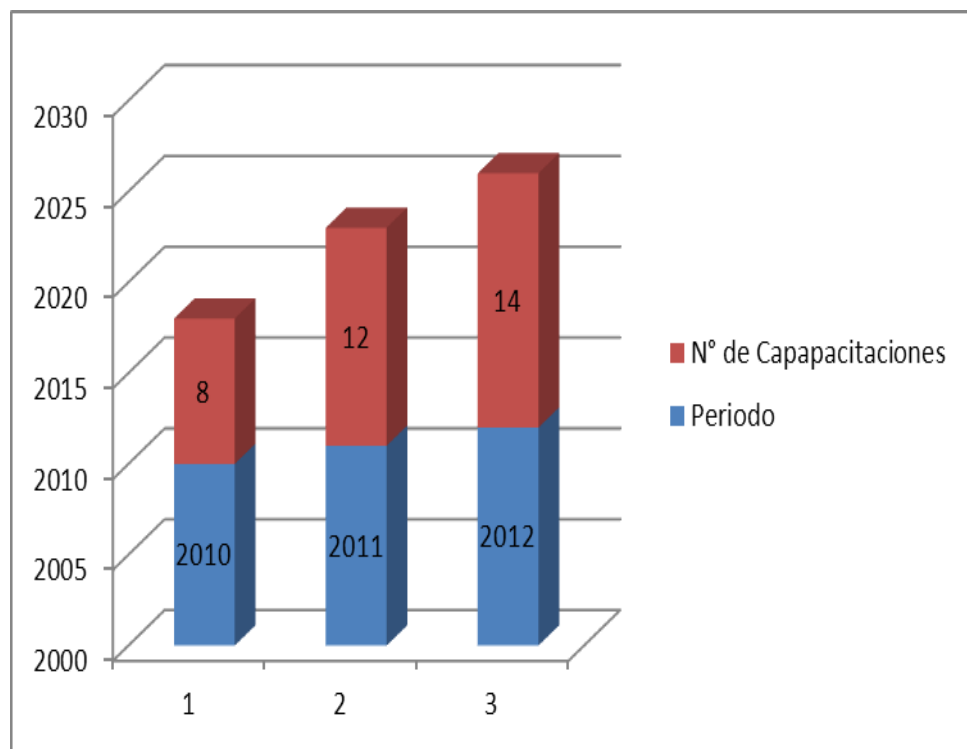
DATOS DISCRETOS

CUADRO N° 10

CAPACITACIONES EN AYACUCHO

A continuación está el cuadro que especifica las capacitaciones realizadas para los Jueces de Paz del Distrito Judicial de Ayacucho, en dichas actividades está lo relacionado a la función notarial, eventos desarrollados en el periodo de los años: 2010, 2011 y 2012. Son escasas las actividades llevadas a cabo, haciendo un porcentaje de 9.61 % del total en los 4 Distritos Judiciales que suman 52 eventos.

DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN				
PERIODO O AÑO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	TOTAL CAPACITACIONES EN LAS 4 REGIONES: 52 (100%)
Nº CAPACITACIÓN	08	12	14	65.38 %



4.2.11 CAPACITACIONES REALIZADO EN APURIMAC.

DATOS DISCRETOS

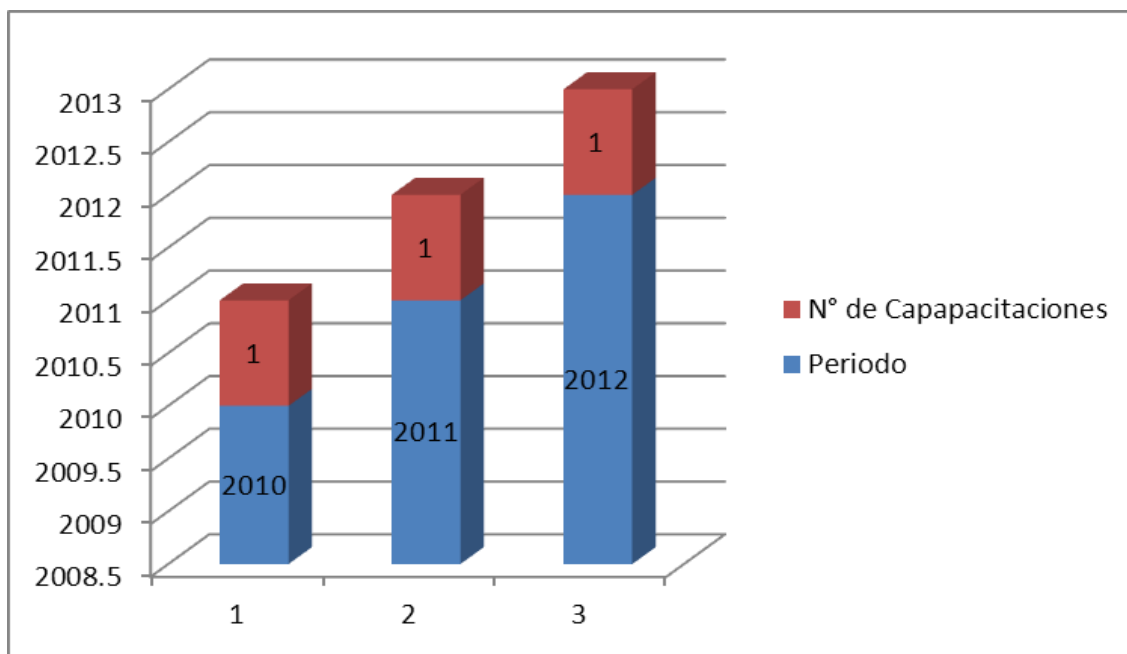
CUADRO N° 11

CAPACITACIONES EN APURIMAC

La Corte Superior de Justicia de Apurímac ha realizado un evento de capacitación por cada año considerado en la investigación, conforme se muestra en el cuadro que vienen a continuación.

Lo señalado denota un mínimo número de capacitaciones llevados a cabo en el periodo de tiempo fijado en la presente Investigación en los años 2010, 2011 y 2012.

PERIODO O AÑO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	TOTAL CAPACITACIONES EN LAS 4 REGIONES: 52 (100%)
Nº CAPACITACIÓN	01	01	01	5.76%



4.3 ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 1, fueron deducidos sobre la consideración de una muestra significativa de 258 Jueces de Paz quienes laboran en la región andina, todos ellos inscritos en una distribución de un muestreo aleatorio metodológicamente controlados, seleccionados y procesados según las normas de estandarización estadística propio del muestreo aleatorio simple (m.a.s).

De la presente investigación, en la distribución correlacional se pudo observar que existen factores de correlación entre las variables de investigación estudiada, pudiendo realizarse un análisis comparativo de los resultados según la naturaleza del caso, los resultados fueron obtenidos mediante una encuesta y traducida en un cuadro de distribución de frecuencia complementados con la respectiva gráfica de pastel.

Según los resultados obtenidos y traducidos en el cuadro de doble entrada, se desprende que el 62% de los jueces de paz encuestados fueron los directos responsables de la preparación y redacción de la escritura pública imperfecta, un 23% de la misma muestra poblacional señalan que no realizaron el trámite de redactar la escritura pública imperfecta de compra y venta. Mientras que un 15% de dichos documentos han sido elaborados por otras personas ajenas a la judicatura de paz, estos son los casos que genera irregularidades y contravención a la legislación notarial.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 2 refleja el grado de instrucción y educación de los jueces de paz, quienes están a cargo de la función notarial que, es una función de responsabilidad por su trascendencia y relación con derechos patrimoniales, personales y con el derecho de familia. Como se aprecia en el cuadro de doble entrada se puede advertir que el 40% de los Jueces de Paz han realizado estudios primarios, de dicho porcentaje el 22 % pudieron culminar su educación

primaria mientras que el 18 % de los mencionados Jueces no concluyeron sus estudios. Mientras que el 42% de ellos realizaron estudios en el nivel secundario, habiendo culminado este nivel de instrucción sólo el 27%, mientras que un 15% de ellos no han concluido los estudios secundarios.

Finalmente un 18% de los Jueces de Paz encuestados realizaron estudios superiores, con estudios culminados son el 12% de ellos, no lograron culminar su formación universitaria un 6%. Según los resultados obtenidos queda claro que el nivel de instrucción de los Jueces de Paz encuestados es bastante deficiente y bajo, considerando que la función notarial que cumplen no debe sustentarse solo en su designación como autoridad judicial, también el grado formación educativa debería ser uno de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta para ejercer la función notarial.

De los resultados obtenidos, reiteramos que, solo el 12% de la muestra poblacional de Jueces de Paz de la región andina han realizado estudios universitarios, de lo que se colige que un 88% de ellos no cuentan con estudios en instituciones de nivel superior, nivel que creemos debe ser tomado en cuenta para dicha función notarial, las que le permitirán ejercer dicha función similar a un Notario Público.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 3, reflejan las ocasiones y oportunidades de capacitación de los jueces de paz de la región centro andina. Como se puede observar del citado cuadro, de la muestra poblacional de 258 jueces de paz, 58 de ellos no tuvieron capacitación alguna, 91 tuvieron una sola capacitación, 70 jueces de paz tuvieron dos capacitaciones, 24 de los encuetados tres capacitaciones, 8 jueces de paz participaron en 4 capacitaciones, 2 jueces en 5 capacitaciones, 4 tuvieron 6 capacitaciones y solamente 01 Juez de Paz participó en 8 capacitaciones, haciendo un total de 77,5% de quienes participaron al menos en una capacitación.

Los resultados obtenidos son preocupantes en cuanto al número de capacitaciones de los jueces de paz, ya que según los resultados obtenidos un 94,1% de ellos han recibido más tres capacitaciones, mientras que un 5,9% de la muestra participan de 4 a 8 capacitaciones.

Según los resultados obtenidos se puede concluir que, las capacitaciones en términos de formación académica para el ejercicio de la función notarial son escasos y esporádicos, con lo que se pone en riesgo primero el desempeño de la función del Juez de Paz en dicha función.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 4, reflejan estadísticas expresados en frecuencias absolutas y en valores porcentuales respecto si, los jueces de paz reciben honorarios en el desempeño de la función notarial que, según datos de la encuesta aplicada a una muestra poblacional de 258 jueces de paz, 188 de los encuestados reciben honorarios por el desempeño de la función notarial que realizan, siendo el 73 %; mientras que 70 de Jueces de Paz no reciben honorarios o reconocimiento en el desempeño de dicha función, alcanzando el porcentaje de 27 %. Demostrándose con los resultados que, en la práctica existe una realidad distinta a la señalada en el ordenamiento jurídico, la que prescribe que la labor del Juez de Paz es gratuita, no debe recibir ningún reconocimiento económico por la función jurisdiccional que ejerce, entre ellas la función notarial.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 5 resaltan estadísticas expresados en frecuencias absolutas y en valores porcentuales en el desempeño de la función notarial. Con relación a trámites en dicha función: 148 Jueces de Paz señalan haber tramitado la escritura pública imperfecta; 192 en legalizaciones y firmas; 194 en certificaciones de documentos y 242 en la legalización de libros de actas.

El cuadro de distribución binomial, resalta las actuaciones notariales más frecuentes a cargo del Juez de Paz, siendo el mayor número y frecuencia la Legalización de los libros de actas (242 = 93,8%), seguido de la certificación de documentos (194 = 75%), considerándose en el tercer lugar laa legalización de firmas (192 = 74,4%) y finalmente el trámite de la escritura pública imperfecta (148- que es el 57,4% de los encuetados).

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 6, reflejan la estadística de quienes son los capacitadores de los jueces de paz. En su mayor parte los eventos ha estado a cargo de los Jueces y los Trabajadores del Poder Judicial. Según el cuadro lineal, los Notarios Públicos son los que han tenido menos participación en los cursos de capacitación. La participación en promedio de los Notarios en los tres años (2010, 2011 y 2012) es un 18,6 %. Los Jueces del Poder Judicial con participación de 28,7%, Trabajadores: 34.5% y otros profesionales en un 15,9 %. Lo señalado refleja, además de la disminuida asistencia a las capacitaciones de los jueces de paz, de quienes son los encargados de entrenarlos y capacitarlos en la función notarial, mayormente a cargo del Poder Judicial.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 7, según los datos reflejados en la estadística, estos expresan cuál es el número de capacitaciones para los jueces de paz según los Distritos Judiciales y por años. Señalamos que en dichas regiones en los 3 años se realizaron un total de 52 eventos de capacitación.

Del citado cuadro N° 07 se desprende que, durante los años 2010, 2011 y 2012 en la Corte Superior de Huancavelica se realizaron 10 capacitaciones (19.23 % del total), en Junín se realizaron 34 (65.38%), en Ayacucho en los 3 años fueron 5 eventos (9.61 % del total de eventos), finalmente en Apurímac solo se realizó 3 capacitaciones para los Jueces de paz (5,76% de un total de 56 eventos).

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el número de capacitaciones del Juez de Paz en los 4 Distritos Judiciales en los 3 años considerados en la investigación es muy escasa, con un total de 52 eventos.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 8 muestran las capacitaciones que se han realizados para los jueces de paz de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Del citado cuadro se puede observar que el número de capacitaciones para el Juez de Paz en los años 2010, 2011 y 2012 fueron solo 10 actividades.

Es una evidencia de que, por diversas razones en los citados años no se llevó a cabo la cantidad necesaria de capacitaciones que se requiere para desempeñar el cargo de Juez de Paz para el ejercicio de la función notarial que exige actualización permanente.

Lo que podemos resaltar es la del año 2012 en la que se han realizado 7 actividades, por el número de éstas se verifica que existe el interés de capacitar a los Jueces de Paz del Distrito Judicial de Huancavelica con eventos en el campo, en la zona rural de dicha región.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 9 muestran las capacitaciones realizadas para los jueces de paz en la Corte Superior de Justicia de Junín, del que se tiene evidencia de un buen número de eventos en dicha sede judicial.

Las capacitaciones realizadas para los jueces de paz de Junín en los años 2010, 2011 y 2012 alcanzaron un total de 34 actividades de que es un porcentaje de 65.38 % un total de 52 eventos para el buen desempeño jurisdiccional, entre ellas para la función notarial.

Como se advertirá, las capacitaciones para los jueces de paz de Junín es el más numeroso que el de las otras Cortes Superiores, ello es resaltable, por la preocupación y dedicación de la encargada de ODAJUP-Junín a cargo de la Dra. María Elena Aquino, quien a lo largo de varios años viene desarrollando eventos de capacitación con participación de equipos multidisciplinarios, actividades descentralizadas, con una metodología innovadora y participativa.

Los resultados del cuadro N° 10, refleja las capacitaciones realizadas en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho en los años 2010, 2011 y 2012 que suman un total de 5 actividades: en el año 2010 dos, año 2011 sólo se realizó un evento y 2 actividades en el año 2012.

Por lo señalado, podemos concluir que Ayacucho, es una de las Cortes Superiores con exiguo número de capacitaciones para los jueces de paz de dicha región, ello incide en el ejercicio de la función jurisdiccional, de igual forma en el desempeño de la función notarial, por el mencionado indicador que es muy bajo en lo referente a la capacitación del Juez de Paz de Ayacucho.

Finalmente, conforme al cuadro N° 11, en ella se muestra las capacitaciones realizadas para el Juez de Paz de Apurímac en los años 2010, 2011 y 2012.

Como se advierte el número de capacitaciones recibidas por los jueces de paz de dicha región es una actividad por cada año, del total de los 4 Distritos Judiciales en términos porcentuales tiene un 5.76 %; el realizar un evento por cada año refleja una realidad de descuido y despreocupación en la formación y capacitación del Juez de Paz, el cual tiene que ser mejorado en los siguientes años con mayor número de actividades de capacitación.

En el contexto antes señalado, se evidencia una despreocupación institucional para la realización de actividades de capacitación para los jueces de paz del citado Distrito Judicial, las que son menores a los realizados en las otras 3 Cortes Superiores considerados en la presente investigación, carencia que influye en el cumplimiento de la función notarial a cargo del Juez de Paz.

4.4 ANALISIS, CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS.

4.4.1. HIPOTESIS GENERAL.

4.4.1.1 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS GENERAL.

La consecuencia del inadecuado cumplimiento de la función notarial en nuestro país es que, algunos Jueces de Paz en los últimos años vienen siendo cuestionados, criticados por los integrantes de su comunidad o pueblo en el ejercicio de dicha función. Los trámites más frecuentes son los casos en los que, el Juez de Paz participa en la elaboración, redacción y suscripción de las escrituras públicas imperfectas que tienen relación con contratos de compra-venta de bienes inmuebles, testamentos, donación y otros actos de disposición patrimonial en las que muchas veces no cumplen con las formalidades notariales que exige la transferencia de derechos reales de propiedad o de posesión.

En algunos trámites señalados antes, incluso éstas se han llevado a cabo sin la intervención de todas las partes contratantes; sobre bienes ubicados en lugares distintos a la comunidad, sin el estudio adecuado de

la documentación y personas que realizan el negocio jurídico. Un Notario Público- a diferencia del Juez de Paz- para la suscripción de un contrato, previamente realiza el estudio de los documentos y títulos, identifica plenamente a los contratantes, cumple las formalidades exigidas por la legislación notarial.

Situación similar se da en el caso de la legalización de firmas a cargo del Juez de Paz, se conoce de casos en las que la legalización lo realiza sin la presencia física del solicitante o de la persona cuya firma se pretende legalizar. Se certifican documentos sin tener a la vista el original, entre otros actos cuestionados que constituyen una actuación irregular del Juez de Paz en la función notarial encomendada.

Lo señalado genera reclamos y quejas de los usuarios que se ven perjudicados por la actuación irresponsable del Juez en mención. Algunos de estos documentos tramitados en el ejercicio de la función notarial por el Juez de Paz genera incluso conflictos al interior de una comunidad, hasta se judicializan por las acciones judiciales seguidas contra las actuaciones notariales irregulares a cargo de dicha judicatura (ver cuadro N° 1 y el cuadro N° 5)

Lo cierto es que al ejercer la función notarial, por diversas razones o factores contravienen e incumplen la normatividad notarial vigente, consecuencia de ello son las quejas y denuncias ante los órganos de control del Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales por presunta inconducta funcional, con la apertura de procesos de investigación, sanciones administrativas, incluso con la sanción de Destitución por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de gobierno que en el año 2010 destituyó a 08 jueces de paz, el año 2011 con 04 destituciones, el año 2012: 13 destituciones ⁽⁷⁵⁾.

⁷⁵Un total de 25 Destituciones en los 3 años (2010, 2011 y 2012), sanción administrativa que imponen el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

También están los casos de jueces de paz involucrados en procesos penales por la comisión de delitos contra la fe pública, usurpación de funciones, abuso de autoridad. Aparte los procesos civiles con la pretensión procesal de nulidad del acto jurídico en la que ha intervenido un Juez de Paz en el desempeño de la función notarial; lo señalado genera dentro del colectivo social, críticas y cuestionamientos contra algunos jueces de paz de los distritos judiciales considerados en la presente investigación.

Por dichas consideraciones es que, en la investigación se ha planteado la formulación del problema: Cuales son o pueden ser las causas o razones por la que los jueces de paz de los distritos Judiciales en mención, no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial prevista en el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, antes normado en el art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras disposiciones legales que le faculta ejercer dicha función.

Por esa razón es que, durante la gestión del Presidente del Poder Judicial Dr. Walter Vásquez Vejarano, por el desorden y falta de coordinación con las ONGs se dispuso que la capacitación de los Jueces de Paz tenía que contar con la autorización y coordinación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, además de ello con la finalidad de centralizar los esfuerzos de apoyo a la justicia de paz se creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz ONAJUP que tendría como objetivo centralizar y coordinar todo lo relativo a la judicatura de paz, a la vez en cada una de las Cortes Superiores las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz ODAJUP.

El resultado de dicha medida es que en los años posteriores, entre ellos en los años 2010, 2011 y 2012 el número de las capacitaciones para

En los siguientes años en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano continua publicándose más Destituciones de Jueces de Paz por inconducta funcional.

la justicia de paz fueron escasos. En los 4 Distritos Judiciales considerados en la investigación se realizaron un total de 52 eventos de capacitación, la Corte Superior de Huancavelica el año 2010 efectuó 02 capacitaciones, en año 2011 se realizó 01 capacitación y en año 2012 se llevó a cabo 07 capacitaciones.

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho en el año 2010: realizó 2 capacitaciones, en el año 2011: solamente 01 capacitación, mientras que en el año 2012: se llevó a cabo 02 capacitaciones.

Mientras que en la Corte Superior de Junín: año 2010 se llevaron a cabo 8 capacitaciones, el año 2011: se llevaron a cabo 12 capacitaciones y el año 2012: se llevó a cabo 14 capacitaciones.

Finalmente en la Corte Superior de Justicia de Apurímac en el año 2010 se llevó a cabo 01 sola capacitación, en el año 2011: sólo se llevó a cabo 01 capacitación, de igual forma en el año 2012 solamente 01 evento de capacitación.

La preocupación y la respectiva respuesta es obvia, por qué el escaso número de capacitaciones. Primero se dejó de lado la participación de entidades particulares como las ONGs interesados en la justicia de paz; en segundo lugar, el Estado ni Poder Judicial no asigna los recursos presupuestarios suficientes para solventar los costos de los eventos de capacitación; los órganos de gobierno y los que dirigen el Poder Judicial, los Presidentes de las Cortes Superiores por la temporalidad del cargo del Juez de Paz con la legislación anterior (2 años), no han puesto el mismo interés y preocupación que por la judicatura ordinario, sin tener en cuenta que es una instancia del Poder Judicial.

Es de suma importancia la dirección y liderazgo que imprime un Presidente de Corte, la Sala Plena y la Administración de una Corte Superior con relación a la justicia de paz, si no imprime interés ni apoyo ellos quedan a la deriva, no reciben capacitación y actualización, no hay talleres ni cursos. Sin embargo existen excepciones por cuando se dan casos de Jueces y Auxiliares realmente comprometidos con la justicia de paz, una de ellas es la Corte Superior de Junín en la que sus autoridades judiciales además de crear una oficina de apoyo, implementó un equipo de trabajo encargado de apoyarlos, servidores judiciales con dinamismo y preocupación por los Jueces de Paz, habiendo realizado 34 capacitaciones en los años 2010, 2011 y 2012, se conoce que en años subsiguientes continúa la decisión de apoyar a dicha judicatura.

Las dificultades y problemas que se presentan en el cumplimiento de la función notarial en el ámbito de la judicatura de paz, de por medio están las razones, los orígenes, las causas que la motivan o que dan lugar a dicho incumplimiento. Con el análisis y evaluación de las variables e instrumentos que a continuación señalamos, esperamos llegar a las conclusiones del caso, de ser posible formular recomendaciones o sugerencias para mejorar la función notarial a cargo del Juez de Paz.

Razones de Orden Cognitivo.

Los factores de orden cognitivo o de conocimiento del Juez de Paz tiene relación con la falta de comprensión y aplicación de la normatividad legal prevista en el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz (antes con el derogado artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y otras disposiciones legales conexas a la función notarial.

Algunos jueces de paz a pesar de que recibieron alguna capacitación limitada, con materiales consistentes en manuales e instructivos para el cumplimiento de la función notarial, no están tomando

en cuenta las exigencias del art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, así como lo normado en el derogado artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que respecta al trámite de la escritura imperfecta, protestos, legalizaciones y otros, en las que el Juez de Paz ya no podría actuar conforme a su leal saber y entender, en razón de que dicha labor exige mayor cuidado, diligencia y cumplimiento de la normatividad notarial vigente en nuestro país tal como lo realiza el Notario Público.

En este orden de ideas, el Juez de Paz tienen la obligación de cumplir lo normado en la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Títulos Valores y las demás normas ampliatorias con las que el legislador viene otorgando competencia al Juez de Paz en dicha función. Una de ésta funciones es la séptima disposición final del Decreto Legislativo No. 667 relacionado con la titulación de predios urbanos y rurales a cargo del PETT por la que, en localidades en que no hubiera Notario Público o Abogado Colegiado, el formulario registral, podrá ser firmado por el Juez de Paz competente, como se advierte es uno de los casos en los que dicho Juez reemplazará al Notario Público.

Una de las causas para el incumplimiento de las disposiciones legales notariales por el Juez de Paz es la carencia de capacitaciones, talleres y entrenamiento adecuado de éstos para cumplir dicha función en los Distritos Judiciales involucrados en la investigación. Lo cierto es que las respectivas Corte Superiores no están asumiendo compromiso con dicha judicatura, menos asumen dicha realidad y problemática, la consecuencia es que se dan los imponderables y dificultades en el ejercicio de la mencionada función notarial por la carencia de conocimientos, experiencia y apoyo institucional.

Razones de Orden Conductual

Cuando nos referimos a conducta es la manera como se conduce el Juez de Paz, el comportamiento de los Jueces que conforman la Jurisdicción en su actuación personal y como autoridad, entre ellos la judicatura de paz- por cierto instancia no formal- pero con la misma obligación de actuación ética y moral en el desempeño funcional, al igual que los Jueces de carrera que, de alguna manera dicho comportamiento se evidencia y trasluce en su actuación procesal y decisiones judiciales.

Es preciso señalar que, en el sistema de justicia así como en otras entidades públicas y privadas, se conoce los inconductas funcionales a través de los medios de comunicación, quejas, investigaciones y procesos judiciales contra los Magistrados, algunas de ellas tienen relación con el comportamiento, conducta y desempeño de la función jurisdiccional. Se conoce de casos puntuales de inconducta funcional, actos de corrupción descubiertos, publicitados por los medios de comunicación, cuestionados y reprochados por la sociedad, por ser contrarios a los principios de la ética y por afectar los intereses de la comunidad.

Las inconductas en las que vienen incurriendo los Jueces profesionales, no son ajenos ni están excluidos los Jueces de Paz, ellos también como seres humanos tienen virtudes, defectos y debilidades, son falibles y susceptibles de incurrir en una inconducta funcional, actos irregulares, corrupción en el cumplimiento de sus funciones. En esa perspectiva, la pregunta es: cuáles pueden ser las razones o causas para que algunos jueces de paz, pueden estar incurriendo en lo señalado.

Las razones pueden ser probablemente factores económicos, la pérdida de valores, la conducta sin ética, la influencia y participación de agentes externos, ajenos al Poder Judicial entre éstos son los usuarios que acuden al servicio de justicia impartida por los jueces de paz, siendo

uno de estos los relacionados a la función notarial, convirtiéndose en muchos casos los mismos usuarios los son los generadores de las inconductas funcionales y actuación contraria a la ley.

Visto el análisis en el presente orden de ideas y encontrándose sustentadas todas ellas por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que dice:

H1: Es cierto que, los Jueces de Paz de los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones de orden cognitivo y conductual.

4.4.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA

4.4.2.1 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ESPECÍFICA UNO.

En el Perú la Justicia de Paz “constituye un elemento de aproximación entre la Comunidad y el Estado, por ser una especie de eslabón o bisagra entre la Justicia formal, estatal u oficial con la justicia comunal. La justicia de paz es el primer peldaño de la Administración de Justicia en nuestro país” (María Elena Guerra Cerrón, Hacia una Justicia de Paz, un asunto de interés nacional, Editorial Grijley, Lima, 2005, pág. 19), lo cual es cierto en razón de que, en los últimos años al Juez de Paz lo encontramos en los pueblos y lugares más alejados de nuestro país, quienes garantizan el acceso a la justicia no sólo en las comunidades campesinas y nativas, sino en todos los pueblos del interior del Perú.

Antes de la promulgación de la Ley No. 28585, Ley de Elección de los Jueces de Paz, publicado en el Diario Oficial El Peruano, disponía que el periodo establecido para ejercer el cargo de Juez de Paz era de 03 años, posteriormente el periodo establecido es de 02 años, con la actual Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, el periodo fijado por el legislador nacional es de 4 años, con la posibilidad de ser reelegido.

Sobre lo señalado en el párrafo anterior es necesario realizar un análisis y evaluación sobre las causas o factores que no han permitido realizar el número esperado de actividades de capacitación en el citado periodo del año 2010 al año 2012 sobre la función notarial, incluso en los meses posteriores al periodo señalado. Aparte del tema de orden presupuestal que hemos señalado antes, en definitiva es factor fundamental y necesario la realización de talleres y eventos de capacitación para jueces de paz para el buen desempeño del cargo.

Lo cierto es que se han realizado esporádicos esfuerzos para apoyar la labor de la justicia de paz, a pesar de los discursos y promesas para mejorar su labor, es permanente y reiterado la referencia a los Jueces de Paz en las ceremonias oficiales, eventos académicos sobre la importancia de éstos en los pueblos del interior del país en las que resuelven conflictos sometidos a su competencia. Se ha llegado al extremo de señalarse que, es una institución judicial de exportación por la forma particular de impartir justicia dentro de un pueblo o comunidad.

De un total de 258 Jueces de Paz encuestados, al ser preguntados si habían sido capacitados, actualizados y entrenados en la función notarial a cargo del grupo de capacitadores designados en sus respectivos Distritos Judiciales (Como es de

verse en el gráfico N° 7, N°8, N°9, N°10 y N°11) 58 jueces de paz que hacen un porcentaje de 22.5 %, señalan que nunca han tenido la oportunidad de ser capacitados y entrenados para ejercer el cargo de juez de paz, como vemos es un porcentaje muy significativo. Lo cierto es que muchos de ellos ejercen el cargo sin haber participado en ninguna capacitación, lo cual es necesario en toda actividad o servicio de carácter público.

Una de estas causas es el factor geográfico. La región andina del país por lo agreste y accidentado de su territorio, la formación tectónica de la cordillera de los andes, ha dado lugar a que las ciudades y pueblos ubicados en la región andina no cuenten con facilidades de acceso y vías de comunicación que permitan interconectarse fluidamente con los centros urbanos, capitales de provincias y regiones. Si existen vías de comunicación, al traslado se adiciona el costo que implica trasladarse, la escasez de medios de transporte, entre otros factores.

Por dicha dificultad geográfica muchos jueces de paz no han tenido la oportunidad de participar en las actividades de capacitación y talleres que organiza una Corte Superior, además del costo económico de traslado hasta la capital de la región que son lugares donde mayormente se han realizado dichos eventos de capacitación. Los Jueces de Paz que residen cerca de las ciudades de Huancayo, Abancay, Huamanga y Huancavelica son los que de alguna manera han tenido mayores oportunidades de actualización, a diferencia de otros ubicados en lugares más distantes.

De otro lado, los jueces de paz de la región andina en su mayoría son ciudadanos dedicados a la agricultura, la ganadería y comercio de productos con las que sustentan su economía familiar.

Dichas actividades dependiendo de las estaciones, del periodo de las actividades agrarias, de la programación y proyección de sus actividades particulares son también factores que puede dar lugar a que no participen en las capacitaciones y talleres; sus ocupaciones familiares a veces es su prioridad principal, están sus necesidades primarias, en segundo lugar el cargo de Juez de Paz que no es rentado por el Estado.

La justicia de paz a pesar de su trayectoria y legitimidad dentro del sistema jurídico, por su tradición y reconocimiento en los pueblos más recónditos de nuestro país, bajo la consideración de que es un estamento más de la Jurisdicción, por falta de compromiso de los órganos de gobierno del Poder Judicial, por razones presupuestarias, por la desidia y descuido de las Cortes Superiores se ha postergado la atención que merecen dicha instancia judicial.(ver cuadro N° 07, cuadro N° 08, cuadro N° 09, cuadro N° 10 y cuadro N° 11)

Visto el análisis en el presente orden de ideas y encontrándose sustentadas todas ellas por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que dice:

H11: Es cierto que los Jueces de Paz del Distrito Judicial de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, no están dando cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones de formación cognitivo, en el ámbito educativo- cultural.

4.4.2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ESPECÍFICA DOS.

Es innegable que para el buen desempeño laboral y funcional, el conocimiento y la parte cognoscitiva tienen una incidencia fundamental en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales de los Jueces de paz, entre ellas en el ejercicio de la función notarial, toda vez que el grado de instrucción, educación y cultura incide necesariamente en el desempeño del Juez de Paz en su condición de autoridad judicial.

De ahí la importancia de conocer y saber cuál es el grado de instrucción, cultura y educación que ostentan los jueces de paz de la región centro andina de nuestro país, ya que dicho indicador en definitiva nos dará ciertos parámetros, elementos de juicio que nos permitirá dilucidar y saber hasta qué punto influyen dichas variables en el cumplimiento de la función jurisdiccional, entre ellos en la función notarial asignada al Juez de Paz.

Del cuadro N° 2, se colige que de un total de 258 Jueces de Paz de Huancavelica, Ayacucho, Junín y Apurímac, 56 de ellos tienen educación primaria completa, mientras que 48 jueces de paz tienen primaria incompleta, en términos porcentuales un 40.3 % de jueces de paz han cursado solamente estudios primarios.

De otro lado 69 Jueces de Paz cuentan con secundaria completa, siendo un porcentaje de 26,8 %, 38 tienen secundaria incompleta siendo un porcentaje del 14,7 %. Finalmente, 47 de los entrevistados cuentan con estudios superiores: 31 de ellos han alcanzado estudios superiores completos que es el 12 %, mientras que 16 tenían estudios superiores incompletos que es el 6,2 % de Jueces de Paz.

En el citado aspecto educativo, en la encuesta realizada se tiene que 31 Jueces de Paz (12.0 %) tienen una formación superior completa, es decir han tenido la oportunidad de haber recibido una formación profesional en una Universidad o Instituto Superior. Estos Jueces de Paz en su mayor parte son Docentes o Profesores que ejercen la docencia en zonas rurales, algunos de ellos son lugareños. Del número de jueces de paz con formación superior, 16 jueces de paz tienen una formación superior incompleta, lo que representa un 6.2 % de Jueces. Estos 2 sectores de jueces de paz a no dudarlo están en mejores condiciones y capacidades para cumplir la función notarial, lo cual será mejor si a estos de jueces de paz se les brinda y apoya con una adecuada formación y capacitación en el tema de la fe pública.

En atención a lo señalado podemos concluir que, los jueces de paz que han cursado estudios secundarios y los que han seguido estudios universitarios son los más indicados para cumplir la función notarial, además de una adecuadas capacitación en el tema, con el otorgamiento de la respectiva acreditación a cargo la Corte Superior a los jueces de paz que están en condiciones inmejorables de ejercer dicha función notarial, de ser así, se evitará cuestionamientos y observaciones a éstos en el desempeño de la citada función notarial.

Es de agregar que, la mayoría de los jueces de paz de la región centro andina de nuestro país han cursado estudios en una escuela pública que, como es de conocimiento público en las últimas décadas también tienen serias dificultades y problemas en cuanto a la calidad educativa que no es la esperada, lo cual incide también en la formación cultural de los jueces de paz en su mayoría de edad, cuando tienen la oportunidad de asumir la función de Juez de Paz, entre éstas la función notarial.

Visto el análisis en el presente orden de ideas y encontrándose sustentadas todas ellas por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que señala:

H1₂: Es cierto que, los Jueces de Paz de los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones cognitivas e instrucción.

4.4.2.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ESPECÍFICA TRES.

Las regiones donde están ubicados los distritos judiciales de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac con excepción del primero de los nombrados, son regiones andinas donde la pobreza y extrema pobreza, están asentadas estructuralmente desde los inicios de la República, por este motivo son regiones con atención preferente del Estado en los últimos años para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

La referida realidad social y económica de dichas regiones fue una de las razones por las que en la década de los años 80, fuera utilizado por el docente Universitario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Abimael Guzmán Reinoso, con el movimiento Sendero Luminoso, dando inicio en Chuschi (1980) a la oleada de violencia política y social que duró hasta fines de la década del 90, con el costo de más de 35,000 vidas humanas, destrucción, atraso social, con graves secuelas en las zonas rurales de la indicadas regiones.

Las dos décadas de violencia iniciada en Ayacucho, se expandió también a las regiones colindantes, esto es a Huancavelica y Apurímac, posteriormente también a Junín, convirtiéndose en las regiones que sufrieron gravemente las consecuencias de muerte, destrucción,

ejecución de autoridades entre ellos algunos jueces de paz, descalabro de la economía así como el agravamiento de las condiciones de vida del poblador del campo, quienes en buen número para salvaguardar su integridad física emigraron a las ciudades más importantes del país .

Las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac según los estudios macroeconómicos, coinciden en señalar que son las regiones en las que está presente la pobreza extrema, por los altos índices de desnutrición crónica infantil, escasas posibilidades de desarrollo económico, ocupación laboral y otros factores. Existen informes que diagnostican el problema, así como las estrategias o políticas del Estado para superar dicha problemática social y económica.

Si bien la región de Junín no está considerado en el mapa de extrema pobreza actualmente, ello se debe a la ubicación geográfica dentro del país, lo que le ha permitido en primer término aprovechar su potencial económico basado en la minería, agricultura, como productora de insumos con un mercado exigente y cercano como es Lima; de igual forma el turismo que ofrece una variedad de aventuras, entre otros factores, son los que le han permitido mejorar las condiciones de vida del ciudadano en algunas provincias de la región Junín, con excepción de algunas zonas pobres que son en menor proporción.

En las tres regiones más pobres del Perú, en cifras tenemos que un 48.5% de niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica; el 23.3% de la población de las citadas regiones es analfabeta, el doble del promedio nacional; un 64.4% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. De acuerdo con un informe presentado en el Diario Oficial El Peruano, en Octubre del 2012 se tiene la información de que las Provincias de Angaraes, Tayacaja y Acobamba registran el menor nivel de desarrollo humano. Los Distritos de Huanca Huanca y

Santo Tomás de Pata situados en la provincia de Angaraes-Huancavelica figuran entre los 15 distritos más pobres del país.

En el contexto socio- económico antes descrito, ejercen sus funciones los Jueces de Paz de los distritos judiciales de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac con un total de 1218 Juzgados de Paz que imparten justicia, así como ejercen la función notarial en los poblados, comunidades campesinas ubicadas en su mayoría en la región de la sierra de las 4 citadas regiones.

Esta crítica situación y las carencias sociales para los pobladores de las citadas regiones ha dado lugar a que, no solo el Juez de paz sino también otros funcionarios y autoridades regionales, alcaldes, regidores, gobernadores y tenientes gobernadores, docentes y servidores públicos, en las ocasiones que asumen cargos públicos también vienen incurriendo en actos de corrupción y conducta contraria a la ética, algunos servidores públicos buscan aprovecharse del cargo para obtener algún lucro o beneficio económico personal en el cumplimiento de sus funciones.

De esta realidad social cuestionada, contraria a la función pública y la ética, no está ajeno la judicatura de paz de la región andina, quienes por la tradición y normatividad que se mantiene hasta la actualidad ejercen su labor en forma gratuita, a diferencia de las otras autoridades que perciben una remuneración del Estado, en algunos casos no serán acorde a sus necesidades como es el caso de un Docente o Gobernador, pero tienen la oportunidad de percibir ingresos económicos.

La gratuidad del servicio está normado expresamente en el artículo VI del Título Preliminar de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, antes en el art. 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe que la Justicia de Paz es gratuita, salvo que una diligencia o actuación se realice fuera del Despacho Judicial en cuyo caso perciben los derechos que fija

el Consejo Ejecutivo Distrital. Dicha posibilidad de percepción de ingresos en la mayoría de las Cortes Superiores no ha sido fijado, menos lo está actualmente fijado, lo cual es una omisión imputable al Poder Judicial.

Por esta realidad e imprecisiones señaladas, si bien es cierto que los Jueces de Paz tienen pleno conocimiento que su actuación judicial es gratuita, también es cierto que, como cualquier ciudadano tienen necesidades familiares, personales, obligaciones que cumplir. Por ello es que para contar con algún ingreso económico, algunos jueces de paz de la región andina, ocupando dicho cargo ven una oportunidad para percibir alguna suma de dinero en el ejercicio de la función jurisdiccional, al realizar diligencias o actuaciones judiciales, no solo cuando realiza fuera de su Despacho sino también en las actuaciones que realiza dentro de su propio Despacho judicial.

Lo cierto es que un Juez de Paz al realizar una actuación o diligencia judicial, al ejercer la función notarial, en lo posible busca percibir alguna retribución económica, un estipendio por parte de los usuarios a falta de un reconocimiento por parte del Estado, los usuarios son los que asumen dicho costo. El derecho que le correspondería al Juez de Paz a percibir un ingreso por la labor que cumple está prescrito en el art. 23 de la Norma Fundamental por la que toda actividad pública o laboral tiene que ser remunerado como se da en el caso de todos los servidores del Estado.

La percepción y cobro de sumas de dinero por el Juez de Paz se conoce por las quejas y reclamos, así como por las denuncias interpuestas contra éstos que, de alguna manera aprovechan la falta de una regulación normativa de la respectiva Corte Superior que no fijan los derechos que deben de percibir los referidos jueces. Lo cierto es que se conocen en algunos casos cobros excesivos, arbitrarios, agravados en

ciertos casos por el cobro que realizan también los Testigos Actuarios (que cumplen labor similar al Secretario Judicial) si es que cuenta con dicho Auxiliar, incluso participan de estos cobros un Teniente Gobernador cuando cumplen labor de apoyo al Juez de Paz cuando realizan notificaciones, por la conducción compulsiva de personas renuentes a acudir al despacho de un Juez de Paz, entre otras labores de apoyo.

Por lo mencionado es necesario precisar que, estando en el siglo XXI, en la era de la globalización, crecimiento económico de nuestro país que ha suscrito Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, Chile, con los países emergentes del Asia, creemos que es una exigencia y necesidad de que el Estado asuma posición para que el Notariado Público esté al alcance de vastos sectores del país, en la región centro andina y lugares apartados del Perú, quienes también deben beneficiarse y participar de la modernidad y beneficios del servicio público, del desarrollo económico de los últimos años.

En esa perspectiva de cosas, sabemos que en los últimos años se ha incrementado las Facultades de Derecho, de igual forma el número de Abogados, en esa misma proporción deben ampliarse el número de vacantes para Notarios Públicos en regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín en las que no se cuenta con el número suficiente. De contarse con Notarios Públicos en los lugares apartados del país, permitirá que las transacciones comerciales, el tráfico de bienes muebles e inmuebles y los demás actos de fe pública se realicen con las garantías y formalidades que se requiere, con seguridad jurídica, apoyando el desarrollo económico e integral de dichas regiones.

Lo cierto es que un Juez de Paz, al realizar una actuación o diligencia judicial, al ejercer la función notarial, en lo posible trata de recibir alguna retribución económica, un estipendio por parte de los

usuarios, a falta de reconocimiento por parte del Estado, los usuarios son los que asumen dicho costo. El derecho que le corresponde a la judicatura de paz, el reconocimiento de toda labor o actividad está prevista en nuestra Constitución, por la que toda actividad pública o privada tiene que ser remunerado, como se da en el caso de todos los servidores del Estado.

La percepción y cobro de sumas de dinero por el Juez de Paz se conoce por las quejas y reclamos, por las denuncias interpuestas contra éstos que de alguna manera aprovechan la falta de una regulación normativa de la respectiva Corte Superior que no ha fijado los derechos que deben percibir el referido juez. Lo cierto es que se conocen en algunos casos de cobros excesivos, arbitrarios, agravados en ciertos casos por el cobro que realizan también los Testigos Actuarios (que cumplen similar labor al Secretario Judicial) si es que cuenta con éste, incluso participan de estos cobros algunos Tenientes Gobernadores cuando cumplen labor de apoyo al Juez de Paz realizando notificaciones, por la conducción compulsiva de personas renuentes a acudir al despacho de un juez de paz, entre otras labores de apoyo.

El cobro de una suma de dinero tiene relación en muchos casos con una actuación irregular, hasta dolosa al legalizar documentos, redactar escrituras imperfectas u otorgar constancias que no se ajustan a la realidad, con las que se afectan derechos y perjuicios a terceros, la actuación notarial no refleja la realidad de un hecho o acto jurídico; en éstos casos cuestionados generalmente de por medio está la percepción irregular de una suma de dinero, bienes o favores de diverso índole, son casos de corrupción e inconducta funcional en la judicatura de paz.

Según la información obtenida, de la muestra de 258 jueces de paz como se indica en la gráfica N° 04, 188 de ellos reciben honorarios por el desempeño funcional, siendo este valor el 73% de los encuestados, en

tanto se determinó que 70 jueces de paz no reciben ningún tipo de pago, siendo un porcentaje de 27 % de los encuestados.

La percepción de una remuneración para el Juez de Paz debe darse en nuestro país; aparte buscar en forma gradual que el servicio de la función notarial sea accesible, profesionalizada, en la que la función de la fe pública esté a cargo de Abogados especializados. En casos excepcionales deberá estar a cargo de los Jueces de Paz Letrado, en última instancia por los Jueces de Paz, para lo cual tienen que estar capacitados y autorizados por sus respectivas Cortes Superiores, con idoneidad para cumplir la función notarial.

Visto el análisis en el presente orden de ideas y encontrándose sustentadas todas ellas por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que dice:

H1₃: Es cierto que los Jueces de Paz de los Distritos Judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando cumplimiento a la función Notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones socio-económicas.

4.4.2.4 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ESPECÍFICA CUATRO.

Por la falta de una atención adecuada y permanente del Juez de Paz, tanto por el Poder Judicial, las Cortes Superiores y el gobierno central, se ha dado el caso de que organismos no gubernamentales ONG han venido asumiendo la tarea de capacitar y actualizar a los jueces de paz de la región andina. Entre estas entidades podemos mencionar al IDL (Instituto de Defensa Legal), Justicia Viva, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otros, quienes han direccionado parte de sus actividades y recursos que disponen para la judicatura de paz.

Al respecto podemos señalar que, es cierto que algunos de los citados organismos no gubernamentales de alguna manera aprovechan su participación y apoyo a la justicia de paz como una de las formas de obtener la cooperación nacional e internacional, justificando parte sus proyectos con la justicia de paz. Por ello no siempre las intenciones de cooperación es acorde con las reales necesidades del Juez de Paz, tanto en lo material - que si apoyan de acuerdo a sus posibilidades - así como en lo referente a las actividades de capacitación, actualización y formación de competencias que requieren los jueces de paz para cumplir la función jurisdiccional y por ende la notarial.

Estos organismos no gubernamentales en algún momento rebasaron el control y coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y las Cortes Superiores con relación a los jueces de paz. Se dieron algunos casos que dichas entidades realizaban convocatorias para talleres y cursos para dichos jueces, los temas de la capacitación, el lugar donde se realizaría, sin coordinar con la organización judicial. Contar con los recursos económicos para ello les ha permitido estos excesos, así como emitir pronunciamientos y comunicados sobre temas relacionados a la justicia de paz, por ejemplo cuando se discutía sobre el proyecto de ley para la elección del Juez de Paz.

Si bien es cierto que a partir del año 2006 la ONAJUP cuenta con una oficina de personal de apoyo, con proyectos de capacitación, centralización de la misma, todo ello en coordinación con las ODAJUP de los 31 Distritos Judiciales, además de contar con el apoyo financiero internacional del Banco Mundial mediante JUSPER y con recursos del Poder Judicial, también es cierto que éstos se ha invertido en la capacitación de los Jueces de Paz solo para un sector de ellos.

Como parte del trabajo de investigación, se ha realizado una encuesta a los señores Jueces de Paz de los 4 distritos judiciales involucrados, respecto al número de actividades de capacitación realizados, esto es talleres y capacitaciones en las que han participado durante los años 2010, 2011 y 2012. En la realización de la citada encuesta, en el Distrito Judicial de Huancavelica, el mayor número de actividades ha sido realizado por la Corte Superior, en los demás distritos judiciales con el apoyo de los responsables de la ODAJUP de cada Corte Superior.

Como se evidencia de la encuesta, casi la cuarta parte de los jueces de paz encuestados no han tenido la oportunidad de participar en un evento de capacitación en el ejercicio de su cargo. Como es notorio, sin tener conocimiento de la normatividad y trámite que corresponde a la función notarial, un total de 58 Jueces de Paz han ejercido la función notarial lo más probable con las dificultades del caso, con la posible contravención de la normatividad legal en dicha función, acaso hasta con algún perjuicio de terceros y con afectación de la seguridad jurídica.

En las entrevistas que se ha sostenido con dicha instancia judicial, especialmente con los Jueces de Paz de Huancavelica, en las ocasiones que he participado en sus talleres de capacitación, les he preguntado de qué manera vienen ejerciendo la función notarial, si han tenido actividades de inducción. Algunos señalaban que pedían asesoramiento y orientación a los ex jueces de paz, otros solicitan información y orientación a la Corte Superior, mientras que otros aplicaron sus experiencias personales en Notarías o revisando algún material.

De los 200 Jueces de Paz que lograron ser capacitados conforme a la encuesta, podemos establecer que 91 Jueces de Paz, tuvieron la oportunidad de participar en una (01) sola oportunidad. Ello preocupa ya que no es lo suficiente ni conveniente, es distinto es tratamiento que se da

en la judicatura ordinaria, instancia para la cual está el interés y preocupación para capacitarlos en forma permanente, se cuenta con presupuesto, está la Academia de la Magistratura, capacitaciones en el extranjero y a nivel nacional, lo cual es positivo y resaltante.

Lo señalado en el párrafo que antecede no se da en el caso de los Jueces de Paz, no tienen las mismas facilidades, no hay política institucional sostenida en dicho aspecto, muchos de éstos jueces de paz han ejercido el cargo por 3 años, otros por 2 años conforme a lo establecido en la Ley No. 28545, por ello participar en una sola capacitación no es suficiente para cumplir la función jurisdiccional, menos la función notarial.

De un total de 200 Jueces de Paz capacitados, un 35 % de ellos, esto es cerca de 70 jueces de paz fueron capacitados en 2 ocasiones; mientras que un 12 % es decir 24 jueces de paz tuvieron la oportunidad de participar en tres eventos de capacitación o talleres en sus respectivas Cortes Superiores. De otro lado, solamente 8 jueces de paz que viene a ser el 4 %, fueron capacitados en 4 ocasiones, mientras un 1 %, fueron capacitados en 5 eventos, es decir sólo 02 jueces de paz. Finalmente un 2 % de ellos, esto es 4 jueces de paz fueron capacitados en 6 eventos.

Esta disparidad en el número de capacitaciones en las que participa el Juez de Paz se debe a diversos factores, entre ellos el geográfico por lo accidentado de la región andina, la falta de vías de comunicación, en algunos casos por lo apartado de los pueblos y comunidades, algunos no reciben oportunamente la invitación o documento con las que se citó para que participe en un evento de capacitación.

En caso de recibir la invitación con anticipación, otra dificultad para el Juez de Paz es el traslado desde su comunidad a la sede de la Corte

Superior en la fecha señalada para la capacitación. Al residir en lugares lejanos, en ocasiones no se cuenta con las facilidades de transporte para llegar a las ciudades donde se llevan a cabo los eventos de capacitación, en muchos casos a pesar de que el Juez de Paz pueda tener interés para ser capacitado y entrenado en la función judicial.

Otro factor que impide la participación del Juez de Paz en las capacitaciones es el aspecto económico, el traslado de un lugar a otro implica recursos económicos, tienen que cubrir los gastos de traslado al lugar donde se realiza el evento. Son pocas las ocasiones en las que el Poder Judicial, las Cortes Superiores, los organizadores sufragan los gastos de traslado y retorno, los alimentos. Me consta que jueces de paz al culminar un evento tienen que quedarse en las ciudades alojándose con algún familiar o conocido. Es un problema a tomar en cuenta y adoptar las medidas correctivas del caso.

En los casos que Poder Judicial asigne recursos presupuestarios para la capacitación de los Jueces de Paz dichos montos tienen que optimizarse al máximo. En algún momento se pagó a consultoras y equipos de capacitación de los jueces de paz, para optimizarlo está la posibilidad de organizar y formar en cada Corte Superior un equipo de Magistrados y trabajadores encargados del entrenamiento y capacitación del Juez de Paz, de esa manera se optimizará los recursos económicos al máximo, con la posibilidad de un mayor número de capacitaciones, con la posibilidad del reconocimiento de los gastos personales realizados por el Juez de Paz, su traslado, alimentos, materiales o instructivos, entre otros.

Aparte de lo señalado también es necesario determinar quién o quiénes son las personas o profesionales que capacitan a los Jueces de Paz en temas relacionados a la función notarial. Aparte saber a quienes se les designó como formadores o capacitadores en el citado tema, ello

tiene relación con la necesidad de que en cada Corte Superior se forme un equipo de capacitación con dicho fin, con cierta permanencia en el tiempo, con experiencia en determinados temas, con lo que se evitará la improvisación de los temarios a desarrollarse en el entrenamiento y capacitación para la judicatura de paz.

Conforme se aprecia del anexo No. 8, del total de la muestra que se toma en cuenta en la presente investigación (258), un número de 48 jueces de paz; es decir el 18.6 % de ellos han sido capacitados con la participación de un Notario Público, lo cual es un avance toda vez que la capacitación estuvo a cargo de un profesional que conoce y ejerce dicha función, mucho mejor si tiene interés en la judicatura de paz, mientras que 210 (81.4 %), jueces de paz señalan que no han tenido la oportunidad de ser capacitados por un Notario Público.

Los que no han tenido la oportunidad de ser entrenados o capacitados por un Notario Público son un total de 74 jueces de paz encuestados quienes señalan que, han sido capacitados por un Juez del Poder Judicial, mientras que 89 personas afirman que no ha sido capacitados por un Magistrado. Un grupo de 89 Jueces de Paz indican que han sido capacitados por un Trabajador del Poder Judicial, en tanto que 169 responden que no han sido capacitados por un trabajador judicial.

De lo señalado antes, en general podemos concluir que los jueces de paz de la región centro andina del Perú, no tienen la oportunidad de participar en las actividades de capacitación: talleres, seminarios, grupos de trabajos y otras modalidades de entrenamiento de capacidades y adquisición de destrezas para el cumplimiento de la función notarial. En primer lugar por el número reducido de capacitaciones necesarias que les permita cumplir la función notarial con conocimiento y solvencia; segundo,

dichas actividades no ha estado a cargo de un Notario, además de temarios no adecuados para la función notarial.

En el caso concreto de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, por diversas razones atribuibles al orden económico, presupuestario y también por la desidia y descuido de las autoridades judiciales que dirigen una Corte Superior, en el año 2010 se realizaron solo 2 capacitaciones, en el año 2011 se realizó un sólo evento (ver anexo 9), cambiando el panorama en el año 2012- como es de apreciarse del anexo 9 -se realizó 7 talleres de capacitación descentralizadas, en lugares lejanos y fuera de la ciudad de Huancavelica, especialmente en zonas rurales, como los realizados en las localidades de Villapampa, San Juan de Castrovirreyna, Viñas, Acobamba, Lircay y Acoria, eventos en los que se convocó a los Jueces de Paz aledaños o cercanos a dichos lugares, dejando de lado el engorroso y dificultoso traslado de las citadas autoridades judiciales hasta la ciudad de Huancavelica.

Es notable que el año 2012 se adoptó cambios en la capacitación, primero fijando el lugar donde se llevaría a cabo las capacitaciones: se eligió el campo, en años anteriores la mayoría de las actividades de entrenamiento se realizaban en la sede principal de la Corte; segundo, se modificó los esquemas tradicionales de los talleres y entrenamiento, la metodología de aprendizaje-enseñanza en los talleres de capacitación.

La experiencia del año 2012 fue muy fructífera en la capacitación de jueces de paz en Huancavelica; podemos concluir que, el equipo de trabajo encargado de dicha tarea fueron Magistrados y servidores de la misma Corte, con el idioma quechua, considerando que la mayoría de ellos, son quechua hablantes, con algunos intervalos musicales, con una metodología más amena y participativa del Juez de Paz y en sus lugares de origen. A pesar del esfuerzo desplegado varios jueces de paz no pudieron acceder a los eventos descentralizados, algunos por

desconocimiento de los eventos, por cuanto las invitaciones no llegaron oportunamente por la accidentada geografía de la región andina, también por la falta de medios de comunicación, algunos pueblos y comunidades donde funciona un juzgado de paz no siempre cuentan con la facilidad de una carretera, a veces el traslado es a pie, factores que de alguna manera dificultan la participación de algunos jueces de paz.

Visto el análisis en lo señalado anteriormente, encontrándose sustentadas las mismas por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de las encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que dice:

H14: Es cierto que los Jueces de Paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17, de la ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones cognitivo-conductual en el ámbito de entrenamiento mediante talleres y capacitaciones para el desarrollo de destrezas y competencias.

4.4.2.5. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ESPECÍFICA CINCO.

En nuestro país dentro de la organización e instancias del Poder Judicial, se evidencia dos estamentos o formas de impartir justicia que, de alguna manera son diametralmente opuestos, con diferentes conceptos, procedimientos, valores y normas en el ejercicio y práctica judicial: una es la justicia ordinaria y en segundo lugar la justicia no formal que está a cargo de los jueces de paz.

La justicia ordinaria o profesional conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial está conformado por el Juez de Paz Letrado, el Juez especializado o mixto, el Juez Superior y Juez Supremo, quienes conforme a la Ley No. 29277, Ley de la Carrera Judicial promulgada en el

año 2008⁷⁶) es un profesional del Derecho que para ejercer la Magistratura, previamente ha sido formado en una Facultad de Derecho para obtener el título de Abogado, después de un cierto periodo de ejercicio profesional, al lograr su ingreso a la carrera judicial interpreta y aplica el ordenamiento jurídico de nuestro país.

En ese contexto, mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993 además del Juez de Paz Letrado, se le otorgó competencia al Juez de Paz para el desempeño de la función notarial en el trámite de Otorgamiento de Escritura Imperfecta, Protestos y Legalizaciones previstas en los incisos 1, 2, y 3 del art. 58 de la citada Ley Orgánica, a la fecha dispuesta en la Ley de Justicia de Paz, la Ley de Títulos Valores, en los casos que no se cuenta con un Notario Público o en ausencia de éstos en un determinado lugar que es común en los pueblos andinos.

Generalmente los Notarios Públicos ejercen su función en la capital de la región y las provincias, con excepción de ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo y centros urbanos donde sí es factible ubicar Notarías en los distritos metropolitanos que conforman el área urbana. De igual forma los Juzgados de Paz Letrados en su mayoría su sede están ubicados en la capital de provincia, con la excepción de algunos órganos jurisdiccionales creados en los últimos años ubicados en los distritos de Tantará, Izcuchaca, Acoria, Paucará y Yauli (Huancavelica), Vinchos, Sivia (Ayacucho), Santa Rosa (Apurímac), entre otros lugares, en las que el ciudadano puede acceder a dicha judicatura

Si bien es cierto que existe la percepción del Juez de Paz como si éste fuese un profesional en Derecho, es necesario aclarar que el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo del referido Juez en la práctica no está sustentado en norma legales, su actuación judicial no es

⁷⁶ Ley N° 29277, *Ley de la Carrera Judicial*, publicado en el *Diario el Peruano* el 7 de noviembre del 2008, es la que regula la organización, competencia, deberes, derechos y responsabilidades de la judicatura ordinaria de nuestro país.

formalista ni aplica la normatividad procedimental como lo realiza el juez profesional del Derecho, quien está obligado a observar la normatividad en su labor jurisdiccional, con mayor razón en la función notarial si lo requieren.

En cambio el Juez de Paz no está obligado a dichas formalidades en la resolución de conflictos, su actuación ante los problemas y controversias que resuelve es con equidad y justicia, en algunos casos con la experiencia y permanencia en el cargo tienen un conocimiento general de la legislación nacional con ocasión de las capacitaciones y talleres realizados para la justicia de paz, ordenamiento jurídico que es un marco de referencia que puede ser tomado en cuenta por el Juez de Paz al resolver un conflicto sometido a su competencia.

Es necesario resaltar que, en los últimos años los jueces de paz en las reuniones, talleres y capacitaciones que se realizan de manera esporádica vienen solicitando en forma verbal o mediante solicitudes a fin de que se les provea de textos normativos vigentes: Código Penal, Código Civil, así como otros dispositivos procesales y sustantivos de nuestro país para cumplir su función jurisdiccional.

Ante el pedido del Juez de Paz el Poder Judicial no ha sido ajeno a dicha inquietud, con el apoyo de JUSPER (Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Justicia), en los últimos años, además de apoyar con mobiliario, materiales, escudos, crucifijo, se les viene entregando módulos bibliográficos de normas legales básicos a los Jueces de Paz, quienes previo estudio y conocimiento de las mismas, conforme al grado de formación educativa y cultural que tienen, es un buen aporte, facilita en algunos su actuación en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el ejercicio de la función notarial.

Es claro que la falta de oportunidades de capacitación y entrenamiento para los jueces de paz influye en el desempeño de la función jurisdiccional y notarial. Las autoridades, el servidor público, docente, trabajador y los profesionales requieren de actividades permanentes de actualización tendientes a desarrollar y mejorar habilidades y aptitudes en el desempeño del cargo o función que ejercen; en esa perspectiva el Juez de Paz también necesita contar con ciertos conocimientos y competencias que le permita desarrollar adecuadamente el ejercicio del cargo judicial, para desempeñar la función notarial.

En las capacitaciones que se han realizado en la Corte de Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica con el conocimiento de que, en el ejercicio de la función notarial tienen serias dificultades, éstas tienen que realizarse con una metodología participativa, en la que se aborden sus inquietudes y problemas que afronta el Juez de Paz al ejercer la función notarial, compartir las experiencias positivas, alternativas y soluciones a los casos presentados. En algunos casos el uso del idioma quechua facilitará una comunicación fluida con los jueces de paz, por ello es necesario que el equipo de capacitación maneje dicho idioma lo cual será una ventaja tanto para los formadores y los citados jueces de paz.

Es de resaltar que el año 2007 la ONAJUP con el apoyo del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Justicia JUSPER realizaron eventos de capacitación en todas las Cortes Superiores del país, con un financiamiento presupuestario sustantivo. En el caso de Huancavelica se destinó alrededor de S/.27,000.00 nuevos soles, monto significativo que para utilizarlo se convocó a una licitación pública para que las entidades interesadas participen en la capacitación de los jueces de paz en la región andina antes mencionado.

La iniciativa del órgano de gobierno del Poder Judicial fue positiva, la parte negativa es que las Cortes Superiores no tuvieron participación ni

hubo alguna coordinación con éstas. Los ganadores de la buena pro, en algún caso solicitó el concurso de algunos servidores judiciales para ser expositores, no dio la oportunidad de proponer temas, mucho menos la Corte superior participó en forma activa en los eventos de capacitación. Toda la actividad estuvo a cargo de la empresa ganadora de la licitación que en su mayoría fueron de Lima, Huancayo; entidades privadas que a veces no conocen la realidad, necesidades y la naturaleza de la judicatura de paz andina, se notó improvisación

Por lo señalado, con relación a la función notarial, además de los capacitadores del Poder Judicial deben participar los Colegios de Notarios Públicos de cada región, quienes con su experiencia y especialidad son los más indicados para dicho entrenamiento. La tarea de impartir justicia es de todos, incluido los Notarios Públicos quienes no están en todos los pueblos del Perú, a falta de dichos funcionarios en los pueblos y comunidades de la región centro andina, por las barreras para acceder al servicio notarial es que se ha visto por conveniente facultar el ejercicio de dicha función también al Jueces de Paz.

El Notario Público es el profesional indicado para dar las pautas y necesarias sobre la función notarial que cumplirá el Juez de Paz, las formalidades y trámites en el ejercicio de la citada función, sobre los requisitos y demás exigencias que deben tomar en cuenta los Jueces de Paz al momento de realizar una legalización, en el trámite de una escritura pública imperfecta y otros, especialmente cuando de por medio se aborda sobre derechos personales, patrimoniales y familiares en las que se necesario una actuación ponderada.

Como en toda actividad laboral o profesional es de suma importancia los años de experiencia en el ejercicio de una función, de un cargo público, mejor aún si a ella se agrega las actividades de capacitación, actualización y especialización, son los factores que

conllevarán al buen desempeño de la función, la que en definitiva será óptima, aceptable y por ende reconocida por los usuarios que se beneficiarán del que ejerce la función pública, entre ellos consideramos al Juez de Paz.

La falta de experiencia en la judicatura paz, la no continuidad en el cargo por periodos razonables que le permitan adquirir destreza y habilidades, la falta de un reconocimiento económico, así como su formación educativa y cultural que ostenta, son algunas de las causas o factores por las que los Jueces de Paz de la región centro andina de Perú, no están cumpliendo adecuadamente las funciones notariales facultadas por el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, antes de dicha norma legal, por lo regulado por los art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es de hacer notar que, en el Derecho comparado tenemos el caso de España que también cuentan con jueces de paz, pero ellos no ejercen la función notarial, solamente tiene competencia para faltas penales, casos civiles en las que no pueden sobrepasar los 90 euros (alrededor de 400 nuevos soles). Lo interesante es que también son elegidos en el Ayuntamiento (municipio en el Perú) por un periodo de 4 años que es un plazo razonable para la experiencia en el cargo, aún no haya reelección, con el añadido de que perciben un reconocimiento económico del Estado, a diferencia de Perú que es una función pública gratuita.

Respecto a la experiencia creemos que el Estado, el Poder Judicial plantee la posibilidad de la continuidad en el cargo de juez de paz, para ello creemos que debe darse algún incentivo o ingreso de carácter económico que permita un ingreso al Juez de Paz lo cual es necesario, además del reconocimiento institucional, consideración de la labor prestada para efectos de computo pensionario por servicios prestados al Estado, entre otros beneficios. Con las medidas que se sugiere sobre este

particular puede lograrse que muchos jueces de paz ocupen el cargo no sólo por 2 ó 3 o 4 años, sino por períodos mayores que finalmente redundarán en la función judicial, entre ellas en el desempeño de la función notarial.

Los Jueces de Paz – como personas que son – al igual que los Magistrados y Servidores del Poder Judicial también vienen incurriendo en frecuentes casos de irregularidades, conducta funcional en el desempeño de su cargo, las que se vienen conociendo a través de los medios de comunicación, dicha actuación ha dado lugar a que los jueces de paz, hayan sido quejados por los usuarios, investigados por los órganos de control de la Magistratura: OCMA y ODECMA en las que se tramitan investigaciones administrativas por actuaciones que afectan la ética, dignidad e integridad de la función jurisdiccional.

El trámite de los procesos administrativos es el mismo que se aplica a los Magistrados de carrera conforme está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como por el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Una muestra de ello es que, en el período comprendido desde el año 2010 al año 2012, de la documentación obrante en el Archivo de la Oficina Encargada de la Justicia de Paz de Huancavelica, se tiene que se ha seguido 37 procesos administrativos disciplinarios contra jueces de paz.

Del total de los procesos administrativos tramitados en Huancavelica, 9 de ellas corresponden a conductas funcionales específicamente relacionados con la función notarial. El mayor número de ellas, esto es 7 procesos de investigación disciplinaria tienen relación con legalizaciones y certificaciones que han diligenciado los Jueces de Paz; 2 de ellas relacionadas con el otorgamiento de Escrituras Públicas Imperfectas, en razón de que los jueces de paz quejados no ha dado cumplimiento a lo prescrito en el inciso primero del artículo 58 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial. No se tiene conocimiento de alguna queja o investigación administrativa relacionado con el Protesto de Títulos Valores.

Conforme a las encuestas que se realizan respecto a la legitimidad y reconocimiento del Poder Judicial los resultados no son halagadores, por diversos factores muchos de ellos atribuidas a los mismos jueces de paz, se está perdiendo gradualmente la legitimidad social, el reconocimiento que tienen dentro de la sociedad, todo ello a raíz de la actuación cuestionada de un grupo minoritario de jueces, en las que se incluye también a un sector de trabajadores judiciales que incurren en inconducta funcional que finalmente afecta a la función judicial, que al ser publicitados por los medios de comunicación se ha hecho común que en los sondeos de la opinión pública el Poder Judicial es una de las instituciones con menor porcentaje de aceptación por la ciudadanía.

En la judicatura de paz también viene sucediendo actos similares, actuaciones con falta de valores y principios éticos, sin el compromiso en la función encomendada, actos de corrupción e inconducta funcional en las que vienen incurriendo algunos jueces de paz. El resultado de las actuaciones cuestionadas e investigadas- además de otras sanciones menores- están las Destituciones que durante los años 2010, 2011 y 2012 fueron destituidos 25 Jueces de Paz por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las que continúan dándose en los años siguientes

Este número considerable de destituciones tiene que ser una preocupación para los órganos de gobierno del Poder Judicial, si bien es cierto que, las destituciones de los Jueces de Paz no son muy publicitadas por la prensa, menos conocidas por la opinión pública, también es cierto que no podemos dejar pasar por alto ni desatender una realidad latente, de las causas que dan lugar a la destitución y otras sanciones en el cargo; es necesario el compromiso institucional para que

el sector de la justicia de paz más reconocida y aceptada en el medio social continúe perdiendo la legitimidad y el prestigio ganado.

Estas destituciones son consecuencia de conductas negativas en las que algunos jueces de paz vienen incurriendo, las que se bien dando en forma reiterada a nivel nacional. Es parte de la corrupción generalizada que se da en todas las esferas del sector público, están las denuncias, investigaciones y en muchos casos con sancionados contra las autoridades regionales, locales, del gobierno central y de otros organismos públicos, con el añadido de que estas autoridades y funcionarios son rentados por el Estado, perciben una remuneración a diferencia del Juez de Paz. Está el aprovechamiento del cargo, de recursos y bienes del Estado que han sido confiados para ser administrados e invertidos en beneficio y bienestar de la población.

El caso del Juez de Paz es mucho más clamoroso, es el sector del Poder Judicial que no recibe ninguna remuneración o reconocimiento económico del Estado por la tradición que se mantiene a través del tiempo, la misma legislación establece que la justicia de paz es gratuito como lo está previsto en el art. VI del Título Preliminar de la Ley No. 29824, (antes el art. 70 de la LOPJ así lo disponía); en conclusión, la justicia de paz a pesar de cumplir una función importante dentro de la sociedad en la búsqueda de paz y armonía de los ciudadanos no es remunerada.

Este hecho da lugar a que, los Jueces de Paz reclamen de manera permanente el derecho a percibir un ingreso económico por la función que cumplen; hay autoridades del Estado que no desempeñan una labor trascendente como el del Juez de Paz, sin embargo perciben una remuneración del Estado, como es el caso de los Gobernadores, los Alcaldes y Regidores, los servidores estatales por servicios no personales como seguridad o resguardo, está el caso de los ciudadanos del

Programa Juntos que perciben 100 nuevos soles mensuales, la pensión que se les otorga a personas mayores de 65 años, todo ello a cargo del Estado.

Ante esta situación está el reclamo de los Jueces de Paz quienes señalan que deberían recibir algún ingreso por dedicar su tiempo y esfuerzo en la función jurisdiccional, tiene justificación y razones por lo que es un tema delicado a debatirse en el futuro.

Por estas razones es que algunos Jueces de Paz, si se presenta la oportunidad para realizar una actuación irregular o inconducta funcional, por ejemplo en el cumplimiento de sus funciones notariales, no escatiman en incurrir en un inconductas funcionales, actuación contraria a la ética, con afectación de la dignidad del cargo. Citamos el caso del Juez de Paz de Mazamari del Distrito Judicial de Junín, quien sin tener facultades normadas por nuestra legislación notarial, menos autorizado por la Ley No. 29824 o la Orgánica del Poder Judicial, asumiendo la función notarial participa en el trámite de Otorgamiento de Poder Amplio y General, por la que el ciudadano Carlos Samuel Quispe Manrique otorga poder a favor de Julia Tardillo Sullcaray, a fin de que ésta última lo represente en toda clase de procesos judiciales; lo cierto es que el Juez de Paz no tiene competencia para dicho trámite, pero lo realiza cuando dicho trámite está reservado para el Notario Público.

En el contenido del documento del Poder Amplio y General expedido por el citado Juez de Paz hace referencia en el documento que, para dicha actuación notarial está facultado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, agregando que el documento se faccionó y tramitó sin contar con una Minuta, menos fue registrado en algún libro. La citada actuación no es conforme al ordenamiento jurídico, el Juez de Paz no está facultado para dicho trámite, las motivaciones para dicha actuación son

mayormente de carácter patrimonial (cobro de dinero), amistad u otras razones que influyen para realizar una labor que no les compete.

Lo cierto es que algunos jueces de paz, conforme a su criterio se amplían competencias que no les corresponden. También está el caso de los Jueces de Paz de Arequipa involucrados en cobranzas judiciales, quienes dispusieron que se descuente de la remuneración de efectivos policiales por deudas a entidades financieras. Estas actuaciones cuestionadas en muchos casos los ha generado el mismo Poder Judicial, ya que al realizar capacitaciones y talleres como se evidencia del Folleto o instructivo sobre la Justicia de Paz elaborado con el apoyo de JUSPER (Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú) en la que además de las competencias dispuestas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, el citado folleto señala que el Juez de Paz tiene competencia en transacciones, certificaciones de conducta, sobre la relación convivencial, actuaciones notariales que en realidad no les corresponde; en ocasiones materiales de lectura como el que se hace referencia motiva de alguna manera los excesos y actuaciones irregulares.

En otro documento emitido por la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz del Poder Judicial ONAJUP también con el apoyo de JUSPER, relacionado sobre el Taller de Capacitación para Jueces de Paz, en el rubro de competencias en materia Notarial (⁷⁷), además de las competencias señaladas en el párrafo precedente con las que de alguna se extralimita las competencias del Juez de Paz, en dicho documento incluyen como competencia para que el Juez de Paz actúe como Martillero Público en el remate de bienes del Ministerio del Interior, así como certificar declaraciones juradas, certificados de supervivencia que en definitiva excede la competencia asignada en la función notarial.

⁷⁷Documento publicado por la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz en el mes de Abril del 2008, pág.12

Por estas incongruencias y realidades señaladas es necesario una legislación especial sobre las funciones y competencias en materia notarial para la judicatura nacional, tanto para los Jueces de Paz Letrado, como para los Jueces de Paz, considerando las diferencias cualitativas en lo profesional, capacitación y actualización que reciben los citados jueces, con el énfasis de que el Juez de Paz no está en las mismas condiciones del primero para cumplir en forma adecuada la citada función notarial, delimitar adecuadamente sus competencias es lo más indicado.

A continuación pasaremos a analizar el trámite que realizan los Jueces de Paz en la función notarial, el trabajo directo y cotidiano en dicha función. Uno de los trámites más comunes y frecuentes es el faccionamiento de las Escrituras Públicas Imperfectas con ocasión de la compra venta de bienes muebles e inmuebles conforme a la competencia atribuida por la vigente Ley de Justicia de Paz (antes la Ley Orgánica del Poder Judicial).

De la revisión que he realizado en el acervo documentario de los Juzgados de Paz he advertido que, al realizar dicho trámite los citados Jueces no está cumpliendo con lo previsto en el inciso 1) del art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (con la Ley No. 29824 se denomina escrituras de transferencia). Por dicha disposición legal para el trámite de las Escrituras Imperfectas el Juez de Paz debe llevar un registro, un Libro o un Archivo de la citada actuación; la mayoría de ellos no cuentan con el dicho registro; el único Juzgado de Paz visitado que cuenta con un registro es el Juzgado de Paz de Castrovirreyna que cuenta con el Libro de Escritura Pública Imperfecta en la que el Juez de Paz anota las actuaciones notariales que realiza en dicho rubro.

En los Distritos Judiciales de Ayacucho, Junín y Apurímac por la información de las ODAJUP se sabe que son muy contados los Juzgados

de Paz que lleven dicho Registro. La mayoría de los Jueces de Paz al participar en dicho trámite, la práctica es redactar la Escritura Imperfecta en hojas sueltas, en el membrete está consignado: Escritura Imperfecta de Compra Venta de un determinado bien, mayormente de inmuebles; al final del documento aparece el sello, antefirma y la firma del Juez de Paz.

Por el desconocimiento del trámite no guardan copia, menos registran el trámite realizado, generalmente lo que se estila es entregar la Escritura Imperfecta al interesado, en estos casos es evidente que con posterioridad no podrá obtenerse un duplicado o una copia certificada por lo mismo que no obran en un Registro o Libro como dispone la legislación notarial.

La normatividad de la función notarial prevista en la Ley de Justicia de Paz y la Ley Orgánica del Poder dispone que la Escritura Imperfecta se otorgará previa presentación de una Minuta, documento que es preparado por un Abogado, en base al cual el Notario Público, de igual forma el Juez de Paz Letrado o el Juez de Paz fraccionan la Escritura Pública o la Escritura Imperfecta.

En las zonas andinas el profesional del Derecho - el Abogado - no siempre están al alcance de los ciudadanos, dicha realidad conlleva a que los mismos Jueces de Paz elaboren dichos documentos conforme a su limitada experiencia, a su criterio, muchas veces es sorprendido por los usuarios, sin llevar el registro y generalmente en hojas sueltas que como se señaló los entregan a los usuarios de la función notarial a cargo del Juez de Paz.

La norma legal en mención relacionado a la Escritura Imperfecta, también dispone que el Juez de Paz debe levantar un Acta, la que debe ser firmada por todos los participantes, las que deben ser extendidas en estricto orden cronológico, uno a continuación de otro, sin dejar espacio

libre, para luego devolver la escritura imperfecta a los interesados, debiendo dejar constancia del libro y folio, así como la fecha de inscripción. Como se advertirá, el trámite y actuación tiene que ser similar al que realiza un Notario Público, lo cierto es que dichas formalidades no son cumplidas por los Jueces de Paz, lo están realizando a su manera, como es de entender con los problemas consiguientes.

Lo señalado antes se desprende de la encuesta realizada a los 258 Jueces de Paz respecto a las Escrituras Imperfectas. Como es de verificarse del anexo N° 3 de la investigación, del total de la muestra se tiene que 161 Jueces de Paz que viene a ser el 62.4 % refieren que ellos mismos redactan dicha Escritura Imperfecta, lo más probable sin minuta.

Un grupo de 59 jueces de paz (22.9 %) de los 4 citados distritos judiciales materia de la investigación señalan que, no han redactado o preparado las Escrituras Imperfectas. Mientras tanto 38 Jueces de Paz ; es decir , el 14.7 % afirman que las Escrituras Imperfectas que han suscrito han sido redactados por terceras personas, es decir dichos documentos notariales han sido preparados por personas ajenas a la función del Juez de Paz. Son las Escrituras Públicas Imperfectas preparados por los mismos interesados, por sus Abogados o tinterillos, algunos de éstos llegan a inducir al Juez de Paz a inconductas funcionales con fines no lícitos, buscando aprovecharse de algún bien patrimonial ajeno, afectando derechos e intereses de terceros que desconocen o no participan en los citados trámites de la función notarial a cargo del Juez de Paz.

Estas actuaciones irregulares antes referidas se conocen por los casos judicializados, en su mayoría en la vía penal por presunto delito contra la fe pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad, usurpación de funciones que se les sigue a los Jueces de Paz. Para las referidas actuaciones irregulares están de por medio las personas

inescrupulosas, de mala fe que preparan los documentos de la función notarial, con ellas acuden a un Juez de Paz pidiendo que los firmen, así como impriman los sellos del Juzgado en el documento de Escritura Pública Imperfecta; una actuación judicial en ese sentido es irregular, en muchos casos a cambio de algún beneficio económico para el Juez de Paz, también puede ser por amistad, parentesco y otras motivaciones que puede darse entre la autoridad judicial y el usuario

Con estos documentos irregulares y dudosos, algunos usuarios han obtenido derechos patrimoniales que no les corresponde en perjuicio de terceros; se conoce de procesos judiciales contemplados en el derogado el Código de Procedimientos Civiles del año 1912, como es el caso del Proceso Judicial de Protocolización de Escritura Imperfecta en la vía de proceso no contencioso, los cuales han sido tramitados ante Jueces de Paz Letrados displicentes y descuidados, quienes al declarar fundada la referida demanda, ordenan indebidamente la protocolización a cargo de Notarios Públicos que también se prestan para dichas irregularidades, otorgando al final Escrituras Públicas en las que se reconocen derechos que acaso no les corresponden. Conocidos estos casos se han iniciado procesos administrativos y judiciales contra algunos jueces de paz para el restablecimiento de sus derechos.

Una de las preguntas del cuestionario para los Jueces de Paz relacionados con la función notarial en los lugares donde ejercen su cargo, de la muestra de 258 jueces, respecto del trámite de la Escritura Pública Imperfecta como es de verse del anexo N° 7, 148 Jueces de Paz contestaron que sí realizan dicho trámite notarial delegada a dicha judicatura, mientras que 110 jueces de paz afirmaron que no han realizado dicha labor.

Otra actividad notarial frecuente que realiza el Juez de Paz, tiene relación con el trámite de las certificación de firma y las legalizaciones,

función notarial que está facultado por el inciso 2 del art. 17 de la Ley No. 29824, el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una de las funciones notariales más requeridas en todos los pueblos y comunidades que cuentan con juzgado de paz. Estas legalizaciones son de documentos públicos y privados, Libros de Actas, legalización de DNI, certificación de firmas.

Del total de jueces de paz encuestados (258), un número de 192 de jueces señalaron que sí realizan certificaciones y legalizaciones; mientras que 66 de los nombrados respondieron que no realizan dicho trámite. De otro lado 118 de ellos manifestaron que si certifican documentos, mientras que 64 afirman que no certifican documentos. Lo más común y frecuente en los últimos años es la legalización de Libros de Actas, especialmente de organizaciones sociales, comunales y otras que se va constituyendo en las zonas andinas como ejercicio de su derecho de asociación; mientras que 242 jueces de paz realizan la legalización de libros de actas, mientras que un número de 16 jueces de paz de la referida región andina refirieron no haber legalizado Libros de Actas.

En el trámite de legalizaciones y certificaciones también se conoce de irregularidades incurridas por algunos jueces de paz en el trámite de legalización de documentos, certificación de las firmas de los contratantes. Estas inconductas se dan por ejemplo cuando un Juez de Paz certifica firmas de personas que en la realidad no se han apersonado al Despacho Judicial, en los casos que acuden personalmente los usuarios, no se les pregunta si la firma que se requiere certificar lo reconoce como suya, o en todo caso hacerlos firmar en el documento en presencia del Juez de Paz.

Estos casos se dan por ejemplo cuando de por medio existen obligaciones por pensión de alimentos, pago de nuevos soles, entre otros; el deudor acude ante un Juez de Paz llevando un documento en el que

aparentemente el deudor o deudora afirma que ha honrado la obligación asumido, sin la presencia del acreedor; muchas veces son documentos apócrifos con firma falsificada pero certificada por el Juez de Paz, cuando lo cierto es que a la autoridad judicial no le consta que sea la firma del acreedor, se han dado casos sin la presencia personal en el juzgado de paz, lo cual es una actuación notarial irregular.

Los mencionados documentos cuestionados han sido presentados ante los Juzgados de Paz Letrado, Especializados y Mixtos de los distritos judiciales de la región centro andina, con las que pretenden acreditar el cumplimiento y pago de sus obligaciones, cuando en la realidad en muchos casos no han cumplido, ante la incidencia de estas irregularidades los jueces y auxiliares de la justicia ordinaria tienen que ser más diligentes para detectar dichas irregularidades.

En este orden de ideas, haremos referencia sobre un proceso penal por el delito de falsificación de documentos y falsedad ideológica seguida contra el Juez de Paz de Huando (Huancavelica), Gregorio Magno, Garnica Mendoza, en el Exp. N° 2003-008, a quien se le imputa haber certificado la firma de una demandante por alimentos (madre de menor alimentista) firma que aparece en un documento que acredita supuesto cumplimiento de una obligación alimentaria. Para ello falsificaron la firma de la demandante en la que ésta aparece percibiendo supuestamente 2 montos de dinero por la sumas de 800 y 500 nuevos soles por concepto de pensiones alimentarias devengadas. Lo cierto es que la madre del alimentista en ningún momento recibió dichas sumas de dinero, la firma atribuida no le correspondía, fue falsificada por el demandado.

Lo señalado en el párrafo precedente es una muestra de cómo un Juez de Paz puede incurrir en actuaciones irregulares, muchas veces en perjuicio de menores como el caso descrito, el Juez de Paz fue partícipe

de un fraude procesal, ya que pretendieron sorprender al Juez que exigía el pago de devengados por alimentos. El documento falso y con certificación irregular de firma realizado por el Juez de Paz, una copia de ella también fue presentado por el demandado (inculcado) en un proceso penal que se le había aperturado por el delito de omisión de asistencia familiar como un mecanismo para atenuar su responsabilidad en la que pretendió hacer creer al Juez Penal haber cumplido con su obligación de prestar alimentos a favor de su menor hija.

El mencionado Juez de Paz dentro del proceso penal que se le siguió reconoció expresamente su participación, para atenuar su responsabilidad argumentó haber sido sorprendido por el demandado por alimentos quien era su amigo personal; por los mismos hechos el juez de Paz también fue investigado administrativamente, habiéndose impuesto la sanción de Apercibimiento que no guarda relación con la falta incurrida.

Otros 2 jueces de paz – como es de verificarse en los archivos de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de Huancavelica- también fueron investigados administrativamente por inconducta funcional en la tramitación de escrituras públicas imperfectas, bajo el cargo de no haber dado cumplimiento a las exigencias prescritas en el inciso 1 del art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contiene requisitos ineludibles, las que son de estricto cumplimiento también para el Juez de Paz.

Por lo señalado antes concluimos que, la función notarial asignado a la judicatura de paz, no puede ser realizado de la manera o forma que estime conveniente el Juez de Paz, conforme a su criterio y parecer, como si está facultado en otras competencias previstas en el art. 16 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, función en las que el Juez de Paz no puede resolver el trámite notarial conforme a su leal saber y entender, sin la formalidad ni la fundamentación jurídica como se le exige al Juez profesional o al Notario Público.

En el trámite de una Escritura imperfecta, el Juez de Paz debe llevar un registro especial donde tiene que anotar la fecha de la presentación de la minuta, las generales de ley de los otorgantes del acto o contrato, la identidad de sus cónyuges, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, incluso están en la obligación de realizar una apreciación sobre la capacidad de los otorgantes, quienes deben firmar en presencia del Juez de Paz, además de 2 testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Sin embargo la judicatura de paz no está cumpliendo con la normatividad legal como lo realiza el Notario Público.

Por lo señalado es que se tienen casos de transferencias, escrituras públicas imperfectas de compra venta, faccionados o preparados por los mismos contratantes, redactados a su favor, conveniencia e interés personal, documentos que son llevados al despacho de un Juez de Paz, quien sin haber participado en ella consigna su sello y firma, además de que dicho trámite irregular no queda registrado ni copia en el archivo del juzgado de paz. Cuando posteriormente se solicita una copia no es factible obtenerlas, ya que fue preparado en hojas sueltas por los usuarios, entregados después de la firma a los favorecidos, no queda duda de que no se ha cumplido con las formalidades y exigencias previstas para el otorgamiento de las Escrituras Públicas Imperfectas, en segundo lugar no es posible contar con copias de las mismas, a diferencia de las notarías, en las que otorgan los testimonios que viene a ser una copia de las escrituras públicas.

También se conoce de casos en las que se han interpuesto demandas en la vía civil, como es el caso del ex - Juez de paz del distrito de Tantará - Castrovirreyna del año 1992, en el proceso judicial Exp. 015-2003 seguido por Agripina Gutiérrez de Saldaña sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros, tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima Norte, en razón de que el citado Juez de Paz realizó el

trámite de una Escritura Pública Imperfecta con fecha 7 de Diciembre del año 1992 en que se dispone y se transfiere un bien inmueble (lote de terreno) ubicado en la Asociación de Vivienda Miguel Grau, Zona Norte del Distrito de San Martín de Porres – Lima. Una compraventa realizada en Tantará (Huancavelica), con incidencia sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Lima, con la finalidad de perjudicar el derecho de terceros sobre dicho inmueble.

La actuación irregular del citado Juez de Paz es la de un lugar distinto donde está ubicado el bien inmueble; advirtiendo que el bien inmueble materia de contrato estaba ubicado en Lima, estaba en la obligación de asumir todas las previsiones y cuidado del caso cuando realizó el trámite de la citada Escritura Pública Imperfecta de compra venta, lo cierto es que no cumplió adecuadamente con la función notarial, la actuación irregular generó perjuicios para las partes procesales incluido el mismo Juez de Paz quien fue demandado judicialmente.

En las Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, anualmente se programan Visitas Administrativas y Jurisdiccionales a las Salas Superiores, Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrados en un promedio de 3 a 4 visitas anuales, con la finalidad de verificar, evaluar y adoptar medidas preventivas para la buena marcha y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales ordinarias, sin embargo no están previstos ni regulados dichas visitas de control para los jueces de paz a pesar de que son parte del Poder Judicial.

Por esta razón es que, en las mencionadas Cortes Superiores al indagarse en las Presidencias de Corte así como en las ODAJUP, no se tiene información de visitas programadas en los años 2010, 2011 y 2012, a los juzgados de paz, mucho menos en años anteriores a dicho periodo. Las visitas judiciales son necesarias para conocer la labor que cumplen los jueces de paz, a la vez permite tomar medidas correctivas en ejercicio

de la función y competencias asumidas, las visitas permitirían conocer de manera directa el trabajo de los citados jueces en cada uno de los lugares donde ejercen función jurisdiccional, entre ellas la función notarial.

Se ha revisado los archivos de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz ODAJUP de los 4 distritos judiciales, se averiguó y preguntó también a varios jueces de paz si han tenido la oportunidad de haber sido visitados en sus despachos judiciales por la Presidencia de Corte o por los órganos de control, éstos señalan que no han tenido visitas de control o administrativas, menos conocen de algún cronograma o actividades tendientes para la fiscalización y control de la labor que cumple la judicatura de paz en la región andina.

Para el responsable de la presente investigación, lo que se señala líneas arriba es cierto, toda vez que ejerciendo la Presidencia de Corte en el período 2005 –2006, no se programaron visitas judiciales como las que se realizan periódicamente a los órganos jurisdiccionales ordinarias; aparte de lo señalado, no existe norma administrativa que faculte y posibilite las visitas de fiscalización de los juzgados de paz a pesar de que no está prohibido. Para supervisar los 205 juzgados de paz en Huancavelica, se tendría que contar con un equipo de servidores judiciales para ello, facilidades de traslado y otros medios para visitar y fiscalizar al Juez de Paz, entre ellas sobre la función notarial que cumplen, como se reitera no existe programación alguna por ende no se realiza el control respectivo.

En los 2 años de gestión presidencial antes referidos, a iniciativa personal se realizó un esfuerzo para visitar un buen número de juzgados de paz, en la labor de verificar los archivos de los juzgados visitados respecto a la función notarial se verificó que, mayormente por razones de orden cognitivo, conductual y principalmente por el factor económico de los jueces de paz, algunos de ellos no cumplen adecuadamente con lo

prescrito en el artículo 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, anteriormente el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que se afirma se verificó al requerir el Libro de Actas o el registro en las que debían de obrar las Escrituras Públicas Imperfectas, constatándose que no cuentan con dichos Libros o Actas correspondientes de haber asentado o anotado las legalizaciones y certificaciones que puedan haber realizado dicho Juez de Paz como exige la normatividad legal de la materia.

Por las deficiencias advertidas es que, en los talleres de capacitación se ha incidido y orientado para que los juzgado de paz den cumplimiento de la normatividad especial sobre la función notarial asignada al Juez de Paz, con la finalidad de evitar problemas y dificultades en el trámite de las transferencias de posesión, escrituras Imperfectas, legalizaciones, certificaciones y las demás funciones notariales ampliadas por el ordenamiento jurídico al citado juez.

Lo cierto es que, cada Juez de Paz conforme a su criterio, formación cultural y educativa (el mayor número de ellos solo con educación primaria y secundaria), al momento de ser entrevistados, en las ocasiones que se conversó e intercambió ideas con dicha judicatura, algunos de ellos han reconocido que, en ocasiones actúan en forma contraria a la ley, con las deficiencias del caso fundamentalmente por la carencia de capacitación y entrenamiento adecuado y permanente, a la vez con el compromiso de que se adopte medidas correctivas para evitar procesos administrativos y judiciales que algunos jueces de paz vienen afrontando por las actuaciones irregulares en que han incurrido.

Referente a esta variable durante el desarrollo de la investigación se ha entrevistado a algunos usuarios de la función notarial de Huancavelica, en menor número a los usuarios de los demás distritos judiciales sobre los probables perjuicios que puedan haber sufrido por la

inadecuada actuación del Juez de Paz al ejercer la función notarial, especialmente con los ciudadanos que han formulado quejas contra un Juez de Paz ante los órganos de control, a los usuarios que han demandado judicialmente o denunciado por presunta comisión de ilícitos penales.

Los denunciantes señalan que han sido perjudicados con trámites irregulares, ejercicio abusivo en el trámite de las escrituras públicas imperfectas, actuaciones con las que se les ha afectado derechos reales de propiedad, posesión respecto a predios o inmuebles que eran propiedad de otras personas por la actuación irregular del Juez de Paz, se dan casos de bienes que han pasado al dominio de terceros que no tenían derecho real alguno.

Se conoce de transferencias y compra ventas en las que ha participado un Juez de Paz sin el conocimiento ni participación del propietario o posesionario de un bien, con la colusión de personas irresponsables incluso con la participación de Abogados, con la inobservancia de lo prescrito en el art. 17 de la Ley No. 29824 (anteriormente el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); se sabe de casos en que, una persona se entera que un inmueble de su propiedad, de un bien que ostenta la posesión, de un momento a otro la propiedad o posesión irregularmente ya estaba en manos o en dominio de terceras personas, sin tener éstos derechos ni titularidad del bien mueble o inmuebles.

Para el trámite de la función notarial irregular antes señalado, en la mayoría de los casos han sido obtenidos con documentos dudosos hasta falsos, especialmente por el desconocimiento o en otros casos por mala fe del Juez de Paz que participa en la transferencia, compra venta, además de la actuación dolosa y de colusión de los que celebran el supuesto contrato. Con posterioridad al trámite notarial a cargo del Juez

de Paz “el nuevo propietario” obtiene hasta documentos públicos como una escritura pública, para lo cual algunos logran protocolizar documentos privados de compra venta en el que aparece consignados la firma y sello de un Juez de Paz.

Existen casos en las que el Juez de Paz en realidad no ha tenido la oportunidad de participar en la suscripción de dichos contratos, el trámite los realizó a ruego de terceros y por algún beneficio personal estampan su sello y firma, dando la apariencia como si el Juez de Paz haya preparado el documento cuando en la realidad no ha sucedido ello.

Otra muestra de actuación irregular en la función notarial es cuando los jueces de paz certifican y legalizan documentos y firmas; señalamos como ejemplo los casos en las que supuestamente se cumple el pago obligaciones alimentarias, deudas, en la realidad y fácticamente no han cumplido con pagar dichas obligaciones. Documentos de esa naturaleza fraudulenta han sido ofrecidos como medio de prueba en procesos judiciales de alimentos, obligaciones de dar suma de dinero y procesos penales por el delito de omisión de asistencia familiar.

Estando al análisis en el presente orden de ideas y encontrándose sustentadas todas ellas, por los métodos basados en aplicación y revisión sistemática de encuestas, damos por rechazada la hipótesis nula, aceptando en consecuencia la hipótesis alterna que dice:

H1₅: Es cierto que, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley N° 29824 Ley de Justicia de Paz, por razones del factor conductual, en el ámbito de las debilidades y falta de compromiso.

4.5 RESUMEN DEL ANALISIS, CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS.

De todo lo señalado en el Capítulo IV podemos concluir que, se ha confirmado en su mayoría las hipótesis alternas de la investigación y consecuentemente se concluye que, los jueces de paz de la región centro andina del Perú, no están dando adecuado cumplimiento a la función notarial que les faculta el artículo 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz (antes el artículo 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), por razones de falta de conocimiento y experiencia en la función notarial, así como por razones de orden conductual del referido juez.

Lo señalado en el párrafo precedente es un problema judicial que no ha sido tratado ni estudiado en su real complejidad y contexto; por ello es necesario señalar algunas recomendaciones y sugerencias con relación a la función notarial que cumplen los jueces de paz, de esa manera evitar en lo posible el descrédito y la pérdida de la legitimidad social logrado por dicha instancia judicial, que dichos jueces de paz continúen incurriendo en casos de corrupción e inconducta funcional. Es necesario apoyar las funciones notariales que ejerce la judicatura de paz, en forma integral con capacitación, infraestructura, material logístico, con una legislación adecuada y especializada.

Respecto a la falta de conocimiento y de experiencia que se evidencia en el mayor número de jueces de paz de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, estimamos que debe asumirse la experiencia desarrollado en la implementación de la reforma en la justicia penal. En las Cortes Superiores en las que no se ha implementado el Código Procesal Penal como es el caso de los distritos judiciales que se considera en la investigación, los Jueces de Paz también tienen y asumen competencia en los procesos penales por Faltas Penales los que se tramitan conforme al Código de Procedimientos Penales de 1942 bajo el modelo inquisitivo.

Con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal mediante el Decreto Legislativo N° 957 del 29 de Julio del 2004 ⁽⁷⁸⁾ y su implementación progresiva en las Cortes Superiores de nuestro país, dicha normatividad procesal penal en lo que concierne al proceso penal por Faltas, en la Sección VII del Libro Quinto: De los procesos especiales, el legislador nacional en el art. 482 ha regulado que los Jueces de Paz Letrados conocerán de los procesos por faltas penales.

A la vez la citada norma procesal penal en el inciso 2 del art. 482 del NCPP dispone que, excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado conocerán de este proceso los Jueces de Paz, con la precisión de que “Las respectivas Cortes Superiores fijarán anualmente los juzgados de paz que pueden conocer de los procesos por Faltas”, es decir no todos los jueces de paz asumirán competencia en materia de faltas penales, lo cual es una medida atinada.

La interrogante es: cuál es la razón o motivo para dicha decisión, la razón fundamental es que en el nuevo modelo acusatorio penal está previsto la metodología de las audiencias oralizadas, lo cual implica que los Magistrados tienen que asumir paradigmas y prácticas judiciales basados en la oralidad, distinto al modelo inquisitivo que se tramita con el Código de Procedimientos Penales, con los clásicos expedientes, excesiva formalidad, lentitud y hasta generadora de impunidad.

Para la metodología de las audiencias orales, tanto las partes procesales, como el Juez deberán contar con destrezas en litigación oral, la teoría del caso, que son herramientas fundamentales en dichos procesos, a no dudarlo el Juez de Paz Letrado por su formación profesional y capacitación no tendrá mayores dificultades. En cambio el Juez de Paz de la región andina no tiene la misma potencialidad ni

⁷⁸Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 25 - 02 - 2005

destreza para asumir el nuevo modelo, ellos no son Abogados, ejercen el cargo por un periodo breve, su formación educativa y cultural no les permite asumir fácilmente el sistema acusatorio oral.

Por ello es que sólo los jueces de paz con aptitud y capacidad pueden asumir el nuevo sistema penal acusatorio, lo cual es una medida adecuada, acorde a la realidad de los jueces de paz de la región andina. El Juez de Paz que no cuenta con el entrenamiento y capacitación necesaria para asumir dicha función penal no podrán asumir competencia en los procesos penales por faltas.

La misma política legal y judicial previsto para los procesos penales por faltas, también debe asumirse para la función notarial a cargo del Juez de Paz, en esa perspectiva es que al expedirse la nueva Ley de Juez de Paz dispone que “las Cortes Superiores, en coordinación con el Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgados de paz que no puedan ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo ⁽⁷⁹⁾ del presente artículo” ⁽⁸⁰⁾, la que por diversas causas no se está implementando.

Lo señalado es una medida adecuada previsto por el legislador nacional teniendo en cuenta la realidad de la justicia de paz en relación a la función notarial; por ello reiteramos que, el Juez de Paz no puede cumplir dicha función conforme a su real saber y entender, tiene que tramitar conforme a la legislación notarial de nuestro país tal como lo ejercen los Notarios Públicos.

⁷⁹ El primer párrafo del art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz (publicado el Diario Oficial el Peruano el 3 Enero 2012) dispone que “En los centros poblados donde no exista notario, el Juez de Paz está facultado para ejercer las siguientes funciones notariales:...”.

⁸⁰ El segundo párrafo del art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, dispone en ese sentido, las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de los juzgados de paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer de citado artículo.

En ese sentido debe existir una política institucional de seleccionar, fijar y señalar qué jueces de paz están en la posibilidad y condiciones de ejercer la función notarial, previa capacitación y entrenamiento adecuado en dicha función. Ha pasado más de un año desde la vigencia de la Ley No.29824, publicado también su Reglamento Decreto Supremo No. 007-2013-JUS el 26 junio 2013, lo cierto es que las Cortes Superiores de Ayacucho, Huancavelica Junín y Apurímac no han cumplido dicha normativa legal, de continuar así lo evidente es que continuarán las dificultades y vicisitudes del Juez de Paz en la función notarial.

De otro lado está la variable de orden conductual, especialmente relacionado al factor económico que en definitiva condiciona e incide para que algunos jueces de paz incurran en irregularidades. Toda persona requiere contar con ingresos económicos para solventar los apremios familiares y personales, ello será satisfecha y factible cuando se cuenta con una actividad laboral por la que perciba una remuneración. Lo real es que muchos jueces de paz de la región andina no tienen la posibilidad de tener empleo o actividad laboral por ende menos una remuneración.

La citada realidad ha generado debate, estudios y propuestas para que los jueces de paz pudieran ser merecedores de un reconocimiento por el Estado con un ingreso económico, una remuneración por la labor jurisdiccional que cumplen. Ante estas iniciativas está el sector que asume la posición de que, la judicatura de paz desde sus inicios y por su naturaleza comunitaria siempre ha sido en forma gratuita, sin percibir ingreso alguno, ellos señalan que debe continuar así, por ello es un tema a evaluar en el futuro.

Otra justificación acaso más razonable es que, no habría presupuesto público disponible para remunerar a más de 5,700 jueces de paz de todo el Perú. Al margen de lo señalado, lo que no se toma en

cuenta es que el Juez de Paz para atender los conflictos que son sometidos a su competencia incluida la función notarial, disponen de una parte de su tiempo, dejan de lado sus actividades diarias, pierden horas de trabajo, atienden en las mañanas, tardes o inclusive en horas de la noche, en esa circunstancia cómo no reconocer dicha labor. La falta del citado reconocimiento a no dudarlo es un factor que también incide para que el Juez de Paz incurra en inconducta funcional, irregularidades, actos de corrupción en algunos casos por apremios económicos, en algunos casos por relaciones de amistad o familiaridad.

Es un derecho constitucional que se reconozca con una retribución toda actividad que implique esfuerzo, dedicación y responsabilidad como la que despliega el Juez de Paz, por ello creemos que en el futuro se viabilice la posibilidad de que dicha autoridad judicial perciba una remuneración del Estado, como lo perciben los demás servidores públicos, autoridades políticas, regionales y locales, entre otros, quienes cumpliendo funciones similares a la judicatura de paz perciben un ingreso económico, igual razón y derecho debe corresponder al Juez de Paz.

La necesidad de contar con un ingreso económico lo expresan los mismos jueces de paz en las ceremonias oficiales en las que participan, en los talleres de capacitación, reuniones oficiales. El anterior Presidente del Poder Judicial Dr. Javier Villa Stein en visita realizada a Huancavelica en enero del año 2009, al escuchar este requerimiento anunció que se gestionará para los citados jueces de paz tengan acceso al Seguro de Salud Integral, una iniciativa y esfuerzo plasmado a la fecha pero no efectivizado para todos, medidas como el señalado permitirá al Juez de Paz y a su familia acceder a dicho servicio de salud.

En conclusión, es muy escaso el número de jueces de paz que en estos tiempos acepten cumplir la delicada labor de impartir justicia, cumplir la función notarial en forma gratuita. No es conforme a la realidad,

los discursos, las afirmaciones públicas cuando se declara que dicha judicatura de paz es la más efectiva, legitimada y rápida, además de gratuita.

No es tan cierto dicha aseveración, la mayor parte de los jueces de paz tratan y buscan obtener algún ingreso económico por la labor jurisdiccional que ejercen, en algunos casos actuando irregularmente. Ante dicha realidad el Estado, los legisladores y las autoridades judiciales están en la posibilidad de implementar en algún momento alguna forma de remunerar económicamente al Juez de Paz como se da con los demás servidores estatales.

En la perspectiva de que el Juez de Paz pueda contar con un ingreso, proponemos que por cada actuación judicial que realice pueda pagarse un arancel judicial mínimo que podría sustentar y apoyar el exiguo presupuesto del Poder Judicial. Hago referencia también al planteamiento de un Juez de Paz de la zona Chopcca (Yauli) quien señaló que, al menos se le pague la suma de S/.100.00 nuevos soles como se les entrega a los beneficiarios del Programa Juntos. A decir verdad, esa suma mínima constituiría desde ya un reconocimiento e incentivo para el Juez de paz, en estos tiempos en las que no todos los ciudadanos de nuestro país tienen una oportunidad laboral que les permita percibir un ingreso económico.

La posibilidad de que el Juez de Paz perciba un ingreso económico como se plantea en los párrafos anteriores, evitará de alguna medida la eventual participación de agentes externos induciendo a los jueces de paz a incurrir en actos de corrupción, las que acepta algunos con actuaciones en las que se evidencia inconducta funcional, falta de valores éticos, a veces generados por algunos usuarios irresponsables o solicitantes de la función notarial, quienes pretenden obtener documentos falseando datos

y personas, certificaciones y legalización de firmas, actos y contratos contrarios a la verdad, contraviniendo la normatividad notarial.

Con la propuesta planteada, deben asumir las funciones notariales solamente los Jueces de Paz que estén con la aptitud y capacidad de ejercerla previa capacitación y entrenamiento, cada Corte Superior debe fijar y establecer los Juzgados para tal fin, con la posibilidad de un ingreso económico permanente. Es posible que los jueces de paz designados no sean muy numerosos, lo que permitiría también una fiscalización fluida y oportuna de los jueces de paz designados para cumplir la función notarial por parte de los órganos de gobierno y control de cada una de las Cortes Superiores

CREACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ LETRADOS Y NOTARIAS.

Una alternativa para mejorar el acceso a la función notarial, es la creación de un mayor número de Juzgados de Paz Letrados en los distritos más poblados de la región andina, cuyos jueces a no dudarlo cumplirán adecuadamente dicha función notarial similar a un Notario Público.

De otro lado, Lima y las ciudades más importantes de nuestro país cuentan con 'Notarías Públicas suficientes a cargo de Abogados con experiencia, quienes brindan un servicio notarial con las garantías del caso, con el cumplimiento de la legislación notarial. En esa perspectiva con el paso de los años, incremento de la población, de conflictos y controversias en materia notarial, urge la creación de un mayor número de plazas para Notarios Públicos en la región andina, en los distritos con mayor densidad poblacional, al que podrían acceder los pobladores de zonas aledañas al distrito, lo cual favorecerá el acceso al servicio de la función notarial en mejores condiciones. Incluso con la posibilidad de un

sistema itinerante a los pueblos cercanos de la sede del Notario Público cada cierto periodo y con costos razonables. Bajo esa posibilidad, el usuario de la función notarial sin duda va a preferir acudir al Notario Público que al Juez de Paz, por la garantía y especialidad del profesional del Derecho.

Finalmente dentro del marco antes señalado, es de relevar también el aspecto económico del servicio notarial, consideramos que es una de las razones o causas por las que algunos ciudadanos del ande peruano prefieren acudir al Juez de Paz. El notariado nacional tiene que evaluar dicho aspecto, el alto costo de los servicios notariales también constituye una de las barreras para acceder a ella. Con costos razonables y alcanzables los usuarios del servicio notarial acudirán al Notario Público, al ver que es un servicio eficiente, con la garantía que brinda y con los trámites dentro del marco del ordenamiento jurídico notarial.

CONCLUSIONES

1. El legislador nacional desde hace varias décadas viene facultando competencia al Juez de Paz para el ejercicio de la función notarial actualmente previsto en el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, antes con el art. 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de otros dispositivos legales como la Ley de Títulos Valores y otras normas, con competencia en: transferencias de posesión, escrituras Imperfectas, protestos de títulos valores, legalizaciones, certificaciones y otros, a falta de notarios públicos en un centro poblado, o cuando éstos se encuentren a 10 Km. de distancia, función notarial delegada que deberán cumplir conforme a las normatividad notarial.

Por lo señalado, los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac también ejercen la función notarial, toda vez que en los centros poblados, comunidades campesinas y pueblos del interior de dichas regiones no se cuentan con Notarías Públicas, además de barreras geográficas, económicas y sociales que dificultan el acceso a dicho servicio notarial.

2. La competencia de la función notarial delegado al Juez de Paz, no pueden ejercerlo conforme a su real saber y entender, con las costumbres, las formas originarias y tradicionales de resolver conflictos en sus comunidades, dicha función tiene que ser dando cumplimiento y observando las exigencias de trámite y requisitos previstos en el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, antes el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Notariado, también la Ley de Títulos Valores y las demás normas de la legislación notarial vigente en nuestro país para el ejercicio de la referida función.
3. Para cumplir la citada función notarial, el mayor número de los jueces de paz de los distritos judiciales de Huancavelica, Junín, Apurímac y

Ayacucho tienen una formación cultural y educativa de nivel primario y secundario, realidad socio educativa que pone en desventaja y en serias dificultades a dichos jueces en el ejercicio de la función notarial previstos en el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz (antes previsto en el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas de la materia, siendo dicha limitación un factor de orden cognitivo, formación educativo-cultural que en definitiva incide y coadyuva a la inadecuada hasta irregular actuación en la función notarial de los jueces de paz.

4. También es causa del inadecuado cumplimiento de la función notarial a cargo del Juez de Paz, la falta de experiencia y continuidad en el cargo; hasta hace pocos años, ellos ejercían un periodo de 2 años con la legislación anterior, a la fecha el cargo es por 4 años, por lo señalado antes la mayoría no han tenido la oportunidad de participar en talleres y capacitaciones permanentes sobre la función notarial. Lo señalado ha generado que los jueces de paz incurran en trámites y actuaciones que contravienen el ordenamiento jurídico, irregularidades e inconducta funcional con la consiguiente responsabilidad administrativa, civil y penal en algunos casos.
5. Las irregularidades e inconductas funcionales en las que han incurrido algunos jueces de paz, en el ejercicio de la función notarial, también tienen motivaciones económicas. Por tradición y la legislación especial desde hace varias décadas se ha normado que el servicio que presta dicha instancia judicial es gratuita; lo cierto es que en estos tiempos los jueces de paz requieren, necesitan y buscan obtener un ingreso económico, por la falta de oportunidades laborales en algunos casos ellos buscan y a veces logran obtener alguna ventaja personal ejerciendo el cargo judicial: Lo real es que, la mayoría de ellos no tienen una ocupación laboral, una fuente de ingreso económico, se dedican principalmente a la agricultura, ganadería de supervivencia, con algunas excepciones.

6. En concreto, la falta de destrezas y conocimientos en la función notarial, las esporádicas capacitaciones y talleres de entrenamiento; la precaria situación económica de los jueces de paz de la región centro andina; la pérdida de valores de algunos de ellos; la inconducta funcional, actuaciones contra la ética y trámites irregulares de algunos jueces en el ejercicio de la función notarial, generadora por la actuación inescrupulosa y de corrupción de los agentes externos (usuarios del servicio) quienes buscan aprovechar dicha realidad judicial para obtener ventajas, todo lo cual redundando en la actuación inadecuada del Juez de Paz en el ejercicio de la función notarial, en algunos casos en perjuicio de terceros, situación que ha dado lugar a que en los últimos años la justicia de paz pierda la legitimidad y prestigio logrado dentro de la sociedad.
7. El Poder Judicial, ni las Cortes Superiores citados no cuentan con una política de control y fiscalización permanente sobre la labor que ejerce el Juez de Paz, menos en la función notarial; por esta razón es que algunos de ellos ejercen dicha función conforme a su criterio y capacidad, a veces en forma inadecuada e irregular, generando mayores controversias y conflictos en el medio social.

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo que antecede, contra algunos jueces de paz se les viene aperturan investigaciones administrativas con diversa sanciones hasta de Destitución; también están procesos judiciales en la vía penal y civil, por los perjuicios que causa el Juez de Paz en el ejercicio irregular de la función notarial a las partes procesales, a terceras personas, menores alimentistas, acreedores, propietarios, posesionarios, entre otros afectados.

RECOMENDACIONES.

1. El Poder Judicial y las respectivas Cortes Superiores de Justicia deben dar cumplimiento efectivo a lo normado en el art. 17 de la Ley No. 29824 Ley de Justicia de Paz, con la participación de los Colegios de Notarios fijando y señalando qué juzgados de paz son los que asumirán competencia en la función notarial, teniendo en cuenta las capacidades, aptitudes, el grado de instrucción y conocimiento de cada Juez de Paz para ejercer dicha función.
2. Los jueces de paz designados para cumplir la función notarial deben ser capacitados y entrenados adecuada y en forma permanente para adquirir destrezas, conocimiento y habilidades para dar estricto cumplimiento a los trámites notariales y requisitos que exige lo normado en el art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz, así como en lo previsto en el art. 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás normas que tienen relación con la función y competencias que se le ha asignado al Juez de Paz en la función notarial.
3. Atendiendo a la circunstancia actual por la que los jueces de paz de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac vienen ejerciendo la función notarial en forma general, conforme a su criterio y parecer, sin observancia de la normatividad legal notarial, existe la necesidad de que sean capacitados y entrenados adecuadamente por las respectivas Cortes Superiores con talleres, actividades idóneas para ejercer dicha función, con ello se evitará perjuicios a terceros, los procedimientos administrativos sancionadores, así como las acciones civiles y penales contra los jueces de paz.
4. La Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), así como las Oficinas Distritales de Apoyo a la justicia de paz (ODAJUP), deben impulsar y brindar apoyo efectivo a la justicia de paz, fiscalizar y evaluar de manera permanente su labor jurisdiccional, en especial en lo referente a la función

notarial, con la verificación de los Archivos de la función notarial, registros, libros, además de promover el cumplimiento estricto del segundo párrafo del art. 17 de la Ley No. 29824, Ley de Justicia de Paz.

5. En las capacitaciones de los jueces de paz en temas relacionados a la función notarial, además de los capacitadores del Poder Judicial, también deben participar los Colegios de Notarios de cada región, los Notarios Públicos quienes por su especialidad y experiencia son los funcionarios más indicados para exponer sobre los alcances y fines de la función de la fe pública, delimitando las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico del caso.

La tarea de impartir justicia, entre ellas la función notarial facultado al Juez de Paz es tarea de todos, en el que tienen que participar los Notarios Públicos como los profesionales que conocen dicha función, con autoridad para dar las pautas, las formalidades, los requisitos a cumplir y demás exigencias que deben conocer los Jueces de Paz al momento de ejercer la función notarial.

6. Para los fines de que la función notarial sea cumplida dentro del principio de la seguridad jurídica, el Estado, el Poder Judicial y el Notariado Nacional deben posibilitar la creación de un mayor número de Juzgados de Paz Letrado; de igual forma, un mayor número de plazas para Notarías Públicas en la región andina, con la posibilidad de que éstos puedan realizar labor itinerante a los pueblos y comunidades aledaños como una forma de facilitar el acceso a un Notario Público.

La posibilidad de que la función notarial a cargo de los Notarios en los pueblos y comunidades del interior de nuestro, brinde un servicio especializado y profesional, con costos que sean asequibles y razonables, teniendo en cuenta las condiciones económicas sociales del poblador de la región centro andina de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

1. ADVOCACY, Revista de la Corte Superior de Justicia de Junín, La Justicia de Paz en el 2005, Huancayo, 2009.
2. BARRERO GARCIA, Camilo, (Editores); Justicia Alternativa. Estudios de Caso. Centro de Investigación y Educación Popular, Ediciones Átropos Ltda., Bogotá D.C., Mayo del 2009.
3. BAZÁN CERDÁN, Fernando; *la Jurisdicción Especial Indígena en al Constitución Política del Perú-1993. Tribuna Libre, Revista de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca*, Enero del 2010, pág. 38.
4. CASTILLO MINAYA, Bertha Verónica, La Justicia de un Juez, Xauxa, Revista Jurídica del MBJ- Jauja, Impreso Teligraf, Jauja, 2009, pág. 44.
5. CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES. CEPES, Derechos Económicos y Conflictos de comunidades Campesinas, Edición CEPES, Huancavelica, Abril 2011.
6. CERIAJUS. Avances en la Implementación de las propuestas planteadas por la CERIAJUS. Sobre el acceso a la Justicia, Lima, Setiembre 2005.
7. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA, Justicia de Paz, Primera Publicación, Moquegua, Diciembre 2009.
8. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA, Justicia de Paz, Segunda Publicación, Moquegua, Octubre 2011.
9. CORREO, Diario de Huancayo, Revista: El Litigante “El Quehacer Notarial”, Huancayo, 01 diciembre 2010.

10. CHIRINOS MARURI, María Esther, Justicia de Paz como Sistema Judicial Alternativo en el Mundo Globalizado. Revista Institucional de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Setiembre 2006, pág. 29 y 29.
11. GUERRA CERRÓN, Mónica Elena; Hacia una Justicia de Paz. Un Asunto de Interés Nacional, Editora Jurídica Grijley, Lima, Junio 2005.
12. GUERRA CERRÓN, Mónica Elena; Una nueva oportunidad para la Justicia de Paz. Diario de Huancayo, Revista: El Litigante “El Quehacer Notarial”, Huancayo, 14 diciembre 2009, pág. VIII.
13. GUERRA CERRÓN, María Elena; ¿De autoridades judiciales a políticas? Revista Jurídica del Diario Oficial El Peruano, Lima 15 Agosto 2006, pág. 6.
14. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL; La Justicia en los Andes; Gráfica Bellido SRL, Lima, Setiembre 2009.
15. MIRANDA CANALES, Manuel J.; Manual de Derecho Jurisdiccional Peruano, Ediciones Jurídicas, Lima, 2008
16. RUIZ, JUAN CARLOS y LA ROSA, JAVIER, Los Jueces de Paz ¿pueden otorgar garantías? Revista Jurídica del Diario Oficial El Peruano, Lima 15 Agosto 2009, pág. 6.
17. SUYANA, Revista de la Oficina de Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, Año I, Número 1, Huancayo, Agosto del 2012.
18. PALMA RIVERA, Dariberto, El Rol del Juez y la Función Jurisdiccional, Normas Legales; Lima, 2009

19. LEDESMA NARVAEZ, Marianella, La intervención notarial del Juez de Paz y la eficacia del documento privado, Dialogo en la Jurisprudencia, No. 57 Jun.2009, pág. 107- 112.
20. LEDESMA NARVAEZ, Marianella, La Justicia de Paz en Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2008.
21. SILES VALLEJO, Abraham, La Justicia de Paz y su labor socialmente conciliadora: Un análisis de Actas de Conciliación, IDL, Lima, 2006.
22. CHUNCA LAMONJA, Fermín, G, La Justicia de Paz en el Perú: Manual para Jueces de Paz, Grijley, Lima, 2008.
23. DONAIRES SANCHEZ, Pedro, Manual del Juez de Paz, Normas Legales, Trujillo, 2004.
24. BRANDT HANS, JUGEN, En nombre de la Paz Comunal: Un análisis de la Justicia de Paz en el Perú, Fundación Friedrich Eber, Lima, 2010.
25. CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, Centro de Investigaciones Judiciales, La Justicia de Paz y el Pueblo, Fundación Friedrich Eber, Lima, 2008.
26. EDITORIAL MERCURIO, Reglamento de Jueces de Paz, La Confianza, Lima, 2008.
27. CENTRO DE INVESTIGACION JUDICIALES, Proyecto regular sobre capacitación de Jueces de Paz, Lima. (s/n) ,2007.
28. MARTINEZ Silvano, Manual y Reglamento de Jueces de Paz, Mercurio, Lima, 2008.

29. FUENTES, Manuel Atanasio, Reglamento de Tribunales de Jueces de Paz y Comercio, con notas y concordancias, Imprenta del Estado, Lima 2003.
30. BALBUENA PALACIOS, Patricia, Mujeres Rurales y Justicia de Paz, Justicia Viva, Lima, 2009.
31. VASQUEZ GARIBAY, Armando, La Administración de Justicia y los Pueblos Indígenas, Justicia y Paz, N° 27 (jul.- dic. 2007) pág. 21.
32. SALAZAR PUENTE DE LA VEGA, Mercedes, Apuntes sobre la Función Notarial, Cusco:(s/n), 2009.
33. PANTIGOSO QUINTANILLA, Manuel, Función Notarial, Regentus, Arequipa, 2007.
34. MIXAN MASS, Florencio, Ética de la Función Notarial, Notarius, No. 7 (2008), pág. 15 – 21.
35. ARDILA AMAYA, Edgar (Coordinador) ¿Adonde va la Justicia de Equidad en Colombia?, Composición Regional, Medellín, Colombia, 2008.
36. SUYANA, Revista de la Oficina de la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, Año II, Numero 2, Huancayo, 04 de Agosto del año 2011.
37. ALLPANCHIS, Justicia Comunitaria en los Andes, Allpanchis, Vol. 1 y 2, No. 59/60 (2010).
38. GÁLVEZ RIVAS, Aníbal, ¿Jueces o Notarios de Paz?., Apuntes para percibir la importancia de la Función Notarial de los Jueces de Paz,

SUYANA, Revista de la Oficina de la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, Año III, Numero 4, Huancayo, Junio del 2010.

39. BALBÍN OLIVERA, Jorge. "Función Notarial del Juez de Paz y el documento privado". Publicación disponible en Internet: <http://www.correoperu.com.pe/correocentro/huancayo/nota.php?id=29733>, consulta: 05/03/11.
40. MUÑOZ, Paula y ACEVEDO, Ángela. "La Justicia Local en Chota y San Marcos, Cajamarca". Lima, Consorcio Projur, 2009.
41. BRANDT, Hans Jürgen. En nombre de la paz comunal. Un análisis de la Justicia de Paz en el Perú. Lima: Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República-Fundación Friedrich Naumann, 2009.
42. DUPRET, Baudouin. "Pluralismo Jurídico, Pluralidad de Leyes y Prácticas Jurídicas", European Journal of Legal Studies. Issue 1, Abril 2010, vol. 1, <http://www.ejls.eu/index.php?mode=present&displayissue=2007-04>.
43. GRIFFITHS, John. "El Funcionamiento Social de las Normas Jurídicas". Derechovirtual.com, núm. 1, Abril-Junio 2011, Lima: Asociación Civil Impulso Legal Peruano, trad. Aníbal Gálvez, disponible en Internet: <http://www.derechovirtual.com>.
44. GUEVARA GIL, Jorge Armando. "Apuntes sobre Pluralismo Legal". Ius et Veritas. Nº 19, Diciembre de 2010, Lima: Asociación Civil Ius et Veritas.
45. GARRIDO CHAMORRO, Pedro, "La Función Notarial, sus costos y sus beneficios", Madrid, Colegios Notariales de España, 2010.
46. JUSTICIA VIVA, "Manual del Juez y Jueza de Paz", Instituto de Defensa Legal (Área de acceso a la justicia), Lima, Agosto del 2011.

47. BRANDT, Hans Jurgen. "Conflictos Principales en la Justicia de Paz y su tramitación". En la Justicia de Paz y el Pueblo. Lima, Fundación Friedrich Naumann, 2002.
48. FAJARDO IRIGOYEN, Raquel: "Apuntes sobre el Artículo 149 de la Constitución Venezolana: Alcances, límites consecuencia y retos", 2011.
49. LOBATÓN PALACIOS, David. "Justicia de Paz. El otro Poder Judicial". Instituto de Defensa Legal. Lima, abril de 2010.
50. YRIGOYEN FAJARDO, Raquel, "El Carácter Pluricultural del Estado y la Nación y la Justicia Indígena/ Campesina" en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/. p. 01
51. MÁRQUEZ CALVO, Jaime. "Rondas y Comités de Autodefensa: Historia y Desarrollo", en "Ronderos: Los Ojos de la Noche. Manual para Promotores de Rondas Campesinas". Segunda Edición Revisada. Instituto de Defensa Legal. Febrero 2010.
52. PASARA, Luis "La Justicia de Paz no Letrada. Diagnóstico". Estudio preparado por encargo del Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo. Lima, 2002 (no publicado). Tomado de Hans Jurgen Brandt, En nombre de la paz comunal. Un análisis de la Justicia de Paz en el Perú. Lima, 2002. Fundación Friedrich Naumann.
53. ROJAS VARGAS, Fidel, "Rondas Campesinas: entre el Derecho Consuetudinario y el error de comprensión culturalmente condicionado". En: Estudios de Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Jurista Editores E.I.R.L. Lima, 2004.

54. SILES VALLEJOS, Abraham, "La Justicia de Paz y su labor esencialmente conciliadora. Un análisis de actas de conciliación". Comisión Europea - Instituto de Defensa Legal. Lima, 2004.
55. TERESA REVILLA, Ana, "La Administración de Justicia Informal en el Perú". Organización de Estados Americanos, Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos.
56. YRIGOYEN FAJARDO, Raquel "Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el pluralismo legal". Publicado en: Revista Allpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59-60 Edición Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto Pastoral Andina.
57. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, "Gente que hace Justicia. La Justicia de Paz", Lima, 2003.
58. PASTOR TAPIA, Saúl Santos, "La Administración de Justicia en los Juzgados de Paz", Monografías: <http://www.monografias.com/trabajos68/administracion-justicia-juzgados-paz-peru/administracion-justicia-juzgados-paz-peru2.shtml#ixzz2HKd7A3fM>.
59. LA ROSA CALLE, Javier: "Acceso a la Justicia: Elementos para incorporar un enfoque integral de política pública" en "Acceso la justicia en el mundo rural", Instituto de Defensa Legal Lima: IDL; Área acceso a la justicia, 2007.
60. LA ROSA CALLE, Javier, "El Acceso a la Justicia en zonas rurales como base para un país inclusivo", en Acceso a la Justicia en el mundo rural: ¿una agenda para construir ¿, Instituto de Defensa Legal, Equipo de Justicia de Paz y Comunitaria. Lima, 2005.
61. GALVEZ RIVAS, Aníbal: "Es la Justicia de Paz una Institución jurídica originaria del derecho peruano", artículo publicado por Justicia Viva email, Instituto de Defensa Legal, Pontificia Universidad Católica del

Perú. N°320, 23 de agosto del 2007. en:
www.iusticiaviva.org.pe/justiciamail/jm0320.htm.

62. MOVIMIENTO MANUELA RAMOS: “Diagnóstico Situacional de la Justicia de Paz Letrada y de la Justicia de Paz”, Informe Final. Abril de 2008. Lima.
63. ARDITO VEGA, Wilfredo, “Cambios Culturales en la Justicia de Paz”, Revista IIDH. Vol. 32-33.2001. Pág. 173-174. Ver en:
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/32/.../pr7.pdf.
64. AQUINO OJEDA, María Elena, La Justicia de Paz Negada. Imprenta Editorial Punto Com, Huancayo 2012.
65. PEÑA JUMPA, Antonio. Barrera de Acceso a la Justicia, y la Justicia Comunal como alternativa en el Perú. En Revista Iuris Omnes, Vol. XIV, No. 4, 2012, Arequipa, página 9 a 25.
66. ARDITO VEGA, Wilfredo, Seminario “Justicia de Paz y Derecho Indígena: Propuesta de Coordinación”, organizado por Fundación para el Debido Proceso Legal y la Fundación Myrna Mack; 12 y 13 Agosto 2004, Ciudad de Guatemala.
67. MONTENEGRO YECKLE, Walter Aníbal. Rondas Campesinas y la Justicia Popular en la Provincia de Cutervo-Departamento de Cajamarca. En la Revista Ipso Iure, año 4, No. 14, Chiclayo, Agosto 2011, página 152 a 177.
68. BALLOON AGUIRE, Francisco. Introducción al Derecho de los Pueblos Indígenas. Defensoría del Pueblo, Lima, setiembre 2003.

69. PODER JUDICIAL. III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural.
Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, 2012.

ANEXOS

INSTRUMENTO DE RECOPIACIÓN DE DATOS. ENCUESTA APLICADA A 258, JUECES DE PAZ DE LA REGIÓN APURIMAC, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCABELICA.

CUESTIONARIO PARA JUECES DE PAZ			
CORTE DE APURIMAC, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCABELICA			
DATOS DE FILIACIÓN:			
Nombre del Juez de Paz:	Juzgado de Paz:		
Grado de instrucción:			
Sexo:	Fecha:		
01 Diga si Ud. ha sido capacitado, o instruido, por los capacitadores de Jueces de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurimac.			
si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
02 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa. Señale quienes han sido sus capacitadores y en cuántas capacitaciones ha participado Ud.			
03 Para que diga si Ud. ¿Ha sido capacitado en lo referente a la Función Notarial que tiene facultado un Juez de Paz.			
si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
04 Diga, si la capacitación en asuntos o funciones notariales ha estado a cargo de:			
Notario Público	<input type="checkbox"/>	Juez del Poder Judicial	<input type="checkbox"/>
Trabajador del Poder Judicial	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
05 ¿Diga Ud. Si en su actuación como Juez de Paz. ¿Realiza la función notarial en los siguientes aspectos?			
Escritura Pública Imperfecta	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

	legaliza firmas:	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
	Certifica documentos:	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
	legaliza libros de actas	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
	otras actuaciones notariales:	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
06	¿Diga Ud. Si por la función notarial que cumple como Juez de Paz, recibe algún pago?				
07	Señale Ud. ¿Cuál es el monto o suma de dinero que cobra, cuando ha realizado o cumplido labores de la función notarial?				
08	¿Qué actividades o taller de capacitación requiere Ud. como Juez de Paz para cumplir adecuadamente la función notarial?				
09	¿Qué sugerencias, ideas o actividades se requieren para el cumplimiento adecuado de la función notarial por el Juez de Paz?				
10	¿Cuándo solicitan la legalización de un documento? ¿Cómo lo tramita Ud.? Narre.				